

An abstract painting in the background of the cover. It features a figure, possibly a person, rendered in warm, earthy tones of orange, yellow, and brown. The figure is set against a vibrant green field, which is painted with visible brushstrokes. The overall style is expressive and textured.

# Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras:

## Desafíos y Avances (2011-2012)



Tegucigalpa, MDC, Honduras  
Diciembre de 2012

# Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras Desafíos y Avances (2011-2012)

ISBN: 978-99926-819-0-9

Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos - SJDH

Sitio web:  
[www.sjd.h.gob.hn](http://www.sjd.h.gob.hn)

Equipo productor de la publicación

Ana A. Pineda H  
Secretaria de Estado

Andrés Pérez, Consultor  
Mario Posas, Consultor

Coordinadora de área de trabajo

Martha Savillón Castro  
Subsecretaria de Derechos Humanos

Equipo Investigador

Andrea Portillo Ramos, Oficial Jurídico  
David Vivar, Asesor en Derechos Humanos  
Roberto López, Asesor en Derechos Humanos  
Nolvia Amador Zúniga, Oficial Jurídico  
David Araujo, Director de Investigación e Informes  
Dirección de Investigación e Informes

Colaboración especial

Lolís María Salas  
Subsecretaria de Justicia  
Rolando Sierra  
Coordinador de la Unidad de Seguimiento a las  
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la  
Reconciliación  
Adán Palacios  
Asesor de la Unidad e Seguimiento a las Recomendaciones de la  
Comisión de la Verdad y la Reconciliación

Fotografías  
Francisco Andino

Diseño de Portada  
Allan McDonald

Diseño y Diagramación  
Eduardo Martínez Dubón

Publicación con el auspicio de:



Foreign Affairs and  
International Trade Canada



© SJDH, Honduras, 2012

Reservados todos los derechos. Esta publicación puede ser reproducida con fines educativos o para llevar a cabo acciones de promoción y protección de los derechos humanos, de forma total o parcial por cualquier medio, sea electrónico, mecánico o fotocopiado o de otro tipo, siempre y cuando se cite la fuente.

Una versión electrónica del informe está disponible en el sitio web de la Secretaría: [www.sjd.h.gob.hn](http://www.sjd.h.gob.hn)

La Secretaría solicita que se le comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar su impacto. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o en su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la SJDH.

Informe sobre la Situación de los  
Derechos Humanos en Honduras  
Desafíos y Avances  
(2011-2012)



# CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	6
MARCO CONCEPTUAL.....	14
A. Los derechos humanos y sus características .....	14
B. Clasificación de los derechos humanos .....	14
C. La responsabilidad del Estado en el cumplimiento y promoción de los derechos humanos y las responsabilidades de la sociedad civil organizada en materia de respeto y promoción de los derechos humanos .....	15
D. Los derechos humanos: exigibles y justiciables.....	16
<b>I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS .....</b>	<b>19</b>
A. Derechos Civiles.....	19
1. Situación de los Derechos Civiles en Honduras .....	19
1.1. Derecho a la vida .....	19
1.2. Derecho a la integridad personal.....	44
1.3. Libertad personal.....	48
1.4. Inviolabilidad de las comunicaciones .....	63
1.5. El derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales. ....	63
B. Derechos Políticos.....	65
1. Situación de los Derechos Políticos en Honduras .....	66
1.1. Las elecciones generales de noviembre de 2009 y el inicio del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa	66
1.2. Elecciones primarias e inscripción de nuevos Partidos Políticos .....	67
1.3. Las elecciones primarias del 18 de noviembre de 2012 .....	68
1.4. recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el ámbito político electoral.....	69
<b>II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES .....</b>	<b>71</b>
A. Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.....	71
1. Derecho al trabajo y condiciones equitativas y satisfactorias en el empleo.....	71
1.1. Desempleo abierto, subempleo y la PEA en el sector formal e informal .....	72
1.2. Orientación y formación técnico profesional .....	74
1.3. Política de empleo.....	75
1.4. Salario mínimo .....	76
1.5. Disparidades salariales según nivel educativo y género.....	78
1.6. Condiciones satisfactorias de trabajo .....	79
1.7. Situación de convenios internacionales relacionados con este derecho .....	81
2. Libertad sindical .....	81
3. Derecho a la seguridad social.....	83
3.1. Servicios brindados, riesgos cubiertos y beneficios ofrecidos por el sistema de seguridad social .....	83
3.2. Sectores no cubiertos por la seguridad social y políticas y planes para incorporarlos .....	84
3.3. Situación de convenios internacionales relacionados con este derecho .....	86
4. Protección a la familia, la maternidad y la niñez .....	86
4.1. Medios formales e informales de asistencia a la familia .....	86
4.2. Medidas de protección y asistencia contra la explotación económica y social de la niñez, incluyendo regulaciones y programas sobre el empleo infantil.....	89
4.3. Atención a niños en riesgo social.....	90
4.4. Situación de convenios internacionales relacionados con este derecho .....	92
5. El derecho a un nivel de vida adecuado, a alimentación, a vivienda y a reforma agraria .....	93
5.1. El estándar de vida de la población en general y de los grupos vulnerables .....	93
5.2. El derecho a una alimentación adecuada .....	94
5.3. Derecho a una vivienda adecuada .....	98

5.4.	Reforma agraria.....	100
5.5.	Acceso a la tierra: Proceso de titulación por el Instituto Nacional Agrario .....	101
6.	Derecho a la protección de la salud.....	104
6.1.	Tasa de mortalidad infantil y mortalidad en la niñez.....	104
6.2.	Cobertura de los programas de inmunización .....	104
6.3.	Esperanza de vida.....	105
6.4.	Proporción de la población con acceso a personal sanitario.....	105
6.5.	Proporción de mujeres embarazadas que reciben atención de personal sanitario durante el embarazo y el parto .....	106
6.6.	Existencia de una política de salud en materia de atención primaria, información y educación en salud a la población.....	106
6.7.	Políticas, leyes o prácticas que pueden menoscabar el derecho a la protección de la salud ....	106
6.8.	Existencia de políticas de salud que den atención especial a grupos humanos y sectores geográficos marginados .....	108
6.9.	Políticas gubernamentales de salud relacionadas con ambiente e higiene industrial.....	109
6.10.	Acceso a la protección de la salud de las personas adultas mayores .....	110
7.	Derecho a la educación .....	112
7.1.	Cobertura y gratuidad de la educación .....	113
7.2.	Tasas de analfabetismo y promedio de escolaridad .....	115
7.3.	Existencia de políticas que promuevan el acceso general a la educación .....	115
7.4.	El estatus social y laboral de las y los maestros.....	116
8.	Derecho a participar en la vida cultural .....	117
8.1.	Disponibilidad de fondos para el desarrollo cultural y la participación popular en actividades culturales.....	117
8.2.	Promoción de la identidad y herencia cultural de los pueblos indígenas y negros. ....	119
8.3.	Medidas relacionadas con la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia .....	119
III.	RESPUESTA INTEGRAL A LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS .....	120
A.	Recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal (EPU) .....	120
B.	Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.....	120
C.	La Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. ....	121
1.	Lineamientos estratégicos.....	121
1.1	Seguridad Humana, integra los derechos siguientes:.....	121
1.2	Sistema de Justicia, contiene los derechos: .....	121
1.3	Democracia, desagrega los derechos:.....	121
1.4	Grupos de población, aborda los siguientes grupos de población: .....	122
2.	Proceso metodológico para el diseño de la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos .....	122
3.	Participación ciudadana activa e incluyente .....	122
4.	Sistematización normativa en Derechos Humanos.....	124
5.	Entrega Oficial de la Primera Política Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos .....	124
	CONCLUSIONES .....	125
A.	Derechos Civiles y Políticos.....	125
B.	Derechos Económicos, Sociales y Culturales .....	128
	BIBLIOGRAFÍA SUMARIA.....	132

## PRESENTACIÓN

Con suma satisfacción, presento el “Primer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras: Desafíos y Avances” de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos. Es el Primer Informe de esta novel institución, que se ha colocado en posición de llevar a cabo las amplias funciones que le atribuye su propia normativa y que está llamada a jugar un rol importante en el sistema de pesos y contrapesos en el Poder Ejecutivo.

Se trata, como es conocido, del órgano rector de la política pública del Estado en materia de justicia y derechos humanos. La creación de esta Secretaría de Estado, es la expresión clara e indubitable del compromiso del Gobierno de la República con el respeto y la promoción de los derechos humanos en el ámbito de las demás Secretarías e instituciones del Estado de Honduras y en la sociedad en su conjunto.



He tenido la honra que la titularidad de esta nueva Secretaría de Estado haya sido depositada en mis manos por el señor Presidente de la República, Licenciado Porfirio Lobo Sosa, a quien agradezco su confianza y la oportunidad que me ha brindado al confiarme tan trascendental responsabilidad. Deseo destacar que en mi desempeño, he contado con el apoyo incondicional del Señor Presidente de la República, quien nunca ha condicionado mi hacer o mi decir.

Valoro esta actitud como una clara manifestación de su genuino compromiso con el respeto de los derechos humanos en el país. Soy consciente, por otra parte, que al asumir esta responsabilidad estoy frente al gran desafío de construir una nueva institucionalidad que haga que los derechos humanos se abran camino en nuestra realidad nacional como una tarea al más alto nivel gubernamental. En este sentido, estamos enfrentados al doble desafío del quehacer cotidiano y fundacional de la estructura orgánica, programática y presupuestaria de la Secretaría, y, de atender las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales del Estado hondureño en materia de derechos humanos.

Nuestro quehacer es especializado y eminentemente técnico. Por ello, ha sido necesario seleccionar a todo nuestro personal por oposición, con miras a lograr altos niveles de eficiencia, competencia e integridad que garanticen el buen desempeño y calidad del servicio público ofrecido. Este ha sido un desafío que hemos logrado superar con el mayor espíritu de responsabilidad personal y pública.

Es oportuno recordar que la situación de los derechos humanos, al igual que la creación y el trabajo inmediato de esta Secretaría, se ha desarrollado en un contexto político y social, interno y externo, de grandes retos y dificultades.

Como es de público conocimiento, el Presidente Porfirio Lobo Sosa tuvo que asumir su alta investidura en el marco de las consecuencias generadas por la ruptura del orden constitucional que se produjo el 28 de junio de 2009 que dio lugar a una de las crisis política e institucional más grave de la historia política del país y una de las más agudas polarizaciones de la sociedad hondureña de que se tiene noticia, del aislamiento de nuestro país de la comunidad internacional, de una severa crisis económica, política y social y de un incremento, sin precedentes, de la criminalidad. Frente a estos desafíos, el señor Presidente de la República ha promovido incansablemente la reconciliación de los diferentes sectores involucrados en la confrontación social y ha asumido una actitud de gran responsabilidad y compromiso con los grandes problemas nacionales.

Es de hacer notar que, el primer día de su gestión, el Presidente Lobo, con el compromiso activo del Presidente de la República Dominicana, Sr. Leonel Fernández, facilitó la salida del país, del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Como es conocido, el expresidente Zelaya se mantuvo durante varios meses en las instalaciones de la Embajada de la República de Brasil en el país.

Para buscar la reconciliación nacional, el Presidente Lobo, desafiando la arraigada tradición política de repartir sectariamente las diversas posiciones en el Poder Ejecutivo, logró integrar un gabinete de gobierno de unidad nacional con la participación de miembros provenientes de todos los partidos que concurrieron a las elecciones generales de noviembre de 2009. Esto ha sido un logro singular de la presente administración.

A menos de tres meses de haber asumido la conducción del aparato estatal, el Presidente Lobo logró conformar una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Decreto Ejecutivo Número PCM-011-2010 de fecha trece de abril de 2010 y publicado el treinta de abril del mismo año) con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, identificar los factores que precipitaron la crisis política en referencia y ofrecer recomendaciones para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

A finales del año 2010, el Presidente Lobo decidió crear dos nuevas Secretarías de Estado: la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Desde su creación, la Secretaría que me honro en presidir, ha liderado varias iniciativas o participado activamente en otras, orientadas a la creación de nuevas instituciones, instancias, mecanismos, políticas, leyes y reglamentos, cuya enumeración exhaustiva rebasaría los límites de esta presentación. En su momento, ellas serán objeto de desarrollo en un informe específico de actividades de nuestra institución. Por lo pronto, se señalan las principales áreas de trabajo y de preocupación que la Secretaría ha venido desarrollando durante estos dos años de desafíos y avances.

A sugerencia de esta Secretaría, la Presidencia de la República giró una invitación abierta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, para que las y los diferentes Relatores de los mecanismos y procedimientos especiales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y a los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puedan visitar nuestro país y formular, sin restricción ni molestia alguna, las recomendaciones que crean pertinentes. El Gobierno, por su parte, se ha comprometido, en buena medida a través del trabajo de nuestra

Secretaría, a cumplir de buena fe dichas recomendaciones hasta el máximo de sus posibilidades y recursos. Producto de esta iniciativa, en febrero de 2012, visitó el país, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Igualmente, en abril de 2012, atendiendo invitación del Presidente de la República, visitaron el país una misión de la Relatoría Especial sobre Personas Privadas de Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sub Comité de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, en el mes de agosto se recibió la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección a la Libertad de Opinión y Expresión y en el mes de septiembre se atendió la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía.

La Secretaría también ha liderado los esfuerzos de varias instituciones del Estado para el cabal cumplimiento de medidas y sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal fue el caso de la organización de sendos eventos públicos para el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en los casos de Blanca Jeanette Kawas Fernández y de Servellón García y otros.

En este ámbito, ha resultado de especial relevancia para esta Secretaría de Estado, la formulación y presentación del Informe para el Examen Periódico Universal (EPU) que lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el posterior seguimiento de las 128 recomendaciones presentadas a Honduras. Este proceso ha sido asumido de una forma proactiva adoptando diversos tipos de medida, remitiendo en varios casos anteproyectos de Ley o de reforma a leyes nacionales armonizándolas con los estándares internacionales que han sido preparados y consensuados con la participación, lo más incluyente posible, de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República y con otras Secretarías e instituciones del Estado.

Hemos trabajado, junto con las organizaciones e instituciones competentes en cada ámbito, en la preparación de los informes del Estado de Honduras ante los órganos de vigilancia de tratados internacionales y otras instancias del Sistema Universal de protección a los derechos humanos. En este sentido, la Secretaría se ha comprometido a superar la actual mora y a garantizar que, en adelante, estos informes se presenten en los tiempos prescritos por los correspondientes comités o mecanismos temáticos de relatoría. Así, se han liderado esfuerzos para la elaboración del informe de cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, los informes de cumplimiento de los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía y el de la participación de niños en conflictos armados. Se ha preparado el informe de seguimiento a las recomendaciones del Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños del Secretario General de las Naciones Unidas. Se ha dado respuesta a los cuestionarios enviados por las relatorías especiales, o grupos de trabajo, sobre el derecho a la educación, la libertad de reunión y asociación, los derechos humanos y las empresas transnacionales.



Es oportuno señalar que, como producto del esfuerzo de varias instituciones del Estado, incluyendo el trabajo comprometido de esta Secretaría, Honduras ha depositado ante la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos los instrumentos de ratificación/adhesión de: la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el Protocolo Facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

Como resultado del trabajo conjunto con otras instituciones y organizaciones, y en algunos casos con motivo del seguimiento de las recomendaciones formuladas a Honduras en el Examen Periódico Universal y por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se ha avanzado en: (i) la presentación de los proyectos de reforma de los artículos 117 y 321 del Código Penal para introducir como casos específicos y agravados de asesinato, aquellos crímenes de odio cometidos por razones de sexo, género, religión, pertenencia a pueblos indígenas y afro-descendientes, orientación sexual, origen nacional, ideología y otras condiciones especiales de las víctimas y reforzar el tipo penal de discriminación; (ii) la derogación de la Ley del Estado de Sitio de 1936 aprobada mediante Decreto Legislativo 21-2011 del 7 de marzo y publicado en la edición 32,519 del Diario Oficial La Gaceta del 19 de mayo de 2011; (iii) la presentación de una reforma al artículo 209 y 209 -A del Código Penal para armonizar las definiciones de tipo penal que sobre la práctica inhumana de la tortura establecen los instrumentos internacionales en la materia; (iv) la presentación de un proyecto de reforma al artículo 53 del Código Penal para la sustitución de la pena de multa por trabajos a favor de la comunidad y la adición del artículo 53-A para regular la revocatoria de la conmuta de la pena de multa, el cual se convirtió en el Decreto Legislativo 30-2011, de fecha 29 de marzo de 2011. Su aplicación ha permitido la excarcelación de más de 30 mujeres, a quienes por falta de recursos económicos, les había sido imposible, hasta entonces, pagar sus penas de multa; y, (v) la presentación de un proyecto de nueva Ley de Indultos que proporcionará un marco legal más claro y actualizado sobre este beneficio y la forma de concederlo.

Con miras a la adecuación de la legislación nacional, también la Secretaría ha presentado un anteproyecto de decreto para la primera Ley de Lengua de Señas de Honduras. Este proceso se realizó en conjunto con los propios beneficiarios representados en la Asociación Nacional de Sordos de Honduras (ANSH) y la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH).

Esta Secretaría está convencida que uno de los principales legados que dejará la Administración del Presidente Porfirio Lobo Sosa al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática, será la aprobación, en el año 2013, de la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos.

Durante el año 2011 se monitoreó y/o se realizaron acciones de mediación en 26 conflictos sociales en los sectores agrario, ambiental, laboral, salud, educación, seguridad y de vivienda. Además, se atendió y canalizó a las instituciones correspondientes, 191 denuncias en contra de funcionarios de 38

instituciones del Estado. Durante el año 2012, se monitoreo la conflictividad social del país encontrando 7 tipos de conflictos sociales en los sectores agrario, salud, educación, socio político, socio económico, socio ambiental y seguridad ciudadana. De estos tipos de conflictos se reflejaron 95 reclamos sociales en 33 lugares de Honduras focalizados en 15 departamentos siendo Francisco Morazán y Cortés los que presentaron mayor frecuencia a la conflictividad social. De los 95 reclamos sociales se produjeron 212 manifestaciones o expresiones que van desde la denuncia pública, plantones, toma de calles, carreteras y edificios públicos, suspensiones de labores y marchas entre otros.

Siguiendo un protocolo de intervención en varias fases, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, asumió la coordinación de la respuesta estatal frente al incendio ocurrido el 14 de febrero de 2012 en la Penitenciaría Nacional de Comayagua. Como parte de esta tarea, se dio seguimiento y acompañamiento completo a todas las acciones de las diversas instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que se involucraron en el esfuerzo posterior al siniestro, como fueron, por ejemplo, el reconocimiento de cadáveres, la atención de los sobrevivientes, el acompañamiento a los familiares de las víctimas y las acciones legales y de coordinación procedentes. En este último ámbito, la Secretaría presentó el 21 de febrero una iniciativa en el Consejo de Ministros para la creación de una Comisión Interinstitucional para la prevención y atención de la situación de los centros penitenciarios del país, coordinada por la Secretaría de Seguridad como la responsable de la administración de los Centros Penitenciarios e integrada por Secretarios de Estado y titulares de varias instituciones del Poder Ejecutivo. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y recogida en el Decreto Ejecutivo No. 005-2012 publicado en la edición 32,783 del Diario Oficial La Gaceta del 27 de marzo de 2012.

En este ámbito, nuestra Secretaría ha estado resolviendo la mora, que data de varios años, en las solicitudes de indulto e impulsando otras medidas preliberacionales, en coordinación con las dependencias competentes del sector justicia. Previo dictamen de esta Secretaría, el señor Presidente de la República ha otorgado hasta ahora 51 indultos a favor de personas privadas de libertad en 12 centros penitenciarios.

En materia de proyectos dirigidos hacia la atención de colectivos vulnerables, la Secretaría ha mantenido una política de cooperación con otras instancias del sector público y de la sociedad civil, buscando también el apoyo de la cooperación de los países y organismos amigos, porque entiende claramente que la magnitud de los retos de Honduras en materia de derechos humanos, sólo puede ser enfrentada con un esfuerzo mancomunado y un diálogo activo y permanente con las organizaciones de sociedad civil. En este sentido, podemos informar sobre el Proyecto Piloto de Reinserción Social a Víctimas de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas que se ejecuta en la zona sur del país en el marco de un convenio firmado entre la Comisión contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), la Alcaldía Municipal de Choluteca, el Instituto Nacional de la Mujer y esta Secretaría de Estado. Este proyecto comenzó a ejecutarse a partir del 15 de junio de 2011.

En esta misma dirección, se ha establecido un acuerdo de cooperación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el propósito de lograr la identificación de hondureños y hondureñas no localizados que transitaron las rutas migratorias entre Honduras y Estados Unidos de América. La mecánica de trabajo se basará en la comparación de muestras genéticas de sus parientes en Honduras con la información almacenada en las bases de datos de las y los migrantes no identificados, cuyos restos hayan sido encontrados principalmente en México y Estados Unidos de América.

Es importante mencionar también la reciente suscripción de un Convenio de Cooperación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación para la incorporación en el Diseño Nacional Curricular Básico del sistema educativo formal la asignatura de derechos humanos, prevención de la violencia y el fomento de una cultura de paz así como la creación de la figura de las y los Procuradores Estudiantiles en Derechos Humanos. En esta iniciativa participan entidades de la sociedad civil como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Asimismo, se han celebrado dos convenios de asistencia técnica no financiera. El primero, con la Fundación Trust for the Americas de la OEA, para proveer asistencia a los programas de derechos de la comunidad de la diversidad sexual. El segundo, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) a fin de desarrollar procesos de capacitación en derechos humanos y educación en derechos económicos, sociales y culturales, pudiéndose ampliar a temas de justicia, seguridad, cultura de paz y participación política.

Es parte esencial de la misión de nuestra Secretaría fortalecer las capacidades de las instituciones del sector público, para que el personal de las distintas instituciones del Estado desempeñe sus actividades con respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, en sus respectivas esferas de competencia. Se señalan, a título de ejemplo, algunas de las actividades realizadas en cumplimiento de esta función: En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Católica de Honduras, el Colegio de Abogados de Honduras y la Fundación Konrad Adenauer, se desarrolló durante el año 2011 el diplomado Estado de Derecho y Derechos Humanos, dirigido a miembros de las facultades de Derecho de las dos universidades participantes, del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso Nacional y a operadoras y operadores del sector justicia y derechos humanos. También se han llevado a cabo múltiples talleres para promover la reflexión nacional sobre los desafíos que confronta el país en materia de derechos humanos, se desarrolló el Primer Gran Congreso Nacional sobre Derechos Humanos “Blanca Jeannette Kawas Fernández” en 2011. El Segundo Gran Congreso Nacional sobre Derechos Humanos “José Manuel Capellín Corrada” se llevó a cabo en 2012. En cada uno de los eventos asistieron más de 1,000 personas entre servidores públicos, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación social, organismos y países amigos cooperantes y participantes independientes.

Con instrucciones del señor Presidente de la República, me tocó, en mi condición de titular de la Secretaría, preparar y presentar iniciativa en el seno del Consejo de Ministros para la creación de la Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (USCVR), la cual fue aprobada mediante Decreto Ejecutivo PCM 071-2011 del 8 de noviembre de 2011. Cuenta con independencia administrativa y funcional, esta Unidad está adscrita a la Secretaría de

Justicia y Derechos Humanos a fin de facilitar el apoyo gubernamental e institucional y canalizar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional.

En observancia a lo sugerido por las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, esta Secretaría de Estado, realizó, en diciembre de 2011, un acto público de reconocimiento a la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos en el país, distinguiendo para ello a cinco personas que se han destacado en esta tarea fundamental para la construcción democrática. Fueron ellas: el Dr. Juan Almendarez Bonilla, Presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Abog. Oscar Aníbal Puerto, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER), la señora Leonarda Martínez, Directora de la Casa Hogar Esperanza, el Rev. Ovidio Rodríguez, Sacerdote de la Iglesia Católica reconocido por el desarrollo de obras sociales y a la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, como una homenaje póstumo a su luminosa trayectoria. En un acto especial también se reconoció la labor de la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Abog. Sandra Ponce. En el año 2012 se continuó visibilizando la importante labor que realizan las y los defensores de derechos humanos, reconociendo la trayectoria del Director Ejecutivo de Casa Alianza José Manuel Capellin, en cuyo honor se denominó el Congreso Nacional de Derechos Humanos en el mencionado año, a Andrés Pavón actual Director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), José Zambrano, Presidente de la Asociación para una Vida Mejor de personas infectadas y afectadas por el VIH/SIDA en Honduras (APUVIMEH), Dolores Valenzuela, Presidenta de la Asociación de Periodistas y Ambientalistas de Honduras y un homenaje póstumo al Abogado Dionisio Díaz.

A pesar de su corto tiempo de funcionamiento, la Secretaría se ha convertido en un referente técnico en materia de derechos humanos. Hemos promovido activamente el respeto y cumplimiento de los derechos humanos por parte de otras Secretarías e instituciones del Poder Ejecutivo y de otros órganos del Estado a través de la emisión de dictámenes sobre la compatibilidad de leyes, reglamentos, acuerdos, manuales o proyectos con la Constitución de la República y los instrumentos internacionales en esta materia. También, la Secretaría ha atendido diversos pedidos de información de organismos internacionales de derechos humanos.

Este Primer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras aspira a dotar de identidad al instrumento que, de aquí en adelante, será un referente del trabajo de nuestra Secretaría y de la situación de los derechos humanos en el país. Esta identidad se fundamenta en el reconocimiento de la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos y en la constatación apegada a la realidad objetiva de las violaciones que se cometan contra los mismos. Está lejos de nuestro ánimo convertir este instrumento en vehículo de propaganda o de defensa a ultranza de posturas oficialistas incongruentes con los hechos objetivos.

Para la redacción del informe, se ha seguido como guía los lineamientos de los órganos de los dos grandes pactos internacionales en materia de derechos humanos. En cada uno de los derechos estudiados se siguió el patrón de razonamiento siguiente: definir el derecho humano considerado, establecer el estado de situación del mismo a partir del examen de una serie de indicadores de



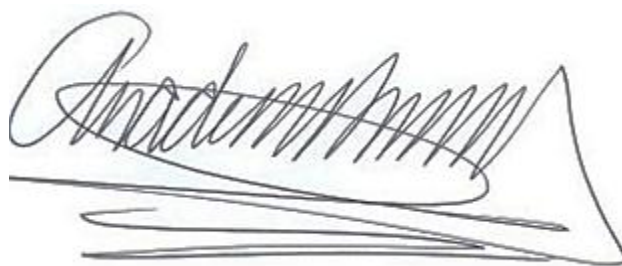
cumplimiento, y, cuando la información estuvo disponible, las medidas que al respecto han tomado los diferentes órganos del Estado. Por tratarse de un informe que desarrolla un panorama general de los fenómenos sociales considerados, el presente informe no contiene una lista detallada de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Se señalarán, eso sí, los nombres de víctimas de casos emblemáticos.

En este Informe hemos tratado de concederle un énfasis especial de derechos económicos, sociales y culturales para compensar una carencia usual en otros informes de naturaleza semejante que han circulado en el país.

Me complace informar a la comunidad nacional e internacional que este Primer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras se enmarca en un proyecto más ambicioso de constituir un observatorio nacional permanente que nos permita recolectar y producir información, no sólo para elaborar informes y estudios de variada naturaleza, sino que sensibilizar y contribuir a la generación de información pertinente para la toma de decisiones por parte de los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. Esto será posible gracias al decidido apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unión Europea, a quienes extendemos nuestro especial agradecimiento por su compromiso permanente con el pueblo y Gobierno de Honduras. Igual agradecimiento para las organizaciones, grupos y sectores de la sociedad civil que han acompañado y participado activamente de los esfuerzos de la Secretaría y para el personal de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por su demostrado profesionalismo, compromiso e integridad para la prosecución de la visión y misión, sin su apoyo no hubiera sido posible llegar al punto donde actualmente estamos.

Creo firmemente que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos nace de la oportunidad que la historia política nos da para construir una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos, muchos son los esfuerzos realizados en esta dirección. Sin embargo, somos conscientes, que aún queda mucho por hacer.

Tegucigalpa, MDC, diciembre de 2012.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ana A. Pineda H.', with a stylized, sweeping flourish underneath.

**Ana A. Pineda H.**  
**Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos**

## MARCO CONCEPTUAL

### A. LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Los derechos humanos son un conjunto de exigencias éticas que deben ser garantizados a todos los seres humanos y por todos los Estados del mundo. Se fundamentan en la dignidad inherente a todos y cada uno de los seres humanos. En consecuencia, ninguna persona puede ser privada de ellos. Sirven como marco de referencia para la organización de la vida social y política y para la construcción de sociedades más justas y equitativas.<sup>1</sup>

Los derechos humanos se caracterizan por ser universales (deben reconocerse a todos los seres humanos), prioritarios (si entran en conflicto con otros derechos, deben ser protegidos en forma preferente), innegociables (no existe ningún argumento que justifique la negación de estos derechos a todos y cada uno de los miembros de una sociedad).<sup>2</sup> Indivisibles (todos los derechos son importantes y están interrelacionados entre sí), progresividad (su existencia no depende del reconocimiento de un Estado, siempre es posible extender el ámbito de la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma, con el tiempo se desarrollan y promueven conforme a las necesidades sociales y una vez que se han gozado de una determinada protección no se puede involucionar) e imprescriptibilidad (no se pierden con el paso del tiempo, al contrario se

fortalecen con el mismo por los procesos sociales que generan nuevos derechos).

### B. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es usual clasificar los derechos humanos atendiendo a tres criterios básicos: i) al sujeto (a) al que se refieren; ii) a su naturaleza, y, iii) por el momento histórico de su reconocimiento legal.

Por el *sujeto (a)* a que se refieren, los derechos humanos pueden clasificarse en derechos individuales, derechos colectivos y derechos de los pueblos, según se refieren a derechos humanos individuales, sociales y de los pueblos.

Por su *naturaleza*, los derechos humanos pueden clasificarse en: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales (DESC) según se refieran a derechos asociados a la libertad individual, el elegir y ser electo y el acceso a empleo, educación, salud y variables relacionadas.

Los derechos civiles y políticos fueron reconocidos por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano emitida por los revolucionarios franceses de 1789 y en las primeras diez enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América en el llamado Bill of Rights de 1791. Fueron universalizados a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en vigor en 1976.

Los derechos económicos, sociales y culturales fueron reconocidos por primera vez con el surgimiento del Estado social en la revolución mexicana y soviética. El Pacto Internacional de

---

<sup>1</sup> Montse Díaz Pedroche, *Los derechos humanos*, pp. 1 y 3. Disponible en <http://montsepedroche.files.wordpress.com/2010/04/derchoshumanos.pdf>

<sup>2</sup> Ibidem, p. 3

Derechos Económicos, Sociales y Culturales que universalizó los derechos económicos, sociales y culturales fue aprobado en 1966 y entró en vigencia en 1976.<sup>3</sup>

Por el *momento histórico* en que surgieron, los derechos humanos se clasifican en derechos de la primera, segunda y tercera generación.

Los de la primera generación, fueron reconocidos por primera vez en el marco de la independencia de los Estados Unidos y de la revolución francesa. Y son los derechos civiles y políticos, también conocidos como derechos individuales.

Como ya se apuntó, los de la segunda generación, fueron reconocidos en el marco de la revolución mexicana y la revolución soviética. Y son los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos como derechos colectivos.

Los de la tercera generación, fueron reconocidos después de la segunda guerra mundial. Son también conocidos como derechos de los pueblos o de la solidaridad internacional.<sup>4</sup>

## **C. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS RESPONSABILIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN MATERIA DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

El responsable primario y fundamental de garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos en un país, es el Estado. ¿Qué hace el Estado para respetar y promover el respeto a los derechos humanos? Como se ha observado, “El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro carácter para reconocer, promover la protección y respeto de los derechos fundamentales. Todas estas medidas apuntan a crear las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de otra índole, así como las garantías requeridas para que toda persona, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades”.<sup>5</sup> Sin embargo, hay instituciones del Estado, como la policía, el ejército, el sistema judicial, que en distintos momentos de la historia latinoamericana han sido objeto de cuestionamientos en materia de violación a los derechos humanos. En este caso, el papel del Estado es evitar que los miembros de estas instituciones cometan abusos y someterlos a judicialización cuando estos se produzcan.

Debería quedar claro que el Estado no es el único responsable del respeto y la promoción de los derechos humanos. El sector privado y las entidades de la sociedad civil, tienen un

---

<sup>3</sup> PNUD, *Informe sobre desarrollo humano*, Editorial Mundi-Prensa, Madrid, 2000, p. 44

<sup>4</sup> Rigoberto Ochoa, *Guía metodológica para el enfoque de derechos humanos en políticas públicas y planes sectoriales*, Sistema de Naciones Unidas, Tegucigalpa, s.f., pp. 10-11

---

<sup>5</sup> Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, 2002, p. 12

importante papel que jugar en esta materia. “El sector privado”, argumentan unos autores, “asume de hecho control de muchas áreas críticas para la vigencia de los derechos humanos. Por lo tanto, al focalizar sólo la autoridad del Estado, no se explica por qué los derechos de las personas no se respetan. Los enormes esfuerzos para la creación de un concepto de responsabilidad social del sector corporativo, en las últimas décadas, deberían servir para ilustrar la necesidad de una discusión acerca de los derechos humanos que incluya y trascienda la dualidad Estado-ciudadano”.<sup>6</sup>

La sociedad civil tiene un papel clave que jugar en el respeto y la promoción de los derechos humanos. “La sociedad civil”, nos explican los autores antes citados, crea y recrea las condiciones para validar y concretizar los derechos humanos. A través de cinco mecanismos básicos: i) ofrecer una esfera de acción para todos los grupos sociales; ii) hacer pública la injusticia y dar voz a los que las padecen; iii) proteger el espacio privado de la interferencia del Estado y del mercado; iv) intervenir e interactuar directamente en los sistemas legales y políticos, y, v) promover la innovación social”.<sup>7</sup>

Sobre el mismo particular, la sección de sociedad civil de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha observado lo siguiente: “Cada día, en todo el mundo, los actores de la sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, grupos confesionales, sindicatos, organizaciones de base y movimientos sociales por mencionar unos cuantos—contribuyen al avance de los derechos humanos. Su meta es

modelar las políticas públicas influyendo y educando a los funcionarios gubernamentales, los políticos, las empresas, las organizaciones internacionales y el público en general, así como a otros actores de la sociedad civil. Los actores de la sociedad civil trabajan igualmente para ayudar a las sociedades en conflicto, dan voz a los indefensos, investigan y monitorean la situación de los derechos humanos y ayudan a las poblaciones vulnerables a hacer valer sus derechos. Trabajan en la promoción de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo”.<sup>8</sup>

Entre los sectores que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito de la sociedad civil, merecen especial mención los defensores de los derechos humanos. El Estado debe protegerlos de la intolerancia de los sectores sociales que continúan viéndolos con aires de sospecha y de recriminación. Como ha sido argumentado, el Estado debe identificar y tratar de remover los obstáculos y las amenazas que ponen en peligro la vigencia y el goce de sus derechos. Debe también tratar de concienciar a la población respecto de la importancia de los derechos humanos para construir sociedades más justas y equitativas y de los miembros de organizaciones de la sociedad civil que ejercen actividades de defensores de los derechos humanos, a través de la educación, la difusión y la capacitación”.<sup>9</sup>

## D. LOS DERECHOS HUMANOS: EXIGIBLES Y JUSTICIABLES

Hay poca duda que los derechos civiles y políticos son exigibles y justiciables. Estamos

<sup>6</sup> Oscar Vilhena Vieira y Scott DuPree, *Reflexión sobre la sociedad civil y los derechos humanos*, pp. 1-2. Disponible en <http://www.surjournal.org/esp/conteudos/artigos-oscar.htm>

<sup>7</sup> Ibidem, p. 6

<sup>8</sup> Sección de la Sociedad Civil de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *La sociedad civil*, Ginebra, s.f., p. 2

<sup>9</sup> Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, 2002, pp. 12-13



hablando de libertades individuales como el derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad de expresión, etc, que forman parte de las garantías constitucionales de los países. Son exigibles judicialmente y su violación acarrea responsabilidades y activa los mecanismos punitivos del Estado.

No sucede lo mismo con los derechos económicos, sociales y culturales, cuya exigibilidad y justiciabilidad ha sido objeto de activa controversia. Cuando estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales estamos hablando de derechos humanos vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas en ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura y el medio ambiente.

Hay, al menos, dos posiciones extremas sobre este particular.

Para algunos estudiosos, las obligaciones vinculadas con los derechos económicos, sociales y culturales deben ser entendidas como meras directivas de política pública dirigidas a los poderes públicos, de tal manera que las posibilidades de judicialización de los mismos son escasas. Para otros, los derechos económicos, sociales y culturales no solo son exigibles sino que también judicializables.

Para los primeros, los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser exigidos y hacerse cumplir a través de sentencias de los tribunales por considerarlos derechos programáticos, es decir, como objetivos o fines de la política social que los Estados están llamados a realizar. En este contexto, es impensable que una persona sin hogar pueda acudir a un juzgado a exigir que se ordene a otros poderes del Estado que se le construya

una casa o que se le dé un empleo porque está desempleado.<sup>10</sup>

Para otros, los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles y justiciables. Para ellos, el Estado puede, por ejemplo, exigir por vía judicial “frenar un desalojo de personas de sus viviendas cuando no se haya cumplido con un debido proceso, determinar que un Estado no ha adoptado una política adecuada para hacer frente a una situación en la que un número importante de personas en situación de exclusión o marginación no pueden acceder a los mecanismos para poder adquirir una vivienda propia; o bien, obligar a una empresa constructora de viviendas a reparar el daño cuando de mala fe haya construido y entregado viviendas de mala calidad a un grupo de personas que forman parte de un programa de créditos de vivienda para personas de escasos recursos”.<sup>11</sup> Según los defensores de esta posición, “El argumento más contundente en favor de la justiciabilidad es que, de hecho, los tribunales están creando más jurisprudencia en relación con estos derechos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a una vivienda adecuada, a la educación y a la no discriminación en los ámbitos sociales. Se pueden encontrar ejemplos en los tribunales de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, India, Letonia, Portugal y Sudáfrica, entre otros. La creciente actividad judicial en materia de DESC indica claramente que esos derechos se prestan a escrutinio y ejecución judicial”.<sup>12</sup>

Una muestra evidente de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, es

---

<sup>10</sup> Espacio DESC, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH-México), *Los derechos económicos, sociales y culturales: exigibles y justiciables*, México,, 2010, pp. 14-15

<sup>11</sup> Ibidem, p. 15

<sup>12</sup> Ibidem, pp. 15-16

la obligación de no regresividad establecida por el Comité de los Derechos económicos, sociales y culturales.<sup>13</sup> “La obligación de no regresividad”, argumentan dos autores, “constituye justamente uno de los parámetros de juicio de las medidas adoptadas por el Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales que resulta directamente aplicable por el Poder Judicial. Desde el punto de vista conceptual, la obligación de no regresividad constituye una limitación que la Constitución de la República y los tratados de derechos humanos pertinentes imponen sobre los Poderes Legislativo y Ejecutivo a las posibilidades de reglamentación de los derechos económicos, sociales y culturales. La obligación veda al legislador y al titular del poder reglamentario toda reglamentación que derogue o reduzca el nivel de los derechos económicos, sociales y culturales de los que goza la población”.<sup>14</sup>

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, adopta una postura intermedia en el contexto de las dos posturas polares enunciadas. Reconoce el rol activo del Estado en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, reconoce también las limitaciones que enfrenta países como los nuestros para poder hacer plenamente efectivos los mismos. Esto es bastante difícil en entornos de alto nivel de pobreza y de crisis fiscal. No obstante, se reconoce que debe avanzar progresivamente en este sentido.

Tres criterios actúan como guía de la política estatal en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Un criterio de equidad, que aconseja brindar el mayor apoyo posible a los colectivos que se

encuentran en situación de pobreza, marginación y desventaja social.

Un criterio de efectividad, que es particularmente relevante en los derechos directamente justiciables, como los referidos a las condiciones de trabajo en el mercado formal, al cual interesa el funcionamiento de los mecanismos administrativos y judiciales que permiten su realización. En cuanto a su aplicación a los derechos de prestación, aquellos que son satisfechos mediante servicios que provee el Estado, o el sector privado, ante necesidades básicas de educación, salud, vivienda y similares, y que, por su misma naturaleza, no siempre cuentan con mecanismos para hacerlos directamente justiciables, el criterio de equidad aconseja investigar si el Estado ha formulado una política orientada a su progresiva realización.

Un criterio de dignidad aconseja verificar si los sectores vulnerables participan o no en los procesos que buscan el mejoramiento de sus condiciones de vida. El ser humano debe ser considerado sujeto, y no objeto, del desarrollo. En esto reside la conexión entre los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, reconocido mediante la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de Diciembre de 1986.

---

<sup>13</sup> Comité DESC, “Observación general número 3 sobre La índole de las obligaciones de los Estados partes” E/1991/23, 1990

<sup>14</sup> Ibidem, p. 40

# I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

## A. DERECHOS CIVILES

Los derechos civiles son inherentes a la persona humana. Tienen por objeto garantizar la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de las personas. Su vigencia depende en buena medida de la existencia de un orden jurídico que los reconozca y los garantice.<sup>15</sup> Su propósito es “evitar que el Estado agrede ciertos atributos del ser humano. Se trata, en esencia, de derechos que se ejercen frente –y aún contra– el Estado y proveen a su titular de medios para defenderse frente al ejercicio abusivo del poder público”.<sup>16</sup>

En materia de derechos civiles, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, a título de ejemplo, que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona” (artículo 2); “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes” (artículo 5); “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley” (artículo 7); “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” (artículo 8); “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (artículo 9); y, “nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la

protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (artículo 12).

## 1. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES EN HONDURAS

### 1.1. DERECHO A LA VIDA

La vida tiene valor en sí misma y tiene valor instrumental. Si a alguien se le priva de la vida, no puede disfrutar de otros derechos humanos. Tener la posibilidad de conservar la vida es el punto de partida y de llegada del disfrute de los derechos humanos en general. El derecho a una vida, digna y decorosa, es el fundamento de los derechos humanos. En consecuencia, el derecho a la vida, su conservación, es el más importante de los derechos civiles que debe ser garantizado por el Estado.

#### 1.1.1. PANORAMA GENERAL DE HOMICIDIOS EN HONDURAS DURANTE LOS AÑOS 2011-2012

La mayor violación contra el derecho a la vida es ser privado de la misma por la vía del homicidio.

Según los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras (UNAH), durante el año de 2011, se cometieron 7,104 homicidios en Honduras con un promedio de 592 homicidios mensuales y 20 homicidios diarios.

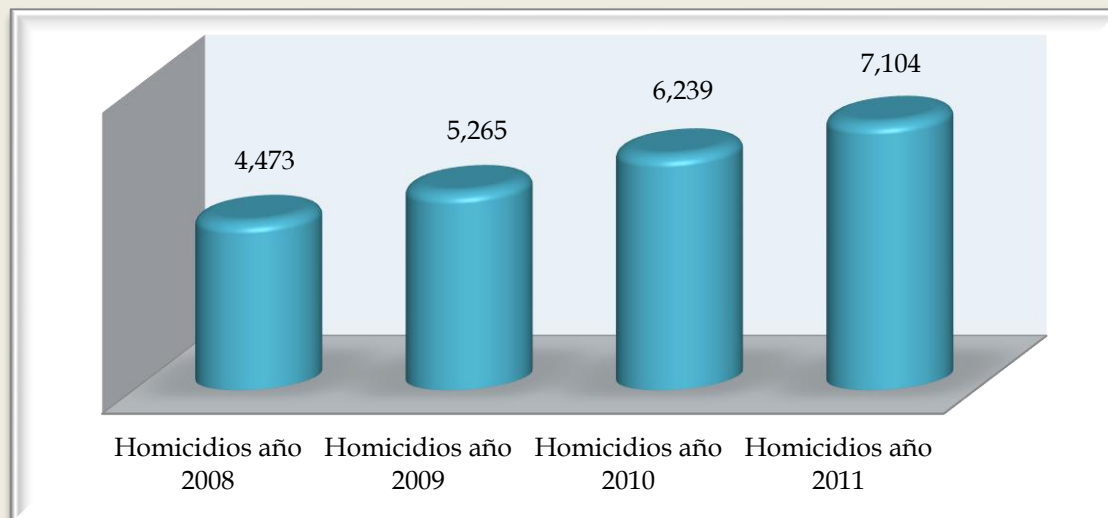
Honduras ha venido experimentando en los últimos años una ola creciente de violencia homicida. Los homicidios se han venido incrementando año con año. Entre 2008 y 2011, hubo un incremento de 2,631 homicidios (ver gráfico 1).

<sup>15</sup> Pedro Nikken, “El concepto de derechos humanos”. Sin número de página. Disponible en: <http://www.iidh.ed.cr/documentos/HerrPed/pedagogicaspecializado/el%20concepto%20de%20derechos%20humanos.htm>

<sup>16</sup> Idem

**Gráfico 1**

Incidencia de homicidios durante los años 2008 al 2011.



**Fuente:** Observatorio de la Violencia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras/  
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (UNAH/IUDPAS).

Según datos del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de los 7,104 homicidios ocurridos en 2011, 5,771 víctimas, o sea el 81.2%, se ubicaron en el rango de edad de 15 a 44 años.

Sin embargo, el grupo de edad más afectado, fue el de 25 a 29 años. El grupo de edad de 15 a 19 años representó el 8.3% del total de los casos. El 84.5% de los homicidios fueron ejecutados con arma de fuego.

El principal móvil de los homicidios fue el ajuste de cuentas. Reflejando una tendencia a nivel mundial, los homicidios afectan más a los hombres que a las mujeres. Del total de 7,104 víctimas de homicidios ocurridos en 2011, 6,592 (93%) fueron hombres y apenas 512 (7%) fueron mujeres<sup>17</sup> (ver gráfico 2).

El empleo de armas de fuego es abrumador en los homicidios registrados. En el 84.6% de los casos de muertes violentas ocurridas en 2011, se empleó arma de fuego. Solamente en el 10.2% de los casos se utilizó arma blanca. Solamente en el 2.4% de los casos se emplearon armas contundentes o contusas.

Para el año 2011, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, fue de 86.5.

Esta tasa coloca a Honduras en la posición de país con la tasa de homicidios más alta del mundo. Le siguen en importancia países como El Salvador (65 por cada cien mil habitantes en 2010) y Costa de Marfil (57 por cada cien mil habitantes en el mismo año).<sup>18</sup> Esta cifra es diez veces mayor que la media mundial reportada por la Organización Mundial de la Salud para el año 2011.

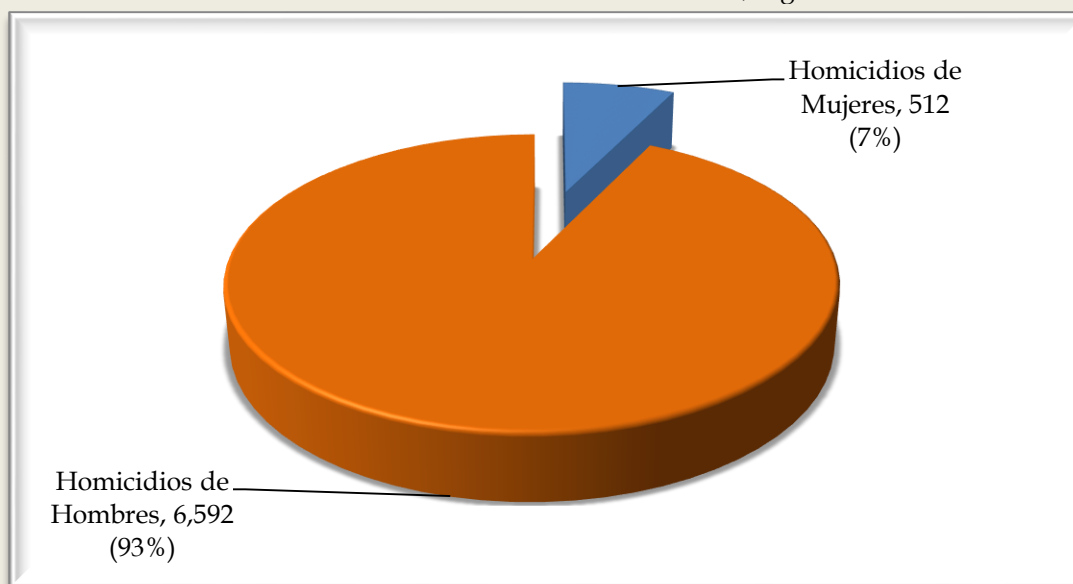
<sup>17</sup> IUDPAS, *Observatorio de la violencia. Boletín*, enero-diciembre, 2011, p. 3

<sup>18</sup> Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), *Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe. Una evaluación de las amenazas*, Viena, 2012, p. 16



**Gráfico 2**

Incidencia de homicidios durante el año 2011, según sexo.



**Fuente:** Observatorio de la Violencia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras/ Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (UNAH/IUDPAS).

Durante los meses de enero a octubre de 2012, los niveles de violencia homicida se mantienen, reportándose 5,579 muertes violentas en el período. Los meses de enero (597), marzo (595) y abril (594) son los que presentan el mayor número de muertes y el domingo es el día de la semana que registra los mayores índices de víctimas (1,194)<sup>19</sup> (ver gráfico 3).

En este contexto, una pregunta es pertinente, ¿A qué se debe este incremento constante del número y la tasa de homicidios en el país? Es difícil decirlo con precisión. No se disponen de estudios detallados que hayan tratado de responder a esta interrogante.

Sin embargo, entre los principales factores que dan cuenta de esta situación, hay que considerar los siguientes: pobreza, desigualdad social, una cultura de resolver conflictos por la vía violenta, el acceso a armas de fuego, la

impunidad y el tráfico de drogas. En este último sentido, por su posición estratégica, Honduras se ha convertido en el paso privilegiado de la droga que viene de los países sudamericanos en dirección a los Estados Unidos de América.

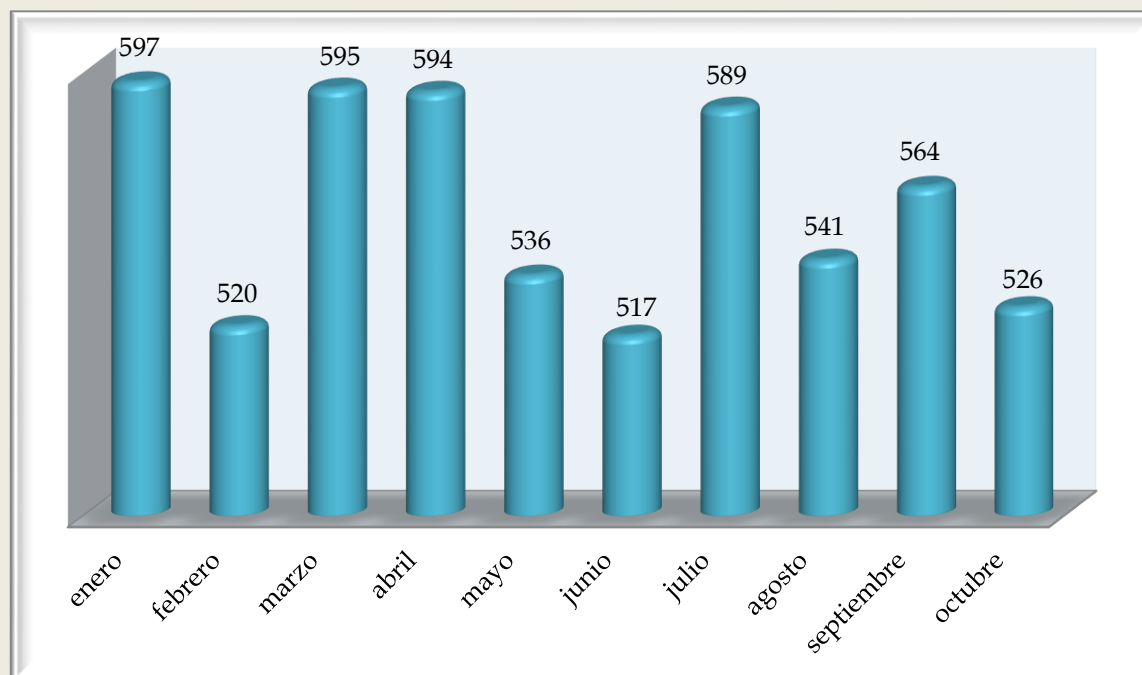
Según un estudio de las Naciones Unidas, Honduras se ha convertido en “el punto de entrada más popular de la cocaína que llega a los Estados Unidos”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Reporte de la Dirección Estratégica de Estadísticas de la Secretaría de Seguridad.

<sup>20</sup> Ibidem, p. 37

**Gráfico 3**

Incidencia de homicidios durante el año 2012.



**Fuente:** Dirección Estratégica de Estadísticas de la Secretaría de Seguridad.

“Aproximadamente 65 de las 80 toneladas transportadas por aire hacia los Estados Unidos aterrizan en Honduras, representando el 15% del flujo de cocaína relacionado a los Estados Unidos. Casi la misma cantidad es trasladada al país por mar”.<sup>21</sup> El tráfico de drogas ha traído al territorio hondureño prácticas asociadas a este negocio como el ajuste de cuentas y el sicariato que han contribuido a aumentar la espiral de asesinatos violentos en el país.

### **1.1.2. PRESUNTAS PRIVACIONES ARBITRARIAS DEL DERECHO A LA VIDA/COLECTIVOS PARTICULARMENTE AFECTADOS.**

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos reconoce que en nuestro país no existe un patrón de homicidios llevados a cabo por órdenes del gobierno o con su complicidad,<sup>22</sup> pero advierte que según las interpretaciones más recientes de los órganos especializados de Naciones Unidas, “la noción de muerte arbitraria se extiende a aquellos casos en que el accionar de fuerzas privadas pudiera haber sido tolerado por algunos agentes del Estado, cuando no se han realizado las investigaciones criminales diligentes ante denuncias de

<sup>21</sup> Idem

<sup>22</sup> Ni la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público y los Relatores Especiales del Sistema Universal e Interamericano que han visitado nuestro país lo han afirmado en sus investigaciones e informes.

homicidios y cuando ocurren muertes de personas bajo custodia en los centros penales, debido a negligencias o a condiciones de detención o prisión atentatorias contra la vida”, por lo que las actuaciones de las autoridades competentes del sector justicia debe ser orientadas hacia la efectividad.

#### **a. Homicidios de profesionales del Derecho**

Por la naturaleza de su profesión, las y los abogados se ubican en medio de personas o grupos en conflicto, abogando a favor de uno u otro. Ello los ha convertido en blanco de la violencia criminal. Es uno de los gremios que ha tenido que pagar un alta cuota de sangre en la ola creciente de homicidios que ha venido azotando el país en los últimos años.

Según datos oficiales, 73 abogados han sido asesinados entre 2004 y 2012.

Del universo de asesinatos, 58 eran hombres y 9 eran mujeres. Todos las y los abogados asesinados de los que se tiene registro, fueron asesinados con arma de fuego. La gran mayoría de las y los abogados asesinados realizaban su ejercicio profesional en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En un acto público realizado el 23 de noviembre recién pasado, el abogado Roy Urtecho, presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras, rindió un homenaje póstumo a las y los abogados asesinados y exigió el cese de la impunidad “en los asesinatos de profesionales del derecho”.<sup>23</sup> he aquí el registro de abogadas y abogados asesinados.

Tres casos emblemáticos de asesinatos de abogados en la segunda mitad del año 2012 fueron los del abogado Antonio Trejo Cabrera, el del abogado Marlo Cerrato Gómez y el del abogado Manuel Eduardo Díaz Mazariegos.

Son bastante ilustrativos de los riesgos que enfrenta el profesional del derecho tanto en el ejercicio privado como de funciones públicas.

Trejo Cabrera fungía como apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y miembro de la Asociación de Abogados “Justicia en Acción” cuando fue asesinado. Fue asesinado por supuestos sicarios que lo atacaron en forma alevosa en la noche del 22 de septiembre de 2012, a pocos metros del templo en que había casado una pareja. El abogado Trejo Cabrera era pastor evangélico.

Cerrato Gómez fue asesinado en la noche del 9 de noviembre de 2012. Fue asesinado cuando se conducía en su vehículo rumbo a su casa acompañado de su hijo de once años, el que también fue herido. La camioneta del abogado asesinado recibió 45 impactos de bala.<sup>24</sup>

Díaz Mazariegos, se desempeñaba como Fiscal del Ministerio Público en el Departamento de Choluteca, cuando fue asesinado a cuadra y media de su oficina, el día 24 de septiembre de 2012.

Este caso cobra particular relevancia por tratarse de un operador de la justicia, cuya función se encuentra tutelada por el Estado a través de las autoridades del ramo, de acuerdo a las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, la cual en el numeral 5 establece: “Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones”.

En la mayoría de los asesinatos, los procesos de investigación no han sido concluidos, por lo que, la Secretaría de Justicia y Derechos

<sup>23</sup> EL HERALDO, 24 de noviembre de 2012, p. 73

<sup>24</sup> EL HERALDO, 10 de noviembre de 2012, p. 56 y LA TRIBUNA, 11 de noviembre de 2012, p. 4

Humanos permanentemente ha instado a los entes responsables a promover procesos eficaces de investigación, enjuiciamiento y sanción.<sup>25</sup>

Debería quedar claro que el asesinato de abogadas y abogados no solo pone en cuestión el derecho a la vida. También pone en entredicho el derecho a la defensa y a un juicio justo.

#### Registro de Abogadas y Abogados muertos violentamente durante el período del 2004 al 2012.

No	Nombre	Fecha	Tipo de arma	Lugar
1	Juan Antonio Romero Rodríguez	25/12/2012	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
2	José Ramón Lagos	22/12/2012	Arma de fuego	El Progreso, Yoro
3	Mario Francisco Pérez	15/11/2012	Asfixia	Tocoa, Colón
4	Marlo Saúl Cerrato Gómez	10/11/2012	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
5	Edgardo Adalid Motiño Flores	03/11/2012	Arma de fuego	Morazán, Yoro
6	Manuel Eduardo Díaz Mazariegos	24/09/2012	Arma de fuego	Choluteca, Choluteca
7	Antonio Trejo Cabrera	22/09/2012	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
8	Julio César Casaleno*	29/08/2012	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
9	Hernán Aplicano Medina	13/07/2012	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
10	Héctor Javier Padilla	04/06/2012	Arma de fuego	El Progreso, Yoro
11	Juan Fernando Erazo Mejía	27/04/2012	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
12	Ramón Benjamín Flores Cubas	03/04/2012	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
13	Marco Antonio Cruz	24/03/2012	Arma de fuego	Siguetepeque, Comayagua
14	José Ricardo Rosales	17/01/2012	Arma de fuego	La Ceiba, Atlántida
15	José Isidro García	22/11/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
16	Benigno Alberto Cerrato Avilés	21/11/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
17	Judith Alemán Banegas	07/11/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
18	Maximo Javier Janser Saravia	28/10/2011	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
19	Alfredo Geovani Moradel Ramos	28/10/2011	Arma blanca	Olancho
20	Ana Mélida Hernández	08/10/2011	Arma de fuego	Olancho
21	Pastor Enrique Guzmán	05/10/2011	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
22	José Enrique Pagoaga Mejía	02/10/2011	Arma de fuego	La Ceiba, Atlántida

<sup>25</sup> <http://www.latribuna.hn/2012/09/25/ddhh-condena-asesinato-de-dos-abogados-en-honduras/>



No	Nombre	Fecha	Tipo de arma	Lugar
23	Denis Javier Muñoz Montoya	14/09/2011	Arma de fuego	Choloma, Cortés
24	José Efraín Aguilar Cárcamo	28/08/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
25	Dora Escalante	16/08/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
26	Denys Esperanza López	08/08/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
27	Juan Carlos García Mariano	03/08/2011	Arma de fuego	Choloma, Cortés
28	María Lastenia Cruz Mejía	07/06/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
29	Raúl Enrique Reyes Cabajal	28/05/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
30	Milton Geovany González Hernández	22/05/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
31	Oscar Cruz Colindres	15/05/2011	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
32	Daysi Elisa Escoto	06/03/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
33	Celso Palma Hernández	28/02/2011	Arma de fuego	El Progreso, Yoro
34	Luis Octavio Caballero	23/02/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
35	Carlos Velasco Laines	22/02/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
36	Carlos Roberto Marroquín Ortega	21/02/2011	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
37	Margoth Irías Miralda	18/02/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
38	Patricia Isabel Patiño	10/02/2011	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
39	Armando Palma Reina	27/02/2011	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
40	José Edgardo Castellanos Lemus	26/11/2010	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
41	José Daniel Alvarado Gómez	05/11/2010	Arma de fuego	Juticalpa, Olancho
42	Edward Clark Martínez Maldonado	04/11/2010	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
43	Marco Antonio Vargas Reyes	27/08/2010	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
44	Marco Tulio Amaya Oviedo	20/07/2010	Arma de fuego	El Paraíso, El Paraíso
45	Óscar Molina	10/06/2010	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
46	Félix Ramón Enamorado	21/05/2010	Arma de fuego	La Ceiba, Atlántida
47	Ubence Rodimiro Ordoñez	11/05/2010	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
48	Ramón Arturo Bueso	09/03/2010	Arma de fuego	Santa Rosa de Copán, Copán
49	Olga Marina Laguna	06/03/2010	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
50	Rossel Barralaga	26/02/2010	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán

No	Nombre	Fecha	Tipo de arma	Lugar
51	Bernardo Rivera Paz*	22/05/2009	Arma de fuego	Santa Rosa de Copán, Copán
52	Yester Saddy Hernández	29/12/2008	Arma blanca	Tegucigalpa, Francisco Morazán
53	Marco Antonio Collier	23/11/2008	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
54	Carlos Javier Salas Montes	10/10/2008	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
55	José Ramón Paz Romero	01/08/2008	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
56	Oscar Heriberto Mejía Villafranca	05/03/2008	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
57	Abelardo Enrique Castro Arita	01/12/2007	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
58	Alejandro Arturo Navas García	14/09/2007	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
59	Alba Leticia Bueso	07/08/2007	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
60	Carlos Villar Rosales	02/08/2007	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
61	Ítalo Antonio Henríquez Gómez	01/02/2007	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
62	Carlos Alberto Mendoza	01/02/2007	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
63	José Reniery Guillén Rodríguez	23/12/2006	Arma de fuego	Guaimaca, Francisco Morazán
64	Efrén Chávez Amaya	20/12/2006	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
65	Dionisio Díaz García	04/12/2006	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
66	Marco Avidán López	27/11/2006	Arma de fuego	Tegucigalpa, Francisco Morazán
67	Oscar Armando Callejas	08/11/2006	Arma de fuego	San Pedro Sula, Cortés
68	Walter Hall Micheletti	26/08/2006	Arma de fuego	El Progreso, Yoro
69	Marco Antonio Tróchez	04/11/2004	Arma de fuego	El Progreso, Yoro
70	Carlos Alfonso Galo	04/11/2004	Arma de fuego	El Progreso, Yoro
71	Carlos Terencio Yanez	04/11/2004	Arma de Fuego	El Progreso, Yoro
72	Carlos Villatoro	04/11/2004	Arma de fuego	El Progreso, Yoro
73	Eduardo Mauricio Leverón Romero	No se encontró información		No localizado

**Fuente:** SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público, Colegio de Abogados de Honduras y Monitoreo de Prensa.\*También era periodista. \*\*También era periodista. No se sabe con exactitud la fecha de su muerte porque fue objeto de secuestro. La fecha que se cita es el día de su secuestro.

## b. Homicidios de periodistas y comunicadores sociales.

El gremio de las y los periodistas y comunicadores sociales ha pagado también una alta cuota en el marco de la violencia homicida que azota al país. Diferentes instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales vienen documentando

muertes violentas de comunicadores sociales desde el año 2003.<sup>26</sup>

Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH y de la Fiscalía General del Ministerio Público<sup>27</sup>, entre enero de 2003 y el

<sup>26</sup>Asesinan a periodista y defensor de los derechos humanos: "...Desde noviembre del 2003 a la fecha, C-libre mantiene en sus registros la muerte violenta de al menos 28 periodistas y comunicadores sociales..."Alerta C-Libre, 7 de mayo de 2012.

<sup>27</sup>Presentadores de TV, principales víctimas. La Tribuna, 25.05.2012. p. 119. La nota periodística indica basarse en el

mes de octubre de 2012, se han registrado 33 homicidios de comunicadores sociales. Como muestra el gráfico, el año en que fueron asesinados más comunicadores sociales fue el de 2010. Ese año se asesinaron 12 periodistas y comunicadores sociales (ver gráfico 4).

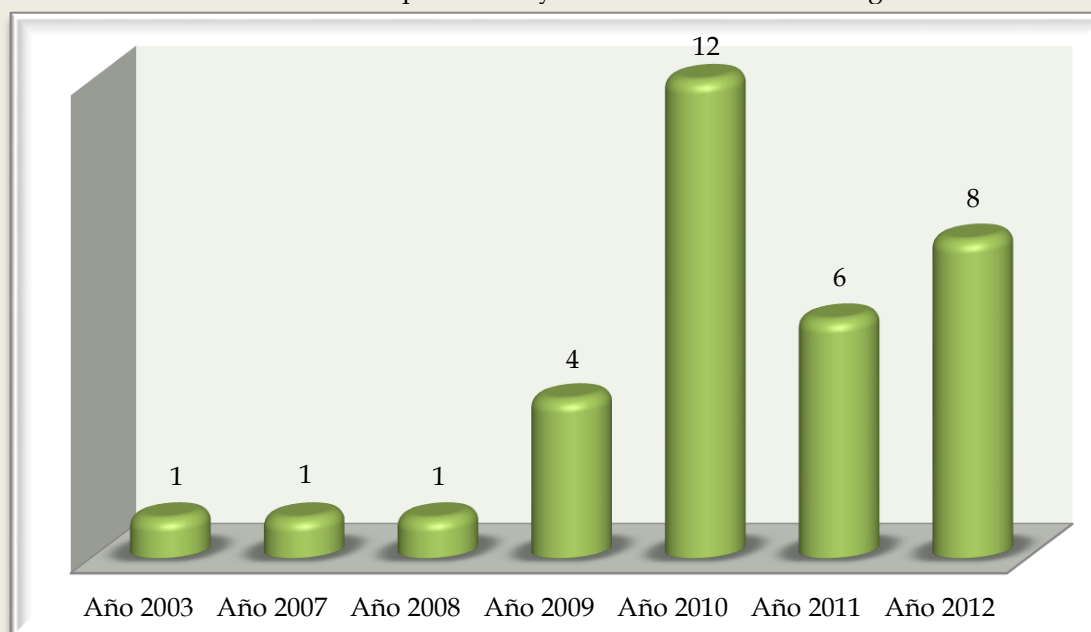
31 del universo de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales eran hombres y 2 eran mujeres (ver gráfico 5).

El mayor número de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales se produjo en el departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, la capital del país. Le siguen en importancia los departamentos de Cortés y Atlántida. Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba han sido marcadas por la

violencia homicida que ha azotado al país. Son las tres ciudades que han reportado en forma consistente el mayor número de muertes violentas en el país (ver gráfico 6).

**Gráfico 4**

Muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales según año.

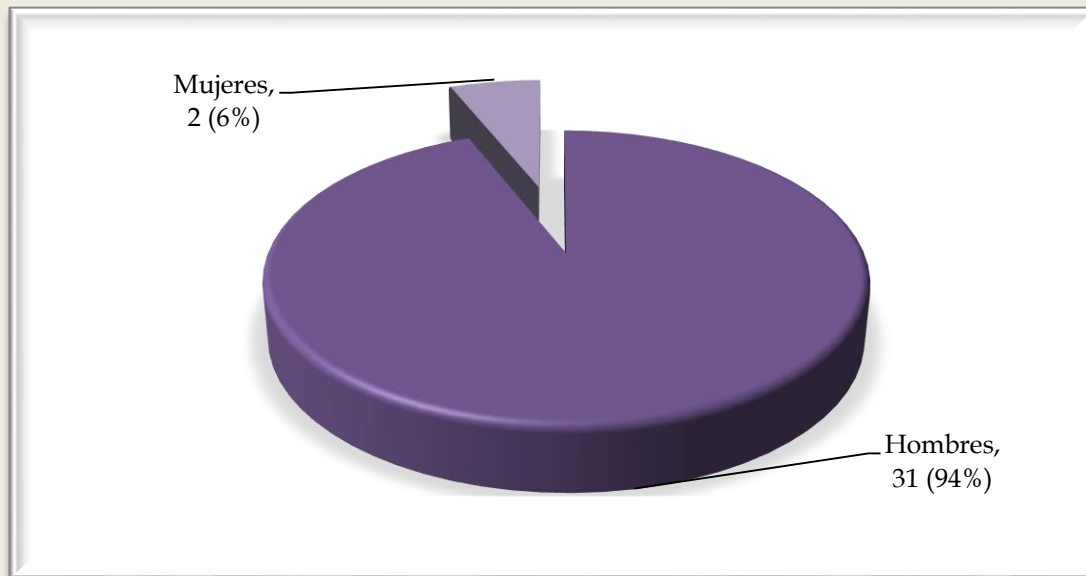


**Fuente:** Fiscal Encargada de Muerte de Periodistas. Ministerio Público. Datos a Octubre de 2012.

Boletín Especial No. 4, sobre homicidios contra periodistas, del Observatorio de la Violencia de la UNAH. A 26 de mayo, el boletín todavía no se encontraba disponible en el sitio web del Observatorio.

**Gráfico 5**

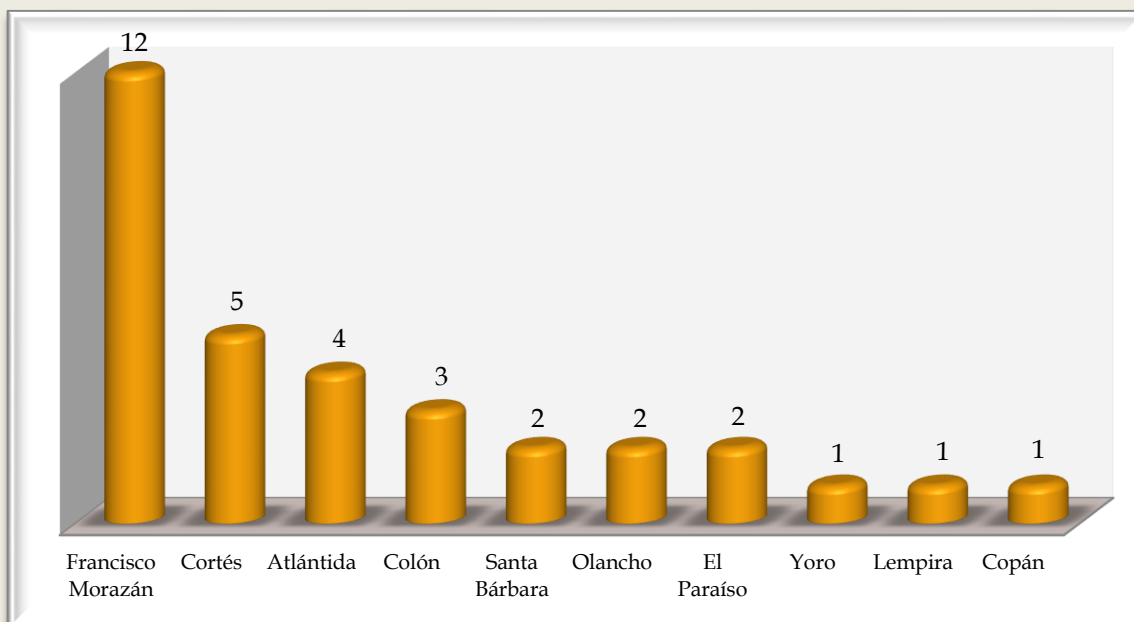
Muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales según sexo.



**Fuente:** Fiscal Encargada de Muerte de Periodistas. Ministerio Público. Datos a Octubre de 2012.

**Gráfico 6**

Muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales según departamento.



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público. Datos a Octubre de 2012.

De las 9 víctimas (27%) eran comunicadores sociales. 24 (73%) eran periodistas propiamente dichos. Se dedicaban a programas noticiosos. Esto tiene implicaciones adicionales. La falta de avances en los procesos de investigación, no ha permitido conocer, en la mayoría de los casos, las causas y los responsables. Los asesinatos contra este gremio pueden ser percibidos bajo propósitos disuasivos y de autocensura, lo que también conllevaría una violación a la libertad de prensa, uno de los derechos civiles más preciados de las sociedades democráticas. La mayoría de los casos se encuentran todavía en investigación. Hasta ahora solo se han judicializado siete casos. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha demandado públicamente investigaciones efectivas para descubrir a los responsables de estos hechos 28 (ver gráfico 7).

Los siete requerimientos fiscales promovidos por la muerte de periodistas y comunicadores sociales, fueron presentados contra personas particulares. No se advierte en ellos la

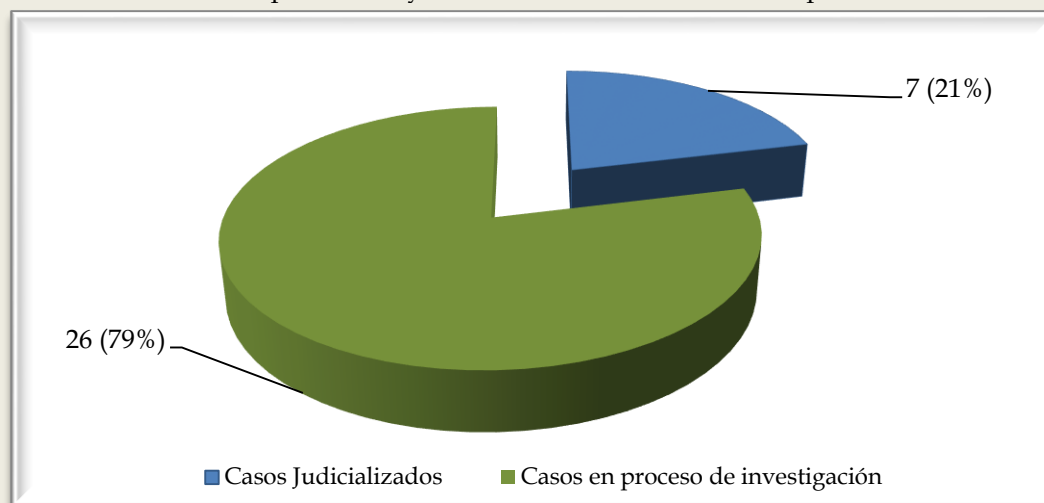
participación de miembros de los cuerpos de defensa y seguridad pública del Estado (ver cuadro de casos judicializados de periodistas y comunicadores sociales muertos violentamente).

Hay que aceptar, sin embargo, que ha existido y persiste un alto grado de impunidad en estos crímenes porque las investigaciones realizadas por los entes del Estado no han llegado a un resultado concluyente en la mayoría de los casos. Esto pone en entredicho la efectividad de estos entes.

Este hecho ha sido enfatizado por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho de Libertad de Opinión y de Expresión, que ha observado que, una constante de las investigaciones iniciadas una vez ocurridos los asesinatos de los periodistas

**Gráfico 7**

Muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales. Estado procesal de los casos.



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público. Datos a octubre de 2012.

<sup>28</sup><http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/250694>;  
<http://elimparcialnews.com/2011/12/10/honduras/#.UMowuuRORnE>



y comunicadores sociales, ha sido la falta de esclarecimiento de los hechos y la subsecuente impunidad. La Relatoría sobre la Libertad de Expresión se ha quejado que en el caso de los periodistas y comunicadores sociales ha habido una falta de investigaciones adecuadas, de identificación de los autores de

los crímenes, la ausencia de capturas y la inexistencia de juicios y sanciones. Esto también puede ser imputado a otro tipo de delitos contra colectivos específicos ya que, como ha sido reconocido, la investigación criminal es una de las mayores debilidades de los cuerpos de seguridad pública.

#### Casos judicializados de periodistas y comunicadores sociales muertos violentamente.

N	Nombre	Fecha	Profesión	Programa	Depto.	Últimas diligencias	Supuestos autores
1	David Enrique Meza Montesinos	11/03/10	Periodista	Radio El Patio	Atlántida	Pendiente Recurso de casación	Personas particulares
2	Luis Antonio Chévez Hernández	09/04/10	Comunicador social	W 105	Cortés	Audiencia preliminar realizada. Actualmente en etapa de proposición de prueba	Personas particulares
3	Jorge Alberto Orellana	20/04/10	Periodista	Cable TV Honduras	Cortés	Caso Judicializado. Existe sentencia condenatoria. Se está a la espera de la audiencia para la imposición de la pena	Personas particulares
4	Henry Orlando Suazo Santos	26/12/10	Periodista	Radio HRN	Atlántida	Imputado con orden de captura	Personas particulares
5	Fausto Elio Hernández Artiaga	11/03/12	Periodista	La Voz de la noticia, Radio Alegre	Colón	Audiencia preliminar	Personas particulares
6	Ángel Alfredo Villatoro	15/05/12	Periodista	Radio HRN	Francisco Morazán	Audiencia preliminar, las y los imputados con prisión preventiva	Personas particulares
7	Erick Martínez Ávila	7/05/12	Periodista	Comunicaciones Kukulcán	Francisco Morazán	Decretada prisión preventiva para imputado	Persona particular
<b>Fuente:</b> SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público. Datos a octubre de 2012.							

Seguidamente se presenta un registro actualizado de periodistas y comunicadores sociales asesinados en el periodo 2003-2012:

**Muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales.  
Período 2003 octubre 2012**

No	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de la Muerte	Profesión	Programa	Medio	Últimas diligencias
<b>Atlántida</b>								
1	Gabriel Fino Noriega	M	42	03/07/2009	Periodista	Corresponsal Radio América	Radio	En proceso de investigación.
2	David Enrique Meza Montesinos	M	51	11/03/2010	Periodista	Radio El Patio	Radio	Caso judicializado: Pendiente de resolución de recursos de casación.
3	Henry Orlando Suazo Santos	M	43	26/12/2010	Periodista	HRN	Radio	Caso judicializado: Se libró orden de captura. Sin ejecutar.
4	Adán Benítez	M	42	05/07/2011	Comunicador social	Productor T.V.	T.V.	En proceso de investigación.
<b>Colón</b>								
5	Nahúm Elí Palacios Arteaga	M	36	14/03/2010	Periodista	Canal 5 del Aguan	T.V.	En proceso de investigación.
6	Fausto Elio Hernández Artiaga	M	58	11/03/2012	Periodista	La Vos de la Noticia, Radio Alegre	Radio	Caso judicializado: Va a Audiencia Preliminar.
<b>Copán</b>								
7	German Antonio Rivas	M	45	26/11/2003	Periodista	Maya Visión Canal 7	T.V.	En proceso de investigación.
<b>Cortés</b>								
8	Medardo Flores	M	62	09/09/2011	Comunicador social	Radio Uno	Radio	En proceso de investigación.
9	Sayra Fabiola Almendares Borjas	F	22	29/02/2012	Estudiante de periodismo	Canal 12 y 30	S/D	En proceso de investigación.
10	Luis Antonio Chévez Hernández	M	22	09/04/2010	Comunicador social	W 105	Radio	Audiencia preliminar realizada el 03 de marzo. Actualmente va a proposición de pruebas.
11	Jorge Alberto Orellana (Georgino)	M	50	20/04/2010	Periodista	Cable T.V. Honduras	T.V.	Caso judicializado: Con sentencia condenatoria. Próxima audiencia para individualización de la pena.
12	Israel Díaz Zelaya	M	56	24/08/2010	Periodista	Radio Internacional	Radio	En proceso de investigación.
13	Adonis Felipe Bueso Gutiérrez	M	24	08/07/2012	Comunicador social	Estéreo Naranja	Radio	En proceso de investigación.
<b>El Paraíso</b>								
14	Luís Arturo Mondragón Morazán	M	51	14/06/2010	Periodista	Canal 9	T.V.	En proceso de investigación.
15	Luis Ernesto Mendoza Cerrato	M	35	19/05/2011	Comunicador social	Macro sistema y Canal 24 de Danlí	T.V.	En proceso de investigación.
<b>Francisco Morazán</b>								
16	Carlos Manuel Salgado Cruz	M	62	18/10/2007	Periodista	Radio Cadena Voces	Radio	En proceso de investigación.
17	Santiago Rafael Munguía Ortiz	M	52	01/04/2009	Periodista	Radio Cadena Voces	Radio	En proceso de investigación.

No	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de la Muerte	Profesión	Programa	Medio	Últimas diligencias
18	Osman Rodrigo López Irías	M	27	19/04/2009	Periodista	Canal 45	T.V.	En proceso de investigación.
19	Nicolás Jesús Asfura Asfura	M	42	17/02/2010	Periodista	S/D	S/D	En proceso de investigación: preparando requerimiento fiscal.
20	Josep Adoni Hernández Ochoa	M	26	01/03/2010	Periodista	Programa Encuentros Canal 51	T.V.	En proceso de investigación.
21	Carlos Humberto Salinas Midence	M	52	08/05/2010	Comunicador Social	Cronista deportivo	Radio	En proceso de investigación: preparando requerimiento fiscal.
22	Luz Marina Paz Villalobos	F	38	06/12/2011	Periodista	Cadena Hondureña de Noticias	T.V.	En proceso de investigación.
23	Noel Alexander Valladares Escoto	M	28	23/04/2012	Comunicador social	Presentador del Show El Tecolote, Maya TV	T.V.	En proceso de investigación.
24	Erick Martínez Ávila	M	32	07/05/2012	Periodista	Comunicaciones Kukulcan	ONG	Caso judicializado, decretada prisión preventiva para imputado.
25	Ángel Alfredo Villatoro	M	49	15/05/2012	Periodista	HRN	Radio	Caso judicializado: en audiencia preliminar, las y los imputados están en Prisión Preventiva.
26	José Noel Canales	M	34	10/08/2012	Comunicador social	Hondudiario	Periódico Digital	En proceso de investigación.
27	Julio César Casaleno	M	31	28/08/2012	Periodista	Vocero Policía de Tránsito	social	En proceso de investigación.
<b>Lempira</b>								
28	Nery Jeremías Orellana	M	26	14/07/2011	Comunicador social	Radio Joconguera	Radio	Preparando requerimiento fiscal.
<b>Olancho</b>								
29	José Bayardo Mairena Martínez	M	52	26/03/2010	Periodista	Canal 4 Juticalpa	T.V.	En proceso de investigación: preparando requerimiento fiscal.
30	Manuel de Jesús Juárez	M	55	26/03/2010	Periodista	Canal 4 Juticalpa	T.V.	En proceso de investigación.
<b>Santa Bárbara</b>								
31	Bernardo Rivera Paz	M	?	14/03/2009	Periodista	S/D	S/D	En proceso de investigación.
32	José Fernando Gonzales	M	35	01/01/2008	Comunicador social	Radio Mega FM 92.7	Radio	En proceso de investigación.
<b>Yoro</b>								
33	Héctor Francisco Medina Polanco	M	43	10/05/2011	Periodista	Canal 9, Omega Visión	T.V.	En proceso de investigación: preparando requerimiento fiscal.

Fuente: SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público. Datos a Octubre de 2012.

Como ha quedado indicado, el asesinato de periodistas y comunicadores sociales, especialmente cuando no se investiga efectivamente salvo pruebe en contrario, subsiste la duda, que se produce por motivos relacionados con su trabajo, vulnera en forma grave su derecho a la vida y anula su derecho a expresarse libremente. Vulnerando adicionalmente el derecho de las sociedades y de sus ciudadanas y ciudadanos a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta situación se vuelve aún más grave por el efecto de autocensura que tiene sobre el resto de las y los periodistas y comunicadores sociales, por lo que, resulta imperativo que dichas muertes sean investigadas de manera efectiva.

### **c. Homicidios de miembros de la comunidad de diversidad sexual.**

Los seres humanos tienen derecho a que se respete la preferencia sexual o identidad de género por la cual han decidido optar. Debido a una larga tradición de conducta machista y homofóbica, las personas que integran el amplio abanico de la diversidad sexual han enfrentado una conducta hostil de parte de amplios sectores de la población hondureña. Fue hasta el 27 de agosto de 2004 que se otorgó el reconocimiento legal a varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los colectivos de la diversidad sexual.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual, tienen igual derecho a la dignidad y al respeto de sus derechos. Ninguna persona debe ser objeto de violencia, estigmatización, discriminación o maltrato por su orientación sexual. Hacerlo significa una grave violación a los derechos y libertades fundamentales a las personas pertenecientes a la comunidad LGTTBI.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH<sup>29</sup>, entre julio de 2008 y junio de 2012 se han producido 50<sup>30</sup> homicidios a integrantes de la comunidad hondureña de diversidad sexual. Estos datos se han obtenido cruzando información procedente de la Dirección de Estadística de la Policía Nacional. De conformidad con estos datos, 25 de las víctimas eran consideradas transexuales, 22 gay (homosexual masculino) y 3 lesbianas (ver gráfico 8).

En 24 de los 50 casos reportados que representan el 48%, se utilizó arma de fuego para consumar la muerte. En una proporción semejante (24=48%), se utilizó arma blanca. Debido a información deficiente, no se pudo identificar el arma utilizada en el 4% de los casos restantes.

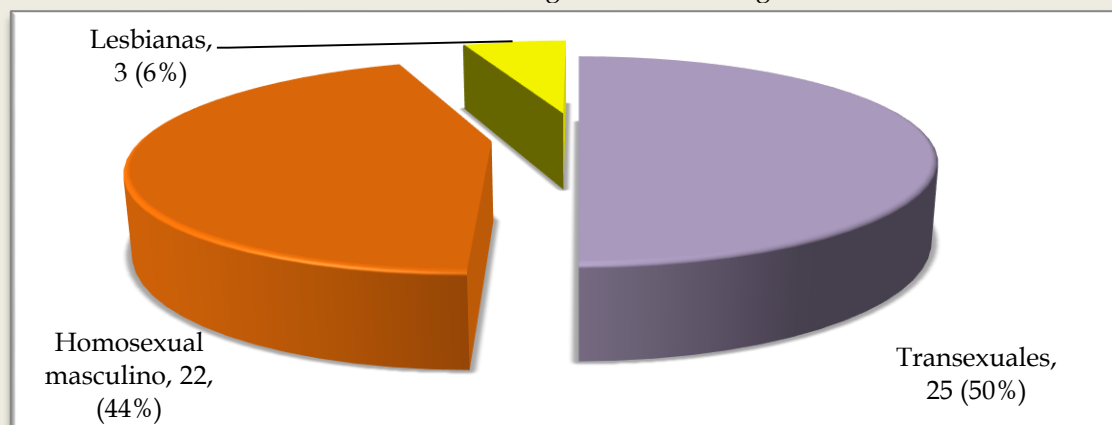
La abrumadora mayoría de muertes violentas de personas de la diversidad sexual se escenificaron en los departamentos de mayor desarrollo urbano del país. El 62% ocurrieron en el departamento de Francisco Morazán, el 26% en el departamento de Cortés, el 8% en el departamento de Atlántida, 2% ocurrieron en el departamento de El Paraíso y el 2% restante, en el departamento de Yoro.

---

<sup>29</sup> Observatorio de la Violencia. Unidad de Género. *Observatorio de violencia de género y femicidios en Honduras: boletín especial. Edición No. 3* (enero 2009-marzo 2011) / Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS). Existe un reporte más reciente en Observatorio de la Violencia. *Boletín especial de diversidad sexual. Edición especial No. 3* (enero 2011-marzo 2012) / Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS). Sin embargo, personeros de la organización Catrachas aconsejaron a la SJDH usar en su lugar el reporte de junio 2011, dado que las cifras que aparecen en el recién emitido se encuentran en revisión.

<sup>30</sup> De acuerdo al reporte de la organización Catrachas, el número de muertes de la comunidad LGTTBI desde el año 1998 hasta el mes de junio de 2012, fue de 77 muertes.

**Gráfico 8**  
Muertes violentas según identidad de género



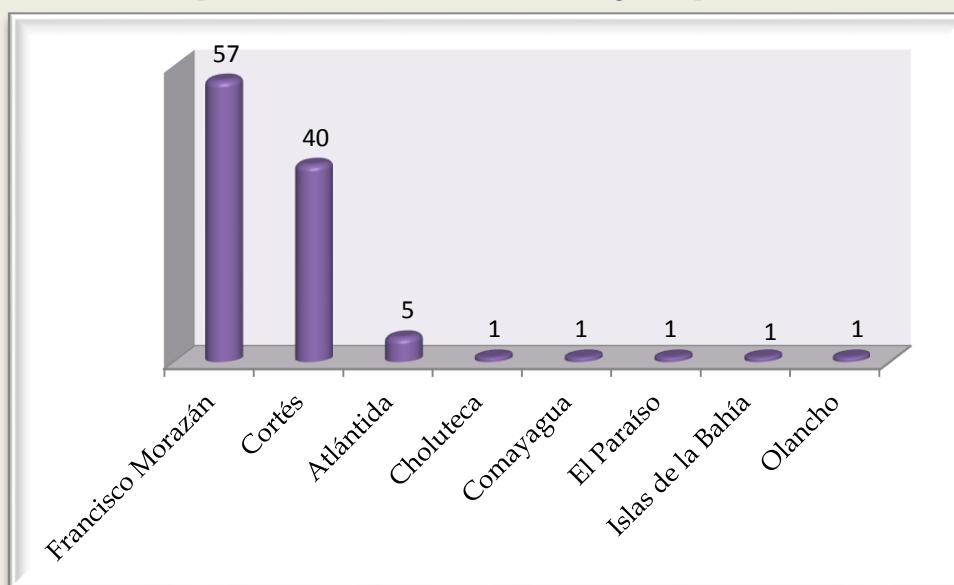
**Fuente:** SJDH con información proporcionada por Observatorio de la Violencia de la UNAH, la Dirección de Estadística de la Policía Nacional y registro de las organizaciones defensoras de este colectivo. Período junio 2008 a junio 2012.

Según Cattrachas (una organización no gubernamental que promueve la defensa de los derechos LGTTBI), desde el año 1994 a octubre de 2012 han ocurrido 107 asesinatos de la comunidad LGTTBI, en los departamentos de

Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Islas de La Bahía, Choluteca, Comayagua, Olancho y El Paraíso (ver gráfico 9).

**Gráfico 9**

Muertes violentas de personas de la diversidad sexual según departamento. Años 1994-2012.



**Fuente:** Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación Cattrachas-Organización Lésbica Feminista.



#### d. Homicidios de mujeres.

En el lenguaje común, se ha vuelto usual designar la muerte violenta de una mujer como un femicidio. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, el concepto tiene otras implicaciones. Sirve para designar la violencia que se ejerce contra las mujeres como producto de relaciones patriarcales de desigual distribución del poder social.<sup>31</sup> Aunque la mayoría de las víctimas de homicidios ocurridas en el país afectan a los hombres, en los últimos años se ha advertido el crecimiento fluctuante de los femicidios en el país.

Según datos de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Mujer, adscrita a la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público, las muertes violentas de mujeres comenzaron a tener mayor visibilidad a partir del año de 2003. Desde entonces, se ha venido produciendo un incremento fluctuante de las

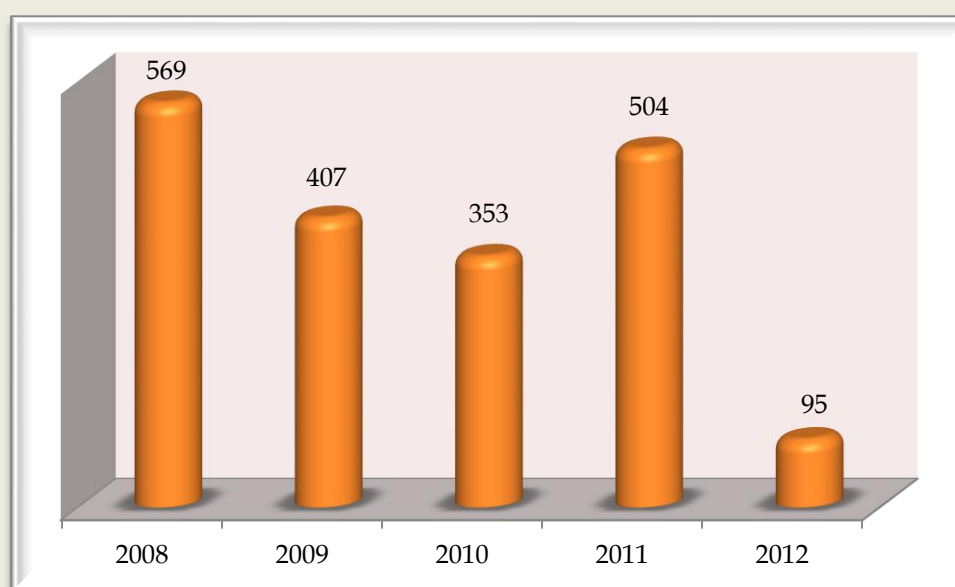
mismas.

Según datos de la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público, entre 2008 y el año 2012, se han producido 1,928 muertes violentas de mujeres. 569 casos ocurrieron en el 2008, 407 casos en el 2009, 353 casos en el 2010, 504 casos en el 2011 y 95 casos en el primer trimestre del 2012. Como puede verse, la tendencia no es sostenida, sino que es fluctuante (ver gráfico 10).

Entre las causas fundamentales del incremento fluctuante de los femicidios, esta Unidad ha señalado las siguientes: “ i) violencia intrafamiliar; ii) venganzas personales; iii) ajuste de cuentas por involucramiento en venta de drogas y en actividades de crimen organizado, ya sea de ellas mismas, de sus parejas o familiares; iv) el sicariato, y, v) los robos seguidos de homicidios.” Las investigaciones sobre los femicidios han

**Gráfico 10**

Muertes violentas de mujeres según año.



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público.

resultado un tanto problemáticas debido al hermetismo de las y los familiares y testigos cuando se les solicita información, ya que temen ser objeto de algún tipo de represalia por parte de los asesinos de sus parientes o conocidos. Como es fácil suponer, ésto fomenta la impunidad.

Según los datos de la Unidad en referencia, el móvil de las muertes, en los casos judicializados, el 50% fueron cometidos por personas ligadas al crimen organizado, 30% a personas vinculadas a maras o pandillas, 20% a personas vinculadas al ámbito familiar de la víctima y el 10% restante de los casos, presentan actores y motivaciones variados (ver gráfico 11).

1,692 casos de asesinatos de mujeres, se encuentran todavía en investigación. En 74 de los 236 casos que se han judicializado, se

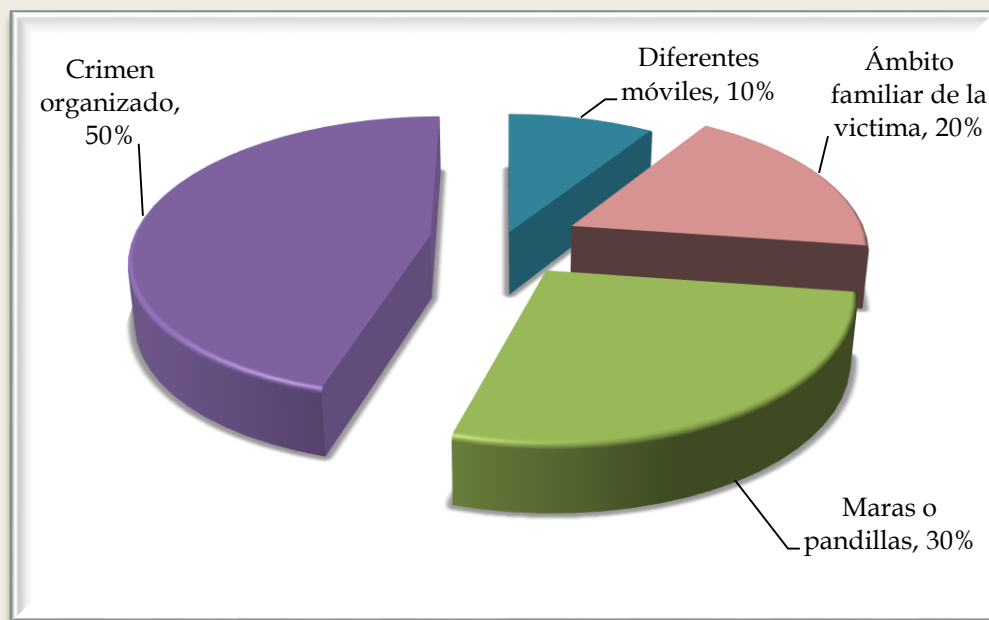
obtuvo sentencia condenatoria. En 157 de los casos, se decretó cierre administrativo (ver gráfico 12).

De acuerdo al último informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de enero a diciembre de 2012 se registraron 606 muertes violentas de mujeres, lo que representa una tasa de 14.2 personas muertas por cada 100,000 habitantes. Los departamentos que presentan las tasas más altas son: Cortés (12.4), Atlántida (10.2), Ocotepeque (10.1), Copán (8.2), Colón (7.6) y Francisco Morazán (7.5).

Durante el período reportado por el IUDPAS, el arma de fuego continúa presentándose como el instrumento principal de las muertes violentas de mujeres, siendo utilizada en 452 de los casos, lo que representa el 74.6% de las muertes; el arma blanca representa el 14.7%; y,

**Gráfico 11**

Muertes Violentas de mujeres según móvil.



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público.

**Gráfico 12**

Muertes violentas de mujeres según estado legal de los casos.



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por el Ministerio Público y Organizaciones no Gubernamentales.

las muertes por estrangulación/asfixia representa el 4.6%. El grupo de edad mayormente afectado por este fenómeno, es el de 15 a 34 años con 337 casos que representan el 55.6%.

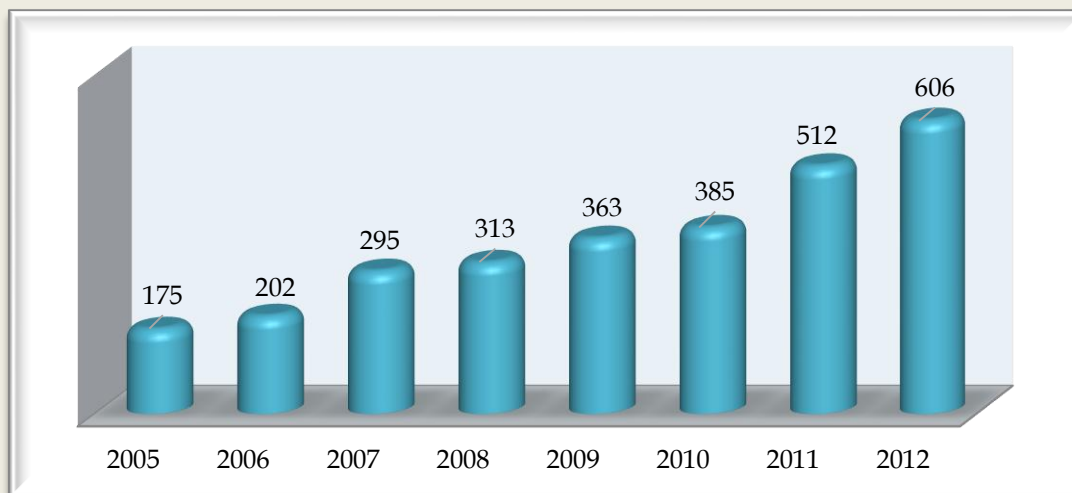
El mismo Informe establece que de las 606 muertes violentas ocurridos durante el 2012, 108 (17.8%) son niñas y 27 (4.5%) son adultas mayores.

Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, desde el año 2005 hasta el 2012 se han producido en el país 2,851 muertes violentas de

mujeres, desglosadas de la siguiente manera: ññen el año 2005 se produjeron 175 muertes, 202 en 2006, 295 en 2007, 313 en 2008, 363 en 2009, 385 en 2010, 512 en 2011 y 606 en 2012 (ver gráfico 13).

**Gráfico 13**

Homicidios de mujeres por año. Período 2005-2012.



**Fuente:** Policía Nacional / Observatorio de Violencia - Unidad de Género - UNAH - Honduras.

**e. Homicidios en el Valle del Bajo Aguán, en el marco del conflicto agrario.**

El origen del conflicto de Bajo Aguán data del año de 1992 en que al amparo de la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola (LMDSA), (Decreto No. 31-92 del 5 de marzo de 1992) se permitió la venta de tierras en el sector reformado. Grupos campesinos dedicados a la producción de palma africana que tenían dificultades para consolidarse, decidieron vender sus tierras a empresarios agroindustriales como Miguel Facusse, René Morales y Reinaldo Canales.<sup>32</sup> Grupos campesinos ya consolidados, como la cooperativa Salamá, no vendieron sus tierras. La Cooperativa Salamá es hoy en día una

poderosa empresa aceitera en el Valle del Aguán. Como consecuencia de estos conflictos, campesinos, miembros de los cuerpos de seguridad privada de las empresas agroindustriales de la región y un ejecutivo de las mismas, algunos miembros de la seguridad del Estado y personas ajenas al conflicto, han perdido la vida. En el marco del 143 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el 24 de octubre de 2011, tuvo lugar una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán. Por parte del Estado de Honduras, Danelia Ferrera, Directora de Fiscales, puntualizó que durante el año 2010 y en los primeros diez meses del año de 2011, se habían contabilizado 43 víctimas mortales en la región, cuya afiliación era la siguiente: 22 campesinos (pertenecientes a las organizaciones gremiales la zona), 13 guardias de seguridad (que prestaban servicios a las empresas agroindustriales), 2 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, 1 empleado de una de las empresas agroindustriales y 5 personas

<sup>32</sup> Sobre el conflicto de Bajo Aguán Cf. Gilberto Ríos, *Reforma agraria y el conflicto agrario en Bajo Aguán*, FIAN International, Tegucigalpa, 2010, Gustavo Iriás, *El MUCA margen derecha y la lucha campesina en el Bajo Aguán*, CESPAD, Vamos Grano, Alianza por la Soberanía Alimentaria, Tegucigalpa, s.f. e Informe de la Misión de Verificación Internacional, *Honduras: violaciones de derechos humanos en Bajo Aguán*, Julio, 2011

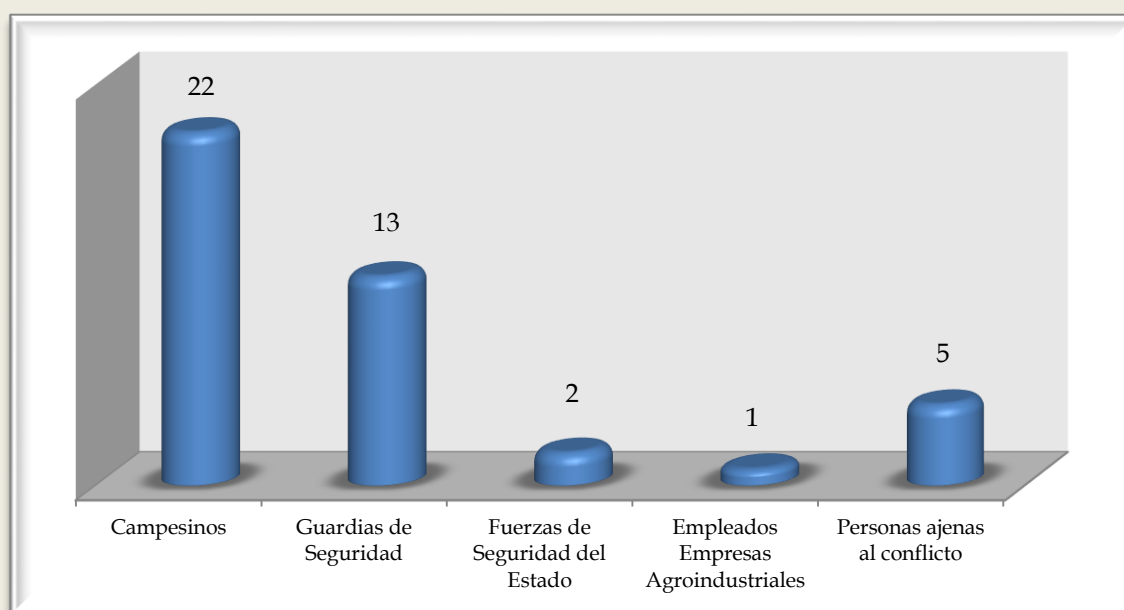
aparentemente ajenas al conflicto (ver gráfico 14). Indicó también que el Ministerio Público investigaba 12 de dichos casos, pero que encontraba algunas dificultades en su labor porque los familiares de algunas de las víctimas impedían la realización de autopsias<sup>33</sup>. En preparación para la misma audiencia, varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales, luego de una misión de verificación internacional, reportaron que entre septiembre de 2009 y mediados de octubre de 2011, se habían

producido en el marco del conflicto agrario de Bajo Aguán, 42 asesinatos de miembros de organizaciones campesinas en dicha zona. Tanto en los departamentos de Colón y Olancho.<sup>34</sup>

El 16 de diciembre de 2011, mediante oficio 1899-DGAE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de las observaciones al Informe Anual Preliminar 2011 de la CIDH, dejó establecido que entre el año 2010 y noviembre de 2011 perdieron la vida 46 personas en la zona del Aguán, las que,

**Gráfico 14**

Homicidios por el conflicto en la zona del Bajo de Aguán. Período año 2010 a octubre 2011.



**Fuente:** SJDH con datos proporcionados por el Instituto Nacional Agrario y monitoreo de prensa.

<sup>33</sup>

<http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=123> Consultado 28.05.2012.

<sup>34</sup> Audiencia: situación de derechos humanos en el Bajo Aguán, Honduras. Resumen actualizado a someter a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en preparación de la audiencia concedida para el 24 de octubre de 2011/REL-UITA/FIDH/CEJIL/FIAN/CIFCA/CIPRODEH/APROD EV/COFADEH.

<http://fian.org/recursos/publicaciones/documentos/resumen-sobre-situacion-de-derechos-humanos-en-el-bajo-aguan-honduras/pdf> Consultado el 8 de abril de 2012.



agrupadas por ocupación laboral o relación

con el conflicto, se distribuían así: 18 campesinos; 2 personas que se suponían campesinas, pero de quienes no se pudo comprobar en definitiva su filiación; 12 guardias de seguridad; 4 jornaleros de fincas; 5 personas desconocidas o no identificadas y; 5 personas particulares, ajenas al conflicto.<sup>35</sup>

Durante el año 2012, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos han continuado reportando homicidios en la zona del Aguán<sup>36</sup>, como producto de las disputas por el acceso a la tierra y por las estrategias de seguridad implementadas de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército de Honduras. De acuerdo al monitoreo de prensa y el seguimiento a los informes presentados por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ha registrado aproximadamente 18 homicidios cometidos en el año 2012.

Para reducir el nivel de confrontación en la zona, el Estado hondureño envió una fuerza conjunta integrada por los cuerpos de seguridad del Estado antes mencionados.

#### **f. Muertes de personas bajo custodia.**

Como aseverara en su momento el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Doctor Santiago Cantón "la situación carcelaria en toda la región es

grave". Por supuesto, la de las cárceles de Honduras, no es la excepción.

Durante el período considerado en este informe se presentaron serios incidentes en el sistema carcelario del país, con lamentables pérdidas de vidas humanas. En el Centro Penal de San Pedro Sula, se produjeron durante el año 2011, 19 decesos. Durante el mismo año, en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto", ubicada en Támara, 8 personas perdieron la vida (ver gráfico 15).

En el año 2012, se produjeron 382 muertes violentas de personas privadas de libertad al interior de los centros penitenciarios de Comayagua (362), San Pedro Sula (15), Juticalpa (2), El Progreso (1) y la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (2), (ver gráfico 16).

Sin embargo, lo sucedido en el Centro Penitenciario modelo de Comayagua el 14 de febrero de 2012, reviste caracteres de auténtica tragedia. Ese día, aproximadamente a las 22:45, se produjo un incendio de grandes proporciones.

361 personas murieron quemadas. Todos ellos eran internos. Solamente murió una mujer que, según informes preliminares, se había quedado después de transcurridas las horas establecidas para la visita conyugal. Ella hacia vida marital con uno de los "coordinadores" de celda. 64 privados de libertad resultaron con fracturas, quemaduras y lesiones de consideración. La tragedia de la cárcel modelo de Comayagua es, sin duda, una de las mayores catástrofes en la historia carcelaria contemporánea.

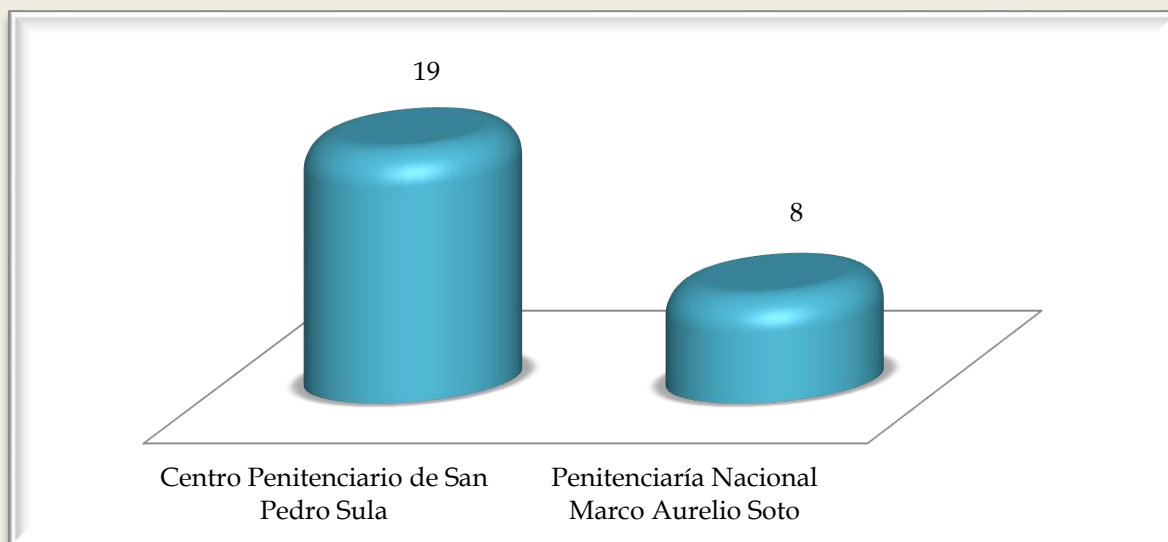
---

<sup>35</sup> La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha adoptado como política de trabajo pedir a los entes responsables que se realicen investigaciones efectivas por muertes violentas, amenazas y otros actos en la zona del Aguán.

<sup>36</sup> Véase, a título de ejemplo, "Matan a dos guardias en el Bajo Aguán". *El Heraldo*, 27.03.2012; "Acribillan a tres empleados de Corporación Dinant". *El Heraldo*, 12.04.2012 (versión digital), y, "Persiste la violencia en el Bajo Aguán" en: [www.fian.hn](http://www.fian.hn) (18.05.2012).

**Gráfico 15**

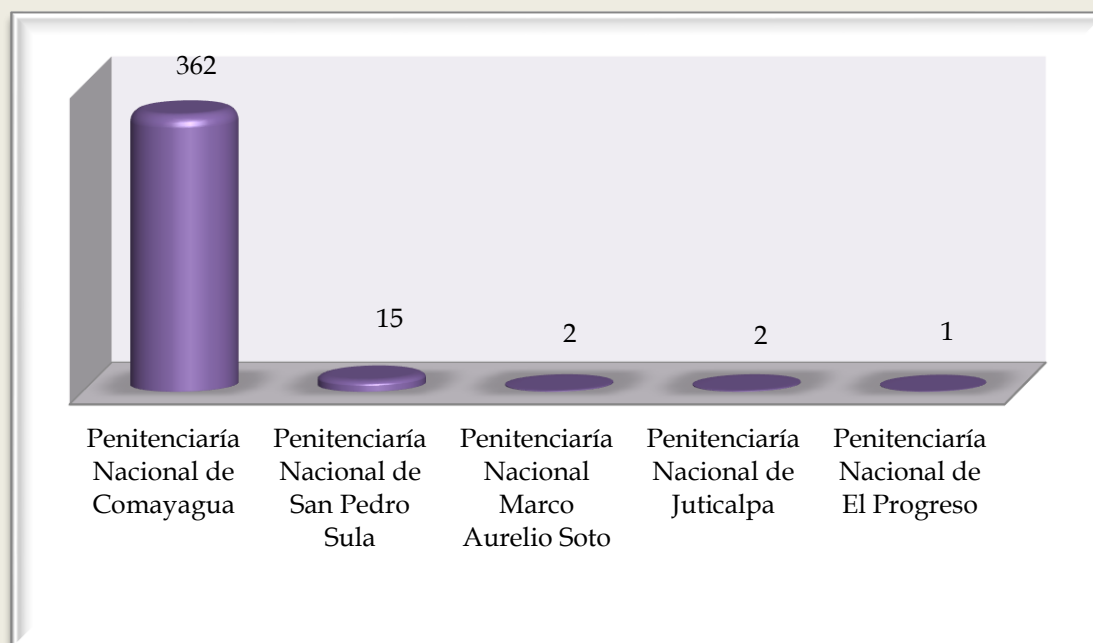
Muertes violentas en el Sistema Penitenciario Nacional. Año 2011.



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por la Coordinación de Jueces de Ejecución del Poder Judicial y la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Seguridad.

**Gráfico 16**

Muertes Violentas en el Sistema Penitenciario Nacional. Año 2012.



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por la Coordinación de Jueces de Ejecución del Poder Judicial y la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo al dictamen pericial del Cuerpo de Bomberos de Comayagua y a un informe elaborado por peritos de la Agencia Federal Estadounidense de Alcohol, Armas de Fuego y Tabaco (ATF, por sus siglas en Inglés) que prestaron colaboración al Gobierno de Honduras, el incendio tuvo su origen en una llama abierta proveniente del recinto 6, cuarta fila, entre las camas 3 y 4, desde donde el fuego se propagó a los recintos 7, 8, 9 y 10 del centro en un lapso de 5 a 7 minutos.

Las declaraciones de las personas privadas de libertad sobrevivientes indicarían que el fuego pudo haber sido provocado por un cigarrillo dejado encendido accidentalmente por uno de los internos al dormirse. Debido al hecho que los recintos se encontraban asegurados con candados y pasadores, resultó imposible la evacuación inmediata de las celdas. Este mortal incendio es todavía objeto de investigación. Desafortunadamente, el Centro Penitenciario de Comayagua al momento del siniestro no contaba con extintores, lo que impidió la sofocación del pavoroso incendio.

Según los testimonios recabados, los privados de libertad que sobrevivieron, lo hicieron gracias a la valiente intervención de un privado de libertad, quien, debido a que realizaba labores de enfermería en el Centro Penal, no dormía en las celdas junto con sus compañeros.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Informe remitido por la Procuraduría General de la República a la CIDH (Oficio No. SP-A-45-2012 de 16.03.2012); Audiencia del Estado de Honduras sobre el incendio de la penitenciaría de Comayagua, solicitada por la CIDH, en: <http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=125> Consultada el 29.05.2012; MNP-CONAPREV. *Informe con recomendaciones en relación al siniestro ocurrido en la penitenciaría nacional de Comayagua*. Tegucigalpa, 27.02.2012; *Un recuento de los peores incendios en cárceles*. BBC Mundo. 15.02.2012. En: [http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120215\\_honduras\\_recuento\\_carcel\\_incendio\\_dp.shtml](http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120215_honduras_recuento_carcel_incendio_dp.shtml) Consultada el 29.05.2012

Siguiendo un protocolo de intervención en varias fases, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos dio seguimiento y acompañamiento a todas las acciones de las diversas instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que se involucraron en el esfuerzo posterior al siniestro. Estas acciones incluyeron el levantamiento y reconocimiento de cadáveres, la atención médica y psicológica de los sobrevivientes, las medidas de higiene en el centro, el acompañamiento de los familiares de las víctimas y las acciones de coordinación con otras Secretarías e Instituciones del Poder Ejecutivo. En este último ámbito, la titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos presentó ante el Consejo de Ministros, el 21 de febrero de 2012, una iniciativa orientada a la creación de una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Atención de la Situación de los Centros Penitenciarios del País, coordinada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad e integrada por Secretarios de Estado y titulares de varias instituciones del Poder Ejecutivo. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad.<sup>38</sup>

El análisis detallado acerca de cómo se produjo el siniestro, revela la existencia de una serie de carencias estructurales del sistema penitenciario hondureño, las cuales serán examinados en mayor detalle, cuando se trate lo relativo al derecho a la libertad personal. El sistema penitenciario en Honduras demanda mayores esfuerzos, acompañados de la correspondiente dotación de presupuesto, para mejorar la condición de vida de las personas privadas de libertad y garantizar la seguridad de los centros.

La aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional que crea el Instituto

---

<sup>38</sup> Incendio de la penitenciaría nacional de Comayagua: Informe de acciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos (24.04.2012).

Nacional Penitenciario, constituye un avance muy importante para establecer un régimen carcelario más humanista.

### 1.1.3. DENUNCIAS DE HOMICIDIOS PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.

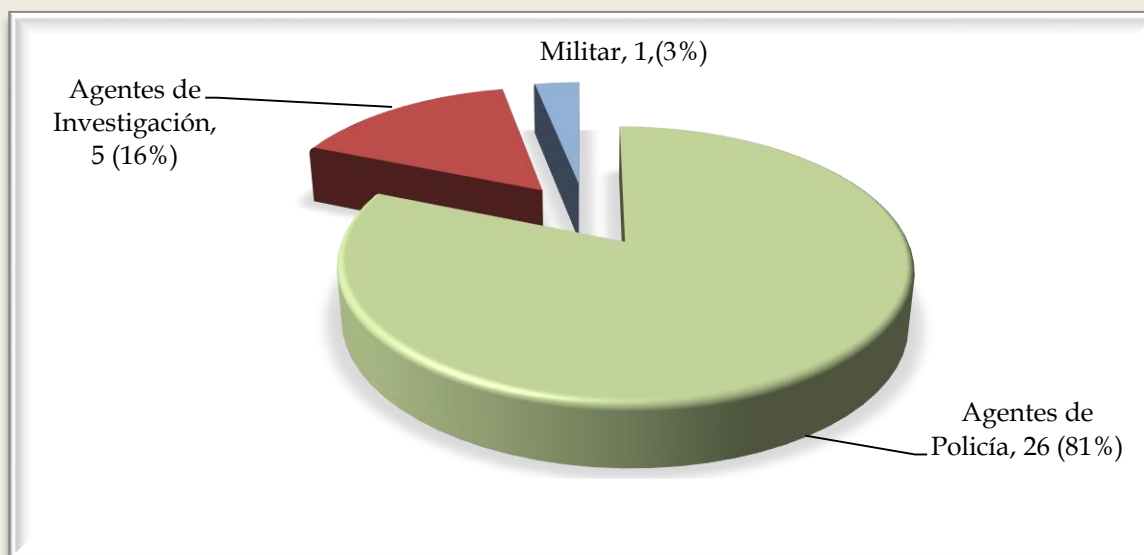
La obligación de garantizar el respeto al derecho a la vida por parte del Estado de Honduras es consustancial a la obligación de abstenerse de producir daño u ofensa a la misma por parte de las personas investidas de autoridad.

Del universo de denuncias presentadas en el Ministerio Público durante el 2011, 32 corresponden a homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas del orden público. 26 de estas denuncias fueron contra miembros de la Policía (81%), 5 contra agentes de investigación criminal (16%) y 1 (3%) contra un militar (ver gráfico 17).

Según informe presentado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), durante el período de enero de 2011 a noviembre de 2012, se produjeron en el país 149 muertes producto de la acción de la policía, siendo los hombres (147) las víctimas principales de la acción policial. La mayoría de las muertes se produjo por el uso de armas de fuego (97.9%) y en menor grado, por la

**Gráfico 17**

Denuncias por homicidio presentadas contra miembros de las fuerzas de seguridad ante el Ministerio Público. Año 2011.



**Fuente:** Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público.

utilización de armas blancas (1.3%) y armas contundentes (0.7%).<sup>39</sup>

#### **1.1.4. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS: MEDIDAS ADOPTADAS PARA SANCIONARLA Y NECESIDAD DE INVESTIGAR DENUNCIAS.**

Según lo dispone el Artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada, se entenderá por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha protección de libertad o del ocultamiento de la muerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndole a la protección de la ley”.

El Congreso Nacional de la República reformó por adición el Código Penal (Decreto 144-83) para tipificar expresamente el delito de desaparición forzada de personas. La aprobación de esta reforma se produjo el 28 de marzo de 2012, mediante la introducción del artículo 333-A, en el título XI, capítulo IV, dedicado a los delitos cometidos por los funcionarios contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución de la República. Además de la privación de la libertad, se incluyen elementos como la limitación de las garantías procesales, la negativa a reconocer la privación de libertad y la ocultación del paradero de la persona detenida. En este delito, pueden ser autores tanto las y los funcionarios o empleados públicos, como particulares con su autorización o aquiescencia. La pena a imponer

es de 15 a 20 años de reclusión, más una multa de 25 a 50 salarios mínimos. En la exposición de motivos de esta reforma, el proyectista, el diputado Orle Aníbal Solís, invocó los compromisos adquiridos por Honduras al ratificar el 28 de abril de 2005 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Sobre la comisión de este hecho delictivo, la Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público, informó que durante el año 2011 ingresaron a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos 13 denuncias de personas presuntamente desaparecidas. 7 ocurrieron en Tegucigalpa y 6, en San Pedro Sula. Durante el primer semestre del año 2012, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público reportó 3 denuncias por el delito de desaparición forzada. Es importante que estos casos sean investigados a fin de determinar si estamos hablando del retorno de una práctica inhumana aplicada en la década del 80 del siglo recién pasado o estamos frente a situaciones protagonizadas por personas particulares. Cualquiera que sea el caso, es obligación de las autoridades competentes determinar el paradero de las presuntas víctimas y sancionar legalmente a los responsables.

#### **1.2. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL**

Toda persona tiene el derecho a preservar su seguridad personal y su integridad física, síquica y moral. El respeto a la integridad personal implica, desde el punto de vista de la autoridad pública, abstenerse de la aplicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Boletín Especial sobre Criminalidad Policial, IUDPAS/UNAH, Boletín 01 de enero 2011 noviembre 2012, Edición No. 5, noviembre de 2012.

<sup>40</sup> Para la definición operativa de los derechos civiles y políticos se ha seguido: CONADEH. *Manual sobre el contenido, normativa y modalidades violatorias de los derechos humanos*. Tegucigalpa, 2004.



Las organizaciones defensoras de derechos humanos monitorean este derecho en personas sujetas a regímenes institucionales, bajo dependencia física o económica de familiares o personal institucional, o que sean sujetos de discriminación por cualquier circunstancia, ya se trate de situaciones permanentes o transitorias. En este sentido, son especialmente consideradas, vulnerables: i) las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; ii) los pacientes psiquiátricos; iii) los niños y niñas en escuelas, guarderías o centros de cuidado; iv) las obreras en fábricas; v) las personas de la tercera edad en hogares o asilos; vi) las personas con discapacidades; vii) las mujeres y los miembros de la comunidad de la diversidad sexual que se dedican al comercio sexual; y, (viii) las personas viviendo con VIH/SIDA.

### **1.2.1. MECANISMOS DE CONTROL**

#### **ESTABLECIDOS PARA VELAR QUE LAS PERSONAS DETENIDAS O PRIVADAS DE LIBERTAD NO SEAN VÍCTIMAS DE TORTURAS NI DE MALOS TRATOS.**

##### **a. Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.**

En cumplimiento de los compromisos adoptados por el Estado de Honduras como consecuencia de la suscripción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y particularmente de su Protocolo Facultativo, aprobado mediante Decreto No. 374-2005, de 20 de enero de 2006, el Congreso Nacional de la República emitió la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través del Decreto No. 136-

2008, el 31 de octubre de 2008.<sup>41</sup> En esta norma se establece el marco institucional, técnico y administrativo para el funcionamiento de esta instancia.

Operando bajo los mismos principios y en colaboración con el mecanismo internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU) que también creó el Protocolo Facultativo, este órgano tiene el mandato de examinar periódicamente el trato que reciben las personas privadas de libertad en los lugares de detención, incluso sin previo aviso a la autoridad encargada de los centros, como una forma de prevenir la tortura. A partir de estas inspecciones, el Mecanismo Nacional podrá formular recomendaciones, observaciones y propuestas a las autoridades competentes, sin perjuicio de cualquier otra acción.

Con mucha satisfacción, la titular de esta Secretaría de Estado promueve activamente la puesta en marcha del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), las convocatorias de ley, el nombramiento de sus miembros y su fortalecimiento presupuestario. Sin embargo, se precisa de mayor apoyo en este último aspecto.

El CONAPREV queda integrado, finalmente, el 17 de septiembre de 2010, cuando el Presidente Porfirio Lobo Sosa juramenta a las y los representantes nombrados.

### **1.2.2. RELATORÍAS ESPECIALES.**

En el mes de mayo del año 2010, el Presidente de la República, Licenciado Porfirio Lobo Sosa, extendió invitación abierta e individualizada al señor Rodrigo Escobar Gil, Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos

<sup>41</sup> Es de hacer notar que en este período fungía como Presidente del Congreso Nacional de la República, el Licenciado Porfirio Lobo Sosa.

Humanos sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y al Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Cruels, Inhumanas y Degradantes de las Naciones Unidas.

El Relator Especial realizó su visita a nuestro país del 23 al 27 de abril de 2012. Con ocasión del cierre de su visita, el Relator Especial de la CIDH presentó un informe preliminar en el que destacó “la colaboración prestada por las autoridades del Estado de Honduras, la transparencia en el suministro de información, así como, por permitir el acceso irrestricto a las instalaciones de los centros penitenciarios visitados...”.

Del 30 de abril al 4 de mayo del 2012, visitó nuestro país la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas integrada por las y los señores Mario Luís Coriolano (Jefe de la delegación), Zbigniew Lasocik, Hans Draminsky Peterssen y María Margarita Pressburger, quienes sostuvieron encuentros con autoridades de los tres Poderes del Estado, Corporaciones Municipales, Gobernación Política de las zonas visitadas, la Pastoral Penitenciaria y diferentes organizaciones de la sociedad civil y visitando diferentes centros penitenciarios del país. Durante su estadía, el Subcomité dio asesoría técnica al CONAPREV.

En el marco de su visita, el Subcomité presentó un informe preliminar sobre los principales hallazgos y recomendaciones dirigidas al Estado de Honduras para mejorar la situación de las personas privadas de libertad y del sistema penitenciario nacional.

### **1.2.3. DENUNCIAS DE TORTURA.**

Según datos de la Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público, durante el año 2011 se contabilizaron 38 denuncias de tortura ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. De éstas, 20 han ingresado a la Fiscalía Especial

de Derechos Humanos en Tegucigalpa y 15 se han presentado en la misma dependencia, en las oficinas de San Pedro Sula. Cada una de las oficinas regionales del Ministerio Público de Comayagua, Puerto Cortés y Puerto Lempira, reportaron una denuncia de tortura (ver gráfico 18).

En el año 2012, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, reportó que recibió 5 denuncias por el delito de tortura.

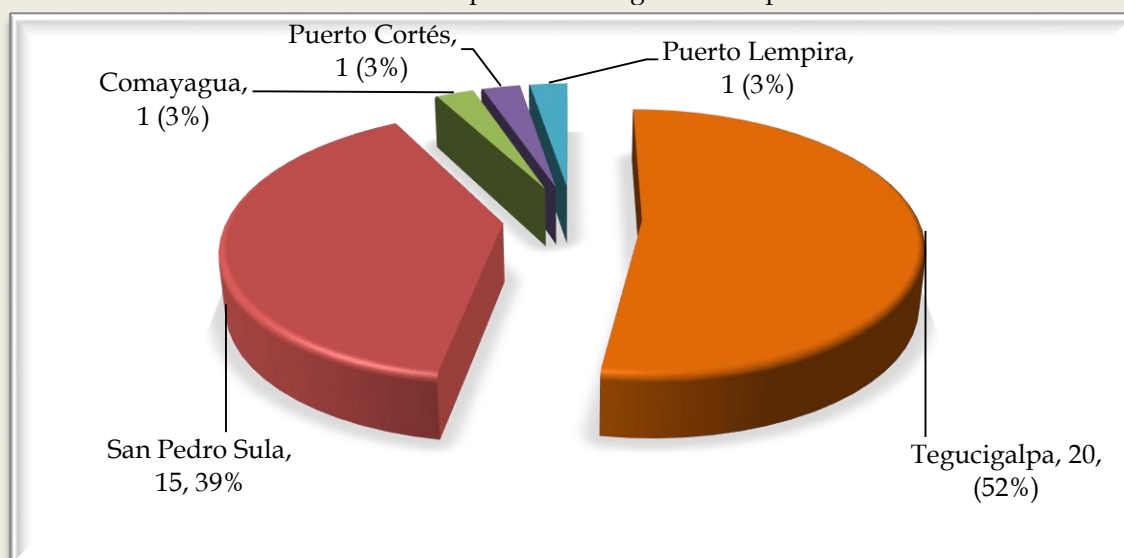
### **1.2.4. ARMONIZACIÓN DEL TIPO PENAL DE TORTURA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.**

Durante el año 2011 y 2012, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de una mesa temática desarrollada en el marco del Examen Periódico Universal, trabajó, con el apoyo de otras instituciones, para mejorar el tipo penal de tortura, regulado en el Código Penal, guiándose por las recomendaciones que sobre la materia, le fueron formuladas al Estado de Honduras en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Cruels, Inhumanas y Degradantes y el Relator para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las instituciones que apoyaron a la Secretaría en esta tarea hay que mencionar, entre otras, el MNP-CONAPREV, el Centro para la Prevención y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, CPTRT (organización no-gubernamental de larga trayectoria en este campo), la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público.

En esta temática, ya se había logrado que el Congreso Nacional de la República (Decreto

**Gráfico 18**

Denuncias por tortura según municipio.



**Fuente:** Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público.

No. 22-2011 del 7 de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,519 del 19 de mayo), reformara el artículo 209-A del Código Penal. Se buscaba armonizar el tipo penal de tortura a la definición contenida en la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Cruelles, Inhumanas y Degradantes, a las observaciones de adecuación de la legislación nacional efectuadas por los órganos de dicho tratado. Sin embargo, la reforma no logró el alcance internacional previsto.

Fue así como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, haciendo uso de la iniciativa de ley establecida en el artículo 213 de la Constitución de la República y para cubrir también las amenazas de tortura y cerrar cualquier espacio de vaguedad, ambigüedad o indeterminación en la norma que pudiera ser aprovechado por sus infractores<sup>42</sup>, presentó el Anteproyecto que reforma el Artículo 209 y

deroga el Artículo 209-A del Código Penal vigente. De esta manera, se armonizaría la legislación nacional que tipifica el delito de Tortura, con las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanas o Degradantes, la cual está pendiente de aprobación por parte del Congreso Nacional de la República.

Este trabajo fue el resultado del esfuerzo conjunto realizado con representantes del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (CONAPREV), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, la Defensa Pública y los Juzgados de Ejecución del Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad, en el marco de la Mesa Temática en materia de prevención de la tortura, personas privadas de libertad y centros penitenciarios. El Estado de Honduras cumpliría importantes Recomendaciones que

<sup>42</sup> Reunión realizada el 08.03.2012 en la SJDH, coordinada por la Subsecretaría de Justicia; *Defensores de derechos humanos solicitarán penas para torturadores. La Tribuna*, 10.02.2012. p. 20.

en materia de Derechos Humanos, le habían sido formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el Examen Periódico Universal.

### 1.3. LIBERTAD PERSONAL

---

Desde una perspectiva amplia y positiva, la libertad personal consiste en hacer, o abstenerse de hacer, todo aquello que no perjudique a otros y que no implique una infracción al ordenamiento jurídico. Es, en pocas palabras, el derecho de toda persona a determinar libremente su conducta.

Desde una perspectiva más restringida y negativa, se presenta como el derecho a no ser privado de la libertad, salvo en los casos previstos por la Constitución de la República y las Leyes, siguiendo sus procedimientos y formalidades. En principio, esta privación sólo puede ser ordenada o controlada, por los jueces y los tribunales.

Las privaciones o restricciones a la libertad personal pueden obedecer a varios motivos y son de intensidad y duración diferente. Son consecuencia, por regla general, de la persecución o imputación de un delito, pero pueden también provenir de otros factores tales como el control de la inmigración o el tratamiento de trastornos psiquiátricos.

Cualquiera que sea el caso, habrá que observar la medida y la autoridad ejecutora con respecto a: (i) las formalidades y procedimientos que deben ser cumplidos para privar a una persona de este derecho, (ii) el establecimiento y cumplimiento de límites temporales a la privación, y (iii) las condiciones materiales, físicas y psicológicas en que se lleva a cabo la privación.

Por su estrecha relación con el derecho a la libertad personal, suelen agruparse con él los asuntos relacionados con las condiciones

penitenciarias y con las formas contemporáneas de esclavitud. En el primero de los casos, el principio guía es que toda persona privada de su libertad deberá ser tratada con el respeto y dignidad inherente al ser humano. En cuanto a las prácticas actuales de servidumbre, debe ponerse especial atención en la trata de personas para fines de explotación sexual.

#### 1.3.1. SITUACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

---

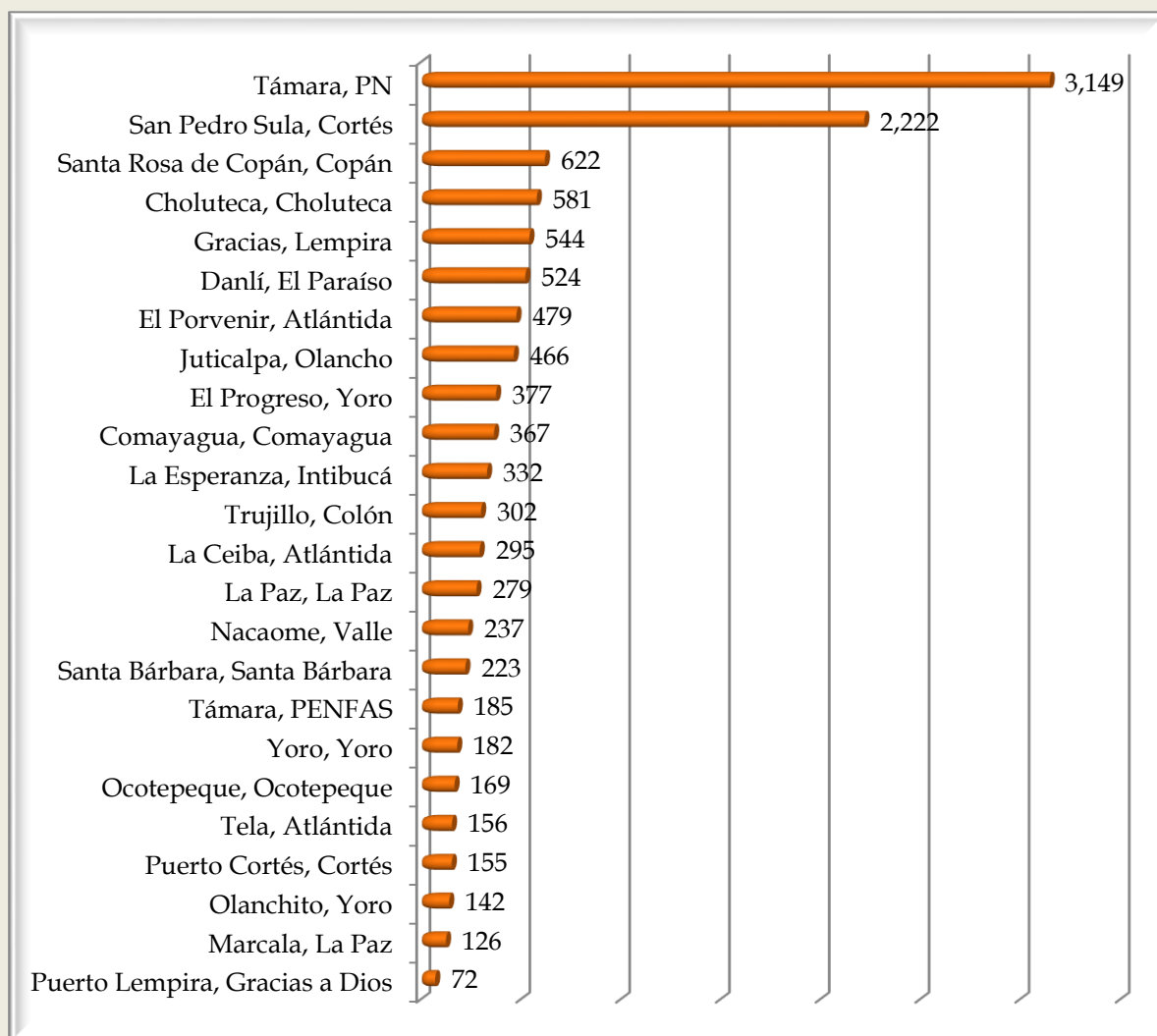
El Artículo 87 de la Constitución de la República establece que “Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluso y su preparación para el trabajo”. En nuestro país, la Ley de Rehabilitación del Delincuente es el instrumento regulador de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, la detención preventiva de los procesados y, en general, el tratamiento de las personas condenadas y su orientación post-carcelaria, con el objeto de lograr su readaptación social. Establece también los requisitos que deben reunir las personas encargadas de la administración y seguridad de los centros penitenciarios.

##### a. Población penitenciaria a nivel nacional

Según datos oficiales en 2012, la población total penitenciaria del país ascendía a 12,186 internos e internas (ver gráfico 19).

**Gráfico 19**

Población penitenciaria según Centro Penitenciario



**Fuente:** SJDH con información proporcionada por la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución y la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos y Censo de Población Penitenciaria de la SJDH a 2012.

Como es evidente, el mayor número de privados de libertad se encuentran en los centros penitenciarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En estos centros penitenciarios, se concentra el 44% de los privados de libertad en el país.

Es importante señalar que hacia finales de la década de los noventa y la primera década del presente siglo, se logró reducir la mora judicial

y el porcentaje de personas privadas de libertad sin condena con respecto al nivel más alto de los mismos que se alcanzó hacia el año de 1997, cuando según diversos informes entre un 85 y un 90% de la población interna en los centros penitenciarios, no había sido sentenciada. Un estudio realizado entre las personas privadas de libertad en el año 2004, constató que el 51% de los hombres había sido sentenciado y entre las mujeres, el 56%.

Estamos hablando de una reducción de alrededor de un 30% o un poco más.

La reducción en referencia se debió a la introducción de una serie de políticas y medidas concretas y focalizadas en el sistema de justicia penal. Entre estas, hay que mencionar, la creación del Ministerio Público, la aprobación de la Ley del Reo sin Condena, el nombramiento de jueces supernumerarios para evacuar las causas pendientes, el fortalecimiento de la Dirección de la Defensa Pública, la aprobación del Código Procesal Penal y el nombramiento de jueces de ejecución penal. A la luz de los datos de 2012, podríamos inferir que la situación se ha estancado.

Es necesario determinar qué es lo que ha sucedido: si se trata de un incremento constante de las personas procesadas, lo cual ha terminado por rebasar los recursos disponibles y los instrumentos que permitieron un avance o si se trata de un problema de efectividad en los mecanismos y actores del sistema de justicia penal, o de una combinación de ambos factores. La identificación de las causas de este estancamiento, puede llevar a mejorar las políticas y medidas que se implementaron ya hace más de una década o a formular otras nuevas.

De los 12,186 internos e internas, 6,589 (54%), se encuentran procesados, y 5,597 (46%), sentenciados. En el cuadro se observan las cifras detalladas por Centro Penitenciario.

#### Población penitenciaria según condición de sentenciado o procesado

No.	Centro Penitenciario	Personas privadas de libertad en condición de procesados	Personas privadas de libertad en condición de condenados
1	Támara, PNMAS	1,951	1,198
2	Comayagua, Comayagua	173	194
3	Támara, PENFAS	125	60
4	La Esperanza, Intibucá	133	199
5	La Paz, La Paz	194	85
6	Marcala, La Paz	49	77
7	San Pedro Sula, Cortés	1,378	844
8	Puerto Cortés, Cortés	97	58
9	El Progreso, Yoro	192	185
10	Yoro, Yoro	84	98
11	Santa Rosa de Copán, Copán	189	433
12	Ocotepeque, Ocotepeque	56	113
13	Gracias, Lempira	131	413
14	Santa Bárbara, Santa Bárbara	152	71
15	La Ceiba, Atlántida	193	102
16	Olancho, Yoro	52	90
17	El Porvenir, Atlántida	230	249
18	Tela, Atlántida	51	105
19	Trujillo, Colón	157	145
20	Puerto Lempira, Gracias a Dios	49	23
21	Juticalpa, Olancho	228	238
22	Danlí, El Paraíso	192	332
23	Choluteca, Choluteca	399	182
24	Nacaome, Valle	134	103
<b>Total</b>		<b>6,589</b>	<b>5,597</b>

**Fuente:** SJDH con información proporcionada por la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución y la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, a octubre de 2012. Para la PNMAS, PENFAS y Olancho se utilizó informe condensado del Programa de Auditoría Penitenciaria del Poder Judicial (CEDIJ) y el Censo de Población Penitenciaria levantado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.



## b. Problemática general del sistema penitenciario.

Existe un problema de sobrepoblación y, en consecuencia, de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Hay 12,186 privados de libertad en un sistema penitenciario que tiene la capacidad de albergar 8,340 personas. Esto se debe, en parte, a la problemática de la persona privada de libertad en detención preventiva y a los problemas asociados a una infraestructura antigua e insuficiente. El sistema penitenciario reproduce las desigualdades sociales que existen en el país. Las personas privadas de libertad que tienen mayores ingresos, viven en condiciones de

relativa comodidad. Las personas privadas de libertad de menores recursos, viven en una situación de hacinamiento. Esto atenta contra el principio de igualdad establecido por la Constitución de la República.

El cuadro siguiente evidencia la sobrepoblación, y el consecuente hacinamiento, que experimentan los centros penitenciarios del país.

**Capacidad de Albergue de los Centros Penitenciarios de Honduras versus porcentaje de sobrepoblación en cada uno.**

No.	Centro Penitenciario	Capacidad	% sobre población
1	Támara, PN	3,149	15.77%
2	Comayagua, Comayagua	367	52.92%
3	Támara, PENFAS	185	0%
4	La Esperanza, Intibucá	332	232%
5	La Paz, La Paz	279	132.50%
6	Marcala, La Paz	126	5%
7	San Pedro Sula, Cortés	2,222	177.75%
8	Puerto Cortés, Cortés	155	210%
9	El Progreso, Yoro	377	214.17%
10	Yoro, Yoro	182	21.33%
11	Santa Rosa de Copán, Copán	622	159.17%
12	Ocotepeque, Ocotepeque	169	12.67%
13	Gracias, Lempira	544	0%
14	Santa Bárbara, Santa Bárbara	223	218.57%
15	La Ceiba, Atlántida	295	195%
16	Olancho, Yoro	142	136.67%
17	El Porvenir, Atlántida	479	99.58%
18	Tela, Atlántida	156	0%
19	Trujillo, Colón	302	151.67%
20	Puerto Lempira, Gracias a Dios	72	260%
21	Juticalpa, Olancho	466	0%
22	Danlí, El Paraíso	524	118.33%
23	Choluteca, Choluteca	581	0%
24	Nacaome, Valle	237	97.50%
<b>Total</b>		<b>8,340</b>	

**Fuente:** SJDH con información proporcionada por la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución y la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, a octubre de 2012. Para la PNMAS, PENFAS y Olancho se utilizó informe condensado del Programa de Auditoría Penitenciaria del Poder Judicial (CEDIJ), y el Censo de Población Penitenciaria levantado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Como puede verse, la sobrepoblación y el hacinamiento son graves en los centros penitenciarios de Puerto Lempira (260%), La Esperanza (232%), Santa Bárbara (218%), El Progreso (214%), Puerto Cortés (210%), La Ceiba (195%) y San Pedro Sula (177%).

En base a inspecciones realizadas por esta Secretaría de Estado, se constató que en varios de los establecimientos penitenciarios, existe una situación de grave riesgo debido a que las instalaciones eléctricas han sido trabajadas improvisadamente por las propias personas privadas de libertad, sin considerar la capacidad original de los sistemas eléctricos de los mismos<sup>43</sup>. Muchas de las camas han sido construidas artesanalmente. Hay, por otra parte, una cantidad insuficiente de inodoros y duchas y son exiguos los espacios para actividades recreativas.

En materia de salud, las y los internos presentan diversas patologías que, por regla general, son atendidas en el propio centro penitenciario, siendo las más comunes el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis, las cardiopatías, la epilepsia y las enfermedades psiquiátricas. Las dos primeras enfermedades pueden ser mortalmente contagiosas si no se toman las precauciones del caso.

Con respecto a la alimentación de las y los privados de libertad, la Secretaría constató que el presupuesto destinado por tiempo de comida es de cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (L. 4.33), lo cual equivaldría, al

cambio actual, a unos 22 centavos de dólar (USD 0.22). Esto es, a todas luces, insuficiente para suministrar una dieta mínimamente balanceada.

La mayor limitación para la mejora del sistema penitenciario es el insuficiente presupuesto asignado para la satisfacción de las necesidades básicas de la población penitenciaria. El 82% del presupuesto asignado se destina al pago de Sueldos y Salarios, el 2% se invierte en la Operatividad del centro y el restante 16%, se invierte en alimentación.

Para lograr una mejoría en las condiciones de vida y en la infraestructura de los centros en que conviven cotidianamente las personas privadas de libertad, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se ha dirigido a las y los titulares de Secretarías de Estado, Instituciones Públicas y a las 10 Corporaciones Municipales de los municipios donde se encuentran ubicados los centros penitenciarios declarados en estado de emergencia, demandando decisiones urgentes para mejorar la situación de los centros penitenciarios. Este es, sin duda, uno de los grandes desafíos que enfrenta el Estado hondureño en sus distintos niveles operativos.

En el marco de los esfuerzos realizados para la mejora del Sistema Penitenciario Nacional, el 6 de junio del año 2012, el Presidente de la República, Lic. Porfirio Lobo Sosa y el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, entregaron a la Fundación Pro construcción de la Granja Penal de San Pedro Sula, la certificación de la liberación de las escrituras del predio, donde se pretende construir un nuevo centro penitenciario.

Un predio localizado en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, fue puesto a disposición de la Fundación Pro Construcción que preside Monseñor Rómulo Emiliano por la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI). Esto se hizo en base a una

<sup>43</sup> La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha librado oficios a las Corporaciones Municipales donde existen Centros Penitenciarios declarados en estado de emergencia, a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y al Cuerpo de Bomberos, con el propósito de revisar y mejorar las condiciones de infraestructura, instalación de hidrantes de agua potable y extintores de fuego y las instalaciones eléctricas, entre otros.

Resolución enmarcada en la Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados, publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 19 de abril de 2012.

Como medida para descongestionar los Centros Penitenciarios, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, presentó el Anteproyecto de Reforma del Artículo 53 del Código Penal que establece la sustitución de la pena de multa por trabajos a favor de la comunidad, que adiciona un nuevo artículo bajo la denominación de 53-A que regulará la revocatoria de la conmuta de la pena de multa, en aquellos casos que incumpliere el trabajo comunitario sin causa justificada.

Con este mismo propósito, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, reasumió la política del Gobierno de la República, a través del cumplimiento de la atribución conferida al Presidente de la República en el Artículo 245 de la Constitución de la República relativa de “Indultar y conmutar las penas conforme a la ley”, resolviendo las solicitudes de Indulto y revisando la aplicación de otras medidas preliberacionales, en coordinación con las instituciones del sector justicia, habiendo recibido una mora<sup>44</sup> de al menos 432 solicitudes de indultos. De éstas, al momento de elaborar el presente informe, el Presidente de la República ha resuelto 51 solicitudes a favor de internos de 12 diferentes Centros Penitenciarios del país.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con la participación de las instituciones del sector justicia y organizaciones de sociedad civil, ha elaborado el anteproyecto de una Nueva Ley de Indultos que facilita al Presidente de la República, a las instituciones

involucradas, a las y los beneficiarios y a la sociedad en General, un marco legal claro sobre el beneficio del Indulto y la forma de concederlo respondiendo al funcionamiento del Sistema Penal y a la realidad nacional.

Con el propósito de mejorar el Sistema Penitenciario Nacional se ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM-058-2011, de fecha 6 de septiembre del año 2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 32,680 de fecha 28 de noviembre del año 2011. Mediante este Decreto, se prorroga por el plazo de ocho (8) meses más, el estado de emergencia declarado en el Decreto Ejecutivo Numero PCM-032-2010 de fecha 13 de julio del 2010, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de octubre del mismo año.

En el marco de esta misma problemática, se ha aprobado también el Decreto Ejecutivo No. PCM 005-2012, de fecha 21 de febrero del año 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,783 de fecha 27 de marzo de 2012, que crea la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Situación de los Centros Penitenciarios del País<sup>45</sup>, priorizando los Centros Penitenciarios declarados en el Decreto Ejecutivo Número PCM-032-2010 de fecha 13 de abril de 2010 y el Decreto Ejecutivo Número PCM-058-2011 de fecha 6 de septiembre de 2011, incluyendo a la Penitenciaría Nacional de Comayagua. Su objetivo es coadyuvar con las dependencias del Poder Ejecutivo y demás instituciones con competencia en la materia, para hacer efectiva

la atención de emergencia y canalizar el apoyo de cada Secretaría e institución del Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de los Decretos antes citados.

---

<sup>44</sup> Antes de la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la institución responsable de la tramitación de los indultos era la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, hoy del Interior y Población.

---

<sup>45</sup> Aprobado en Consejo de Ministros por iniciativa presentada por la titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Como resultado de la labor de esta Comisión se ha efectuado la revisión del sistema eléctrico, se han implementado planes de contingencia contra incendios y otros siniestros y se ha dotado de extintores de fuego entre otras mejoras locativas en la mayoría de los centros.

### Censo de personas privadas de libertad candidatos para la aplicación de indultos y otras medidas preliberacionales

No	Centro Penitenciario	Candidato				Población con Enfermedad Mental	Tercera Edad	En Etapa Terminal
		Para Libertad Condicional	Para Conmuta	Para Indulto	Medida Preliberacional			
1	Tegucigalpa	167	217			38	52	
2	Comayagua	5	28	46	28	8	8	
3	PENFAS	5	6	6	6	4	0	1
4	La Esperanza	26	5	7	12	1	7	1
5	La Paz	72	7	28	7	0	3	
6	Marcala	54	6	24	7	1	5	
7	San Pedro Sula	173	13				32	
8	Puerto Cortes	0	9	3	5	0	1	
9	El Progreso	34		37	20	5	3	
10	Yoro	20		18	20	2	4	
11	Santa Rosa de Copan	67		4	11	12	8	2
12	Ocotepeque	11	3	5	4	2	4	
13	Gracias, Lempira	142	131	5	28	4	22	
14	Santa Bárbara	46	44	19	2	0	0	
15	La Ceiba	7	8	16	11	4	5	
16	Olancho	12	5		5	0	0	
17	El Porvenir	25	11			3	3	
18	Tela	9	9	16	11	1	4	
19	Trujillo	7	25	3	26	3	1	
20	Puerto lempira	2	3	0	5	0	1	
21	Juticalpa	20	1	8	9	12	10	
22	Danli	16	101	11	19	1	14	
23	Choluteca	19	8	15	42	7	13	5
24	Nacaome	23	4	4	8	0	3	
<b>Total</b>		<b>962</b>	<b>644</b>	<b>275</b>	<b>286</b>	<b>108</b>	<b>203</b>	<b>9</b>
<b>Fuente:</b> SJDH con información proporcionada por la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución y la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, a octubre de 2012.								

### c. Aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y la creación del Instituto Nacional Penitenciario.

Como respuesta institucional a la tragedia de la Penitenciaría Nacional de Comayagua, sucedida el 14 de febrero, el 9 de mayo de 2012, el Congreso Nacional de la República retomó la discusión del Anteproyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional elaborado por Instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil en el año 2003. Como resultado de esta discusión, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional<sup>46</sup>. Esta nueva ley sustituye a la Ley de Rehabilitación del Delincuente (Decreto 173-84), aprobada el 16 de octubre de 1984 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, No. 24,524 el 21 de enero de 1985. Una de sus principales innovaciones es la creación del Instituto Nacional Penitenciario como dependencia especializada, operando en forma desconcentrada en la estructura de la Secretaría del Interior y Población. El personal del Instituto estará adscrito a un régimen de carrera del servicio penitenciario.

Esta ley establece regulaciones en materia de: i) educación, salud y trabajo de las y los internos; ii) el acceso y monitoreo de las instituciones de derechos humanos; iii) la regulación de los negocios al interior de los centros penales (actualmente bajo control de los mismos internos); iv) el establecimiento de un régimen especial para los jóvenes entre 18 y 21 años de edad y los primo delincuentes menores de 25 años; y, v) la separación en instalaciones diferentes de las personas condenadas de aquellos que se encuentran en prisión preventiva. La norma jurídica aprobada

---

<sup>46</sup> Aprobada ley del Instituto Penitenciario. Proceso Digital. 10.05.2012. En: <http://proceso.hn/2012/05/10/Term%C3%B3metro/Aprobada.Ley.del/51729.html> Aprobada ley penitenciaria. La Tribuna. 09.05.2012 (versión digital); Sistema penitenciario pasa a control de Secretaría del Interior. La Prensa. 09.05.2012 (versión digital); Congreso Nacional. Comisión de Seguridad. Dictamen al proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional. 10.04.2012.

establece como máximo dos años de transición entre el actual sistema que se encuentra bajo control de la Secretaría de Seguridad, por medio de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, y el nuevo sistema, que será administrado por el Instituto Nacional Penitenciario, a través de personal administrativo y técnico especializado.

Dentro de los retos que se avizoran en este período de transición, se encuentran la necesidad de ubicar los recursos económicos para echar a andar el Instituto, sus programas y dependencias y el destino que se dará al personal actual proveniente de la Secretaría de Seguridad, particularmente, el de custodia. Sin embargo, el Decreto Legislativo aprobado, contempla la posibilidad que puedan trasladarse a la institución que se creará. Este último aspecto, plantea un desafío a las organizaciones de derechos humanos que tendrán que mantener un monitoreo especial para evitar que se incorporen al nuevo Instituto antiguos policías penitenciarios, con historiales de corrupción o de violación a los derechos humanos. Existen en el país ejemplos de nuevas instituciones que defraudaron las expectativas que de ellas se tenían, porque absorbieron el personal y la cultura laboral de sus antecesoras.

### 1.3.2. REFORMA CONSTITUCIONAL PARA AMPLIAR EL TÉRMINO DE DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN SIN CONTROL JUDICIAL.

Teniendo en consideración el creciente nivel de violencia y delincuencia y la presencia de la criminalidad organizada de origen transnacional en el país, el Congreso Nacional de la República, decidió aprobar la ampliación del término de detención. En efecto, con fecha 24 de junio de 2011 y mediante Decreto Legislativo No. 106-2011, fue aprobada la reforma a los artículos 71 y 92 de la Constitución de la República, ampliando, en

casos excepcionales, de 24 a 48 horas el término con que cuenta la Policía Nacional para poner a una persona detenida a la orden de la autoridad judicial y reduciendo las exigencias probatorias para decretar auto de procesamiento a una persona indiciada. Esta reforma fue justificada en dos argumentos básicos: 1) que ya existe en otros países del continente, y, 2) en el pragmatismo de los modernos procesos penales y en la complejidad que supone la actual investigación de algunos delitos, principalmente los del crimen organizado. Este Decreto fue publicado el 8 de agosto de 2011 en el número 32,588 del Diario Oficial La Gaceta. Fue ratificado en segunda legislatura durante el año 2012.

No puede desconocerse que hay algunos países del entorno latinoamericano cuyas Constituciones establecen períodos mayores a las 24 horas para que las personas detenidas sean puestas a la orden de juez competente. Tal es el caso de Colombia (36 horas, artículo 28 constitucional), República Dominicana (48 horas, artículo 8 constitucional) y Venezuela (48 horas, artículo 44 constitucional)<sup>47</sup>. Teniendo en cuenta las actuales condiciones de ineficacia generalizada de la investigación criminal y de las serias dudas que se ciernen sobre la integridad y el compromiso de muchos miembros del cuerpo policial con el respeto de los derechos humanos, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no estuvo de acuerdo con la reforma efectuada. Las alarmas se disparan cuando se tiene en cuenta, además, que no se designa la autoridad competente para decidir en qué casos se amplía la detención policial y/o la incomunicación, y que, no existe en el país un registro central de

---

<sup>47</sup> Base de Datos Políticos de las Américas (2006). *Detención, arresto y sistema penal. Estudio Constitucional Comparativo*. [Internet]. Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown. En: <http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/detencion.html> Consultada 31.05.2012.

personas detenidas, como lo recomendó hace ya veinte años el informe Los hechos hablan por sí mismos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, o, la sentencia contra Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Juan Humberto Sánchez en 2003.

Es importante señalar, que más allá de la intención legislativa, es la Policía Nacional y el Ministerio Público los que deben adaptar sus prácticas a la norma constitucional y no a la inversa, pues es la norma fundamental del Estado la que debe inspirar el quehacer de estas instituciones. Es importante destacar, que no hubo impugnaciones de tipo legal a esta decisión legislativa.

### 1.3.3. DENUNCIAS DE DETENCIÓN ILEGAL.

---

La detención ilegal o arbitraria, es, de acuerdo a la normativa nacional, aquella que no proviene de delito o falta previamente establecida en la ley, o la que, aun cuando sea motivada en la persecución o imputación de un delito, se lleva a cabo sin presentarse la flagrancia o se realiza sin mediar orden judicial (o del Ministerio Público en casos excepcionales y circunstancias temporales). Aun habiendo sido legal en su comienzo, la detención o prisión puede tornarse en arbitraria si: (i) no se lleva a cabo en los lugares determinados por la ley, (ii) se oculta al detenido o no se hace constar su presencia en las dependencias policiales o penitenciarias, (iii) supera el tiempo estipulado en la ley, ya se trate del término para poner al detenido a disposición de juez competente, o del estipulado para una forma particular de detención o prisión, y (iv) cuando el detenido o preso sea sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Criterios para determinar la detención ilegal como modalidad violatoria del derecho a la libertad personal



Bajo el tipo penal de privación injusta de la libertad (artículos 193 y 194 del Código Penal), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público registró 54 denuncias durante 2011. De ellas, 40 fueron tramitadas en San Pedro Sula y 14 en Tegucigalpa. De igual manera, durante el año 2012, la Fiscalía reportó que recibió 27 denuncias por el delito de detención ilegal.

### 1.3.4. PERSONAS EXTRANJERAS EN CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

De la misma forma en que durante las últimas dos décadas se ha incrementado el flujo de migrantes hondureños, especialmente hacia Estados Unidos, Canadá, España y México, también ha aumentado el número de migrantes en tránsito por Honduras. Las autoridades del Departamento de Migraciones Internacionales de la Dirección General de Migración y Extranjería, unidad desconcentrada de la Secretaría del Interior y Población, han indicado a personal de esta

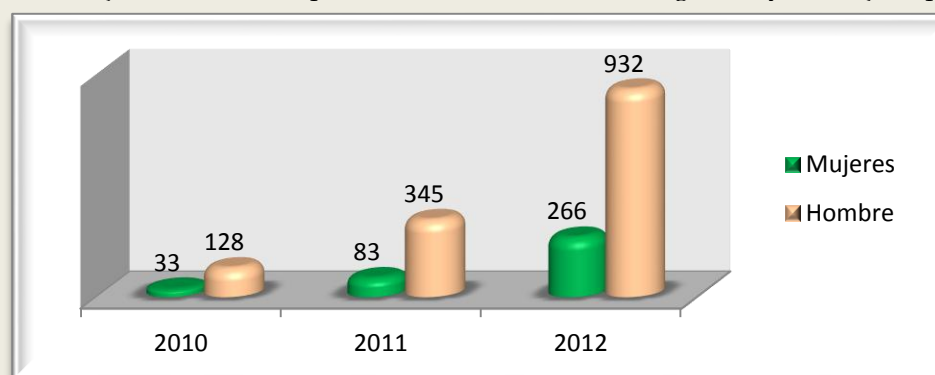
Secretaría que, dentro de las posibilidades presupuestarias del Estado hondureño, se atiende dignamente a las personas que ingresan irregularmente en el país.

Mediante entrevistas, se determina si alguien es solicitante de refugio, asilo o si es víctima de la trata de personas, informando además, a sus respectivas embajadas o consulados. Hecha esta salvedad, hay que señalar que la situación de las y los migrantes restringidos en su libertad personal por haber ingresado de manera irregular al país, puede ser monitoreada preventivamente por las organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo a información proporcionada por el Departamento de Migraciones Internacionales, fueron custodiadas por la Dirección General de Migración y Extranjería 1,787 personas extranjeras: 161 personas en el año 2010, 428 personas en el 2011, 1,198 personas en el 2012 (ver gráfico 20). En el gráfico 21 se presenta, a título de ejemplo, una muestra de las diferentes nacionalidades o procedencias de las mismas.

**Gráfico 20**

Personas extranjeras en custodia por la Dirección General de Migración y Extranjería por año.

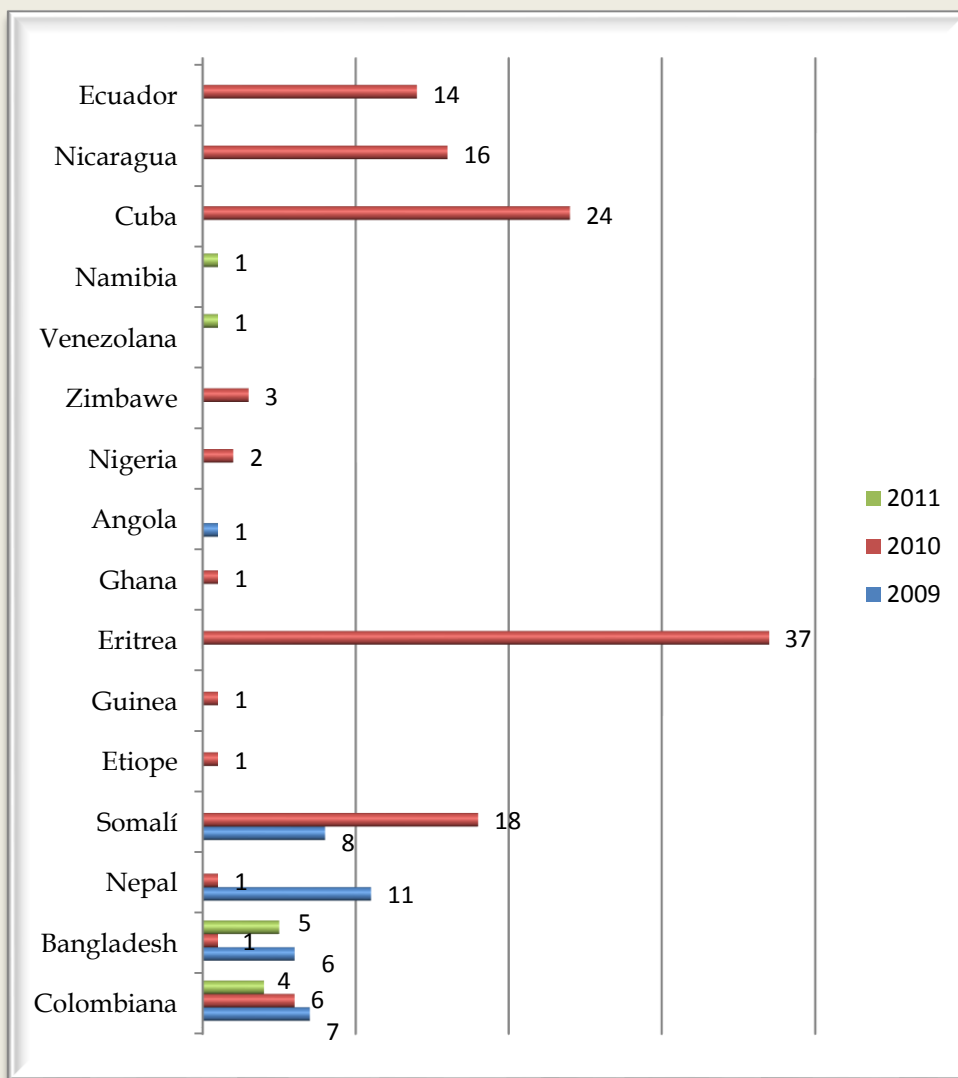


**Fuente:** Elaboración de la SJDH con datos proporcionados por el Departamento de Migraciones Internacionales de la Dirección General de Migración y Extranjería.

según el artículo la XI de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas.

**Gráfico 21**

Solicitantes extranjeros de estatus de refugiado en Honduras. Años 2009-2011.



**Fuente:** Elaboración propia de la SJDH en base a datos proporcionado por el Departamento de Migraciones Internacionales.

**a. Población migrante que reside legalmente en Honduras.**

Según el Departamento de Migraciones Internacionales de la Dirección General de Migración y Extranjería en nuestro país a la fecha residen 29,194 personas extranjeras de la nacionalidad siguiente:

### América

País	Cantidad Residentes
Argentina	259
Barbados	1
Belice	52
Bolivia	273
Brasil	299
Canadá	559
Chile	266
Colombia	1549
Costa Rica	743
Cuba	476
Dominica	4
Ecuador	909
El Salvador	3,411
Estados Unidos de América	6,459
Granada	1
Guatemala	2,368
Guyana	15
Haití	45
Islas Caimán	9
Jamaica	18
México	1,131
Nicaragua	3,130
Panamá	591
Paraguay	47
Perú	541
Puerto Rico	2
República Dominicana	161
Saint Christopher	2
San Vicente	2
Trinidad y Tobago	6
Uruguay	57
Venezuela	191
<b>Total general</b>	<b>23,577</b>

### Asia

País	Cantidad Residentes
Afganistán	2
Bangladesh	13
Cambodia	2
China	1,415
Hong Kong	2
China Taiwán	93
Corea del Sur	575
Emiratos Árabes	1
Filipinas	225
India	63
Indonesia	10
Irán	9
Israel	52
Japón	422
Jordania	52
Líbano	18
Malasia	4
Maldivas	1
Pakistán	13
Palestina	33
Singapur	2
Siria	1
Sri Lanka	7
Tailandia	3
Turquía	3
Vietnam	4
<b>Total general</b>	<b>2,603</b>

### Oceanía

País	Cantidad Residentes
Australia	13
Micronesia	1
Samoa	1
Tonga	4
<b>Total general</b>	<b>19</b>

## Europa

País	Cantidad Residentes
Albania	1
Alemania	562
Andorra	3
Austria	31
Bélgica	77
Bielorrusia	1
Checoslovaquia	4
Chipre	4
Croacia	2
Dinamarca	34
Eslovaquia	4
España	623
Estonia	1
Finlandia	21
Francia	187
Grecia	9
Holanda	110
Hungría	1
Inglaterra	200
Irlanda	20
Islandia	4
Italia	389
Lituania	1
Malta	8
Moldavia	11
Noruega	9
Nueva Zelanda	7
Polonia	14
Portugal	27
República Checa	6
Rumania	5
Rusia	14
Serbia	1
Suecia	28
Suiza	92
Ucrania	5
Yugoslavia	1
<b>Total general</b>	<b>2,939</b>

## África

País	Cantidad Residentes
Argelia	3
República del Congo	1
Egipto	7
Etiopía	1
Ghana	1
Guinea Ecuatorial	1
Kenia	3
Madagascar	2
Marruecos	3
Namibia	1
Nigeria	4
Senegal	1
Sudáfrica	18
Tanzania	6
Túnez	1
Uganda	1
Zambia	2
<b>Total general</b>	<b>56</b>

### 1.3.5. APROBACIÓN DE LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Desde el año 2002, se conformó la Comisión Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (CICESCT), con la participación, entre otros, de la Secretaría de Gobernación y Justicia (hoy del Interior y Población), la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Especial de la Niñez, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, la Comisión de Niñez y Familia del Congreso Nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería, COIPRODEN, la Comisión Interamericana de Mujeres, Casa Alianza Honduras, Save The Children, Goal Honduras, Plan Internacional, IPEC-OIT, UNICEF. Desde entonces, esta Comisión ha llevado a cabo esfuerzos para la prevención y erradicación de la trata de personas, entre ellos, la realización de importantes campañas para visibilizar esta

problemática y estimular la denuncia de la víctima.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se sumó al esfuerzo iniciado por la CICESCT, conjuntamente con el Despacho de la Primera Dama, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Desarrollo Social, la Fiscalía Especial de la Niñez, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, Instituto Nacional de la Mujer, la Comisión de Niñez y Familia del Congreso Nacional, Dirección General de Migración y Extranjería, Consejo Regional de Desarrollo 12 Centro, COIPRODEN, CHF, Casa Alianza Honduras, Save The Children, Plan Internacional, Cámara Nacional de Turismo, UNICEF, IPEC-OIT, OIM y la Embajada de Estados Unidos de América, elaboraron el Anteproyecto de Ley contra la Trata de Personas, el cual fue remitido al Congreso Nacional de la República.

Mediante Decreto Legislativo No. 59-2012, de fecha 25 de abril del año 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,865 de fecha 6 de julio del mismo año, fue aprobada por el Congreso Nacional de la República la Ley Contra la Trata de Personas.<sup>49</sup> De esta manera el Estado de Honduras dio cumplimiento a importantes recomendaciones que en materia de trata de personas habían sido formuladas por órganos internacionales de Derechos Humanos. Por otra parte, con la aprobación de esta importante iniciativa, la normativa jurídica hondureña se armoniza a los estándares internacionales, insertando en esta avanzada ley, principios de política de prevención del delito de trata de seres humanos, elementos de institucionalidad dotada de facultades y recursos para combatir

este delito y la ejecución de programas y proyectos dirigidos a la atención y rehabilitación de las víctimas.

Según esta nueva normativa, incurre en el delito de trata de personas “quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de 18 años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos”.

Con la aprobación de esta Ley, se crea legalmente la Comisión Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (CICESCT), que funcionará como un ente adscrito a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y tendrá personalidad jurídica, autonomía organizativa, técnica, financiera y presupuestaria.

De acuerdo con esta ley, integrarán esta Comisión las siguientes entidades: La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos; la Corte Suprema de Justicia; el Congreso Nacional de la República, a través de las comisiones vinculadas a la temática; el Ministerio Público; la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría del Interior y Población; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Secretaría de Educación; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Turismo; la Secretaría

---

<sup>49</sup>Luego de su aprobación, se procederá a la instalación oficial de la CICESCT por parte del Sr. Presidente de la República, nombramiento de la Junta Directiva y a la asignación presupuestaria que permita su organización y funcionamiento.

Técnica de Planificación y Cooperación Externa; la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro descendientes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia; el Instituto Nacional de la Juventud; el Instituto Nacional de la Mujer; los Comisionados Regionales Presidenciales; la Asociación de Municipios de Honduras y ONGs acreditadas que trabajan en las temáticas de esta Comisión, quienes asistirán con derecho a voz y voto.

La ley recién aprobada se constituye en corolario de la ratificación, paulatina, pero constante, de una serie de instrumentos internacionales sobre la materia por parte del Estado de Honduras. Entre dichas convenciones se encuentran, entre otras, la de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y, contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; el Convenio 182 de OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil; el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.

La nueva legislación intenta ofrecer un marco regulatorio integral (no sólo penal) al abordaje de esta problemática, desde la formulación de políticas públicas hasta la protección y atención de las víctimas, pasando por las campañas de prevención y sensibilización sobre el tema, los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la trata de personas y el establecimiento de normas penales especiales, sustantivas y procesales.

Dentro de los aspectos que contempla la Ley pueden destacarse los siguientes: (i) esta

Comisión contará con un Equipo de Respuesta Inmediata, integrado por representantes técnicos de las instituciones integrantes, el que podrá recabar información de posibles víctimas, canalizando sus casos, en lo legal y humano, ante los órganos competentes, los que, por virtud de la misma ley, están incorporados a la Comisión; (ii) la conformación de un sistema nacional de información sobre la Trata de personas a cargo de la recolección, procesamiento y análisis de información estadística y académica sobre las características y dimensiones de la Trata doméstica y hacia el exterior, en Honduras; (iii) el establecimiento de un fondo para la atención y reintegración social de víctimas de la trata de personas; (iv) la reforma el tipo penal de la trata de personas (anteriormente regulado en el artículo 149 del Código Penal, cuyo contenido se deroga), para dotarle de mayor detalle en cuanto a las prácticas sancionables e incrementar su penalización; (v) la reforma la Ley de Migración y Extranjería para autorizar la emisión de permisos especiales de permanencia en el país hasta por cinco años a víctimas extranjeras de la trata de personas; y, (vi) la reforma de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Uso Ilícito para permitir el ingreso de recursos al fondo de atención a las víctimas de trata de personas y a las instituciones que tienen programas de atención a la problemática.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos instó el proceso de convocatoria y juramentación de la CICECST, la cual quedó formalmente instalada el 12 de diciembre de 2012 en solemne acto presidido por la Designada Presidencial y Ministra de la Presidencia, Lic. María Antonieta Guillen de Bográn en representación del Presidente de la República.



#### 1.4. INVIOABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES

---

El secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones es uno de los derechos que protege la esfera personal y privada de la persona. En relación a ella, el Estado tiene una obligación de respetar, limitando su intervención a casos excepcionales, previamente definidos y evaluados bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

Cualquier actividad de entidades administrativas en este sentido, tendría que realizarse bajo estricto control de un órgano jurisdiccional. En Honduras, las organizaciones de derechos humanos tienen particular celo por este derecho, debido a que, por más de tres décadas (aproximadamente de 1963 a 1994), el sector de telecomunicaciones fue visto como parte del engranaje de seguridad del Estado. Durante este período, no sólo se abusó de las intervenciones, sobre todo telefónicas, sino que también se sentó una cultura de permisibilidad y trivialización de estas prácticas.

Hay que reconocer que algunas democracias consolidadas del mundo occidental han tomado este tipo de medidas. Precisamente ahí reside la preocupación expuesta en la opinión que emitió oportunamente esta Secretaría de Estado, fundamentada en que el Estado hondureño ha carecido históricamente de controles efectivos ante el abuso autoritario en materia de seguridad, los cuales siempre se han tratado de justificar en algún tipo de amenaza interna o externa. Por ello, es necesario tomar recaudos para preservar el ejercicio de este derecho.

La aprobación por parte del Congreso Nacional de la República de la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, emitida el 8 de diciembre de 2011, mediante Decreto número 243-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,731

de 26 de enero de 2012, ha sido objeto de muchos cuestionamientos, principalmente a través de los medios de comunicación. Sin embargo, según consultas realizadas a la Secretaría General de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sus registros no se ha presentado hasta la fecha, ningún recurso en contra de la referida ley.

#### 1.5. EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES<sup>50</sup>.

---

La libre creación y funcionamiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el más incluyente sentido del término, ha sido considerada como un correlato del derecho de asociación, reunión, manifestación pacífica, libertad de expresión, opinión, petición y de denuncia. Es, por así decirlo, un auténtico derecho a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Para constatar el goce de este derecho y obligación, atendiendo invitación del Gobierno de la República por medio del Señor Presidente de la República, realizó una visita oficial a Honduras la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya durante los días del 7 al 11 de febrero de 2012. La señora Relatora visitó Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba y se reunió con una serie de funcionarias y funcionarios estatales, representantes de la comunidad internacional y líderes de varias organizaciones no

---

<sup>50</sup> Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/53/144 de 8 de marzo de 1999.

gubernamentales. En el sector público se reunió con el señor Presidente de la República, Ministros de Justicia y Derechos Humanos, de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños y del Instituto Nacional Agrario, los viceministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior y Población, de Seguridad; con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; personal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. También se reunió con miembros de la comunidad diplomática (G-16) y de las agencias de las Naciones Unidas.

En la declaración final de su visita, la Relatora reconoció la apertura de la Presidencia de la República para recibir a los titulares de los procedimientos especiales de Naciones Unidas y encomió al Gobierno por la creación de las Secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, así como por la instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

También expresó su preocupación por la situación precaria, de amenazas y riesgos, en que viven ciertas categorías de defensores de derechos humanos, particularmente periodistas, abogados, fiscales, jueces, defensoras de los derechos de las mujeres, de la niñez, de la comunidad de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas y afro hondureños, y de los activistas por el medio ambiente y el derecho a la tierra. Señaló que, a partir del golpe de Estado de 2009, varios defensores de derechos humanos han sufrido "... ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas (sic), tortura y malos tratos, amenazas a muerte, ataques, acoso y estigmatización".<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Declaración de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos

En este sentido lamentó que "...a pesar de que muchos defensores gozan de medidas cautelares y de protección emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, me preocupa haber recibido información sobre el fracaso de las autoridades para proveer medidas efectivas de protección, y por ende de que estos defensores a pesar de las medidas sean víctimas de asesinatos, atentados y amenazas...". "En repetidas ocasiones", puntualizó, "los defensores de derechos humanos me informaron que se abstendrían de buscar protección debido al temor de la policía, y que el contacto con la misma los expone a mayores riesgos de seguridad...".

La Relatora concluyó su visita realizando una serie de recomendaciones al Estado, a los propios defensores y a la comunidad internacional. Entre las medidas sugeridas pueden mencionarse: i) la incorporación al ordenamiento interno de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos; ii) medidas de fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y, iii) la protección efectiva para los defensores, a través de mecanismos coordinados entre las diferentes instituciones que tienen competencia en la materia.

Con ocasión de la visita que hiciera la Señora Relatora a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se le informó que con el objetivo de darle cumplimiento a la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se creó la Dirección General de Mecanismos de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales. Esta Resolución "alienta a los estados a crear mecanismos de consulta y diálogo con los defensores de los derechos humanos y a

---

Humanos, Margaret Sekaggya, al concluir su visita oficial a Honduras.

reforzarlos, entre otras formas, estableciendo un centro de coordinación de los defensores de los derechos humanos dentro de la administración pública, en el caso de que no exista, para entre otros fines, determinar necesidades concretas de protección, incluidas las de las defensoras de los derechos humanos, y asegurar la participación de los defensores de los derechos humanos en la elaboración y aplicación de medidas específicas de protección”.

Durante el año 2011 y primer semestre del 2012, esta Dirección ha concentrado buena parte de su trabajo en la preparación del Anteproyecto de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de Justicia, así como, en la formulación de un Plan Nacional de Protección y la conformación de una Red Nacional de Protección para dichas poblaciones que han sido mayormente afectadas por la violencia en nuestro país. En este proceso se realizaron amplias jornadas de consulta con los grupos metas (defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de la justicia), que culminó con un encuentro nacional de defensores de derechos humanos facilitado por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

Esta Dirección, se encuentra también comprometida en la realización de un diagnóstico para medir la efectividad de la aplicación de las Medidas Cautelares, las Medidas Provisionales y las Medidas de Seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Autoridades Nacionales. Este diagnóstico es clave para la creación de un Protocolo de Actuación Interinstitucional que permita la efectiva implementación de las mismas y mejore los resultados de su aplicación,

especialmente, en cuanto a la protección y seguridad de las personas beneficiarias de estas medidas. Este diagnóstico se realiza en varias regiones del país y cuenta con la participación activa de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, instituciones del Estado y la cooperación internacional, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos reconoce que incumbe al Estado de Honduras la responsabilidad de garantizar la protección, a través de las autoridades competentes, de toda persona, ya sea en forma individual o colectiva frente a toda forma de violencia, intimidación, amenaza, represalia, discriminación negativa de hecho o de derecho o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la promoción y defensa de los derechos humanos. Es además obligación del Estado, investigar y sancionar a los autores de cualquier acción contra defensoras y defensores de los derechos humanos.

## B. DERECHOS POLÍTICOS

Los derechos políticos se refieren a la potestad que tienen las personas de elegir y ser electas para participar en el gobierno de su país.

Sobre este particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”, “toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”, y, “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento

equivalente que garantice la libertad de voto” (Artículo 21)<sup>52</sup>

En relación a este mismo tema, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala lo siguiente: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones (distinciones del artículo 2: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social), y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país” (Artículo 25)<sup>53</sup>

## 1. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN HONDURAS

### 1.1. LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2009 Y EL INICIO DEL GOBIERNO DE PORFIRIO LOBO SOSA

El 29 de noviembre de 2009 se celebraron elecciones generales. El Partido Nacional llevó como candidato presidencial a Porfirio Lobo Sosa, el Partido Liberal a Elvin Ernesto Santos, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras a Felcito Ávila, el Partido Unificación Democrática a Cesar Ham y el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, a Bernard Martínez. En estas elecciones generales, se alzó con el triunfo, Porfirio Lobo

Sosa del Partido Nacional. Lobo Sosa obtuvo el 56.6% de los votos y su partido obtuvo 71 de los 128 diputados al Congreso Nacional de la República, lo que le dio mayoría a su partido político en este poder del Estado. En estas elecciones participaron 14,500 candidatos para ocupar 2,896 cargos de elección popular, que incluyen 298 corporaciones municipales, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y tres designados presidenciales.<sup>54</sup>

El Presidente Lobo Sosa tomó posesión de su cargo el 27 de enero de 2010. Uno de sus primeros actos de su gobierno, fue ponerse de acuerdo con Leonel Fernández, Presidente de la República Dominicana, para que José Manuel Zelaya Rosales pudiera abandonar el país y viajar a la República Dominicana en condición de visitante distinguido. Zelaya Rosales había sido defenestrado de su cargo de Presidente de la República y expulsado del país el 28 de junio de 2009 en un hecho sin precedentes en la historia política del país que generó muchas controversias y manifestaciones públicas.

La comunidad internacional reconoció este acto político como un golpe de Estado y actuó en consecuencia. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nombrada por el gobierno del Presidente Lobo Sosa, lo tipificó como un golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo por parte de los demás poderes del Estado. Honduras había experimentado varios golpes de Estado en el pasado, pero estos habían sido encabezados por los militares. Estos, después de haber expulsado del poder al Presidente del partido político gobernante, retuvieron el aparato estatal y lo condujeron durante periodos de tiempo variable, hasta que se retornó al orden constitucional mediante las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente encargada de redactar una

<sup>52</sup> “Declaración universal de Derechos Humanos” en Centro de Derechos Humanos, *Derechos humanos. Recopilación de instrumentos internacionales*, Nueva York, 1988, p. 5

<sup>53</sup> *Ibidem*, p. 28

<sup>54</sup> Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, *Informe final elecciones generales de Honduras 2009*, Washington, 2010, p. 5

nueva Constitución Política y emitir una nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Golpes de Estado de este tipo ocurrieron el 21 de octubre de 1956, el 3 de octubre de 1963 y el 4 de diciembre de 1972. Ramón Villeda Morales, Presidente de la República durante el período 1957-1963, fue expulsado hacia San José Costa Rica el 3 de octubre de 1963, como lo sería Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009. Zelaya Rosales había entrado al país el 22 de septiembre de 2010 y se había refugiado en la sede de la Embajada de Brasil, en la que permaneció durante varios meses.

Como una muestra adicional de su voluntad de promover la reconciliación nacional, el Presidente Lobo nombró en su gabinete a sus adversarios políticos en las elecciones generales de noviembre de 2009. Fue así que Felicito Ávila se convirtió en Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Bernard Martínez en Ministro de Cultura, Artes y Deportes y Cesar Ham, en Ministro-Director del Instituto Nacional Agrario. Elvin Santos acreditó dos miembros distinguidos de su partido político para ocupar el cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Ambiente. En estas carteras, fue nombrado Jacobo Regalado y Rigoberto Cuéllar.

## **1.2. ELECCIONES PRIMARIAS E INSCRIPCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS**

En su compromiso político por auspiciar la reconciliación nacional, el Presidente Lobo Sosa negoció con los Presidentes de Venezuela y Colombia el retorno del expresidente Zelaya Rosales y su eventual participación en la política nacional a través de la creación de un nuevo partido político. Esto se logró mediante el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático que fue suscrito en Cartagena de Indias el 22 de mayo de 2011. Mediante dicho Acuerdo, se admite que “durante la crisis política ha habido

personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos”, por lo que, “el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se compromete a atender sus denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables, respetando el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, reconociendo “la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras, hacer seguimiento a las recomendaciones hechas a Honduras como resultado de haberse sometido al Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y coordinar y concertar la cooperación y apoyo de Naciones Unidas y otros organismos internacionales para fortalecer las políticas públicas y las capacidades nacionales para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Honduras”.<sup>10</sup>

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el partido político que se constituyó en torno a la figura de Zelaya Rosales, fue fundado en la ciudad de Comayagüela el 26 de junio de 2011. El 20 de octubre de 2011, el Partido LIBRE fue reconocido legalmente por el Tribunal Supremo Electoral.<sup>55</sup> Casi en forma paralela a LIBRE, se crearon varios partidos políticos. El 25 de octubre de 2010, Salvador Nasralla, un conocido presentador de televisión, inscribió un partido político denominado Partido Anticorrupción (PAC). Desde el 8 de mayo de 2012 había sido inscrito el Partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia

---

<sup>55</sup> Datos tomados de LA TRIBUNA, 17 de noviembre de 2012, p. 15-B)



(FAPER) presidido por Andrés Pavón, conocido defensor de los derechos humanos. El FAPER había solicitado su inscripción el 23 de diciembre de 2011.<sup>56</sup> También fue inscrito el partido político Alianza Patriótica Nacional presidido por el General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al momento del derrocamiento de Zelaya Rosales.

### 1.3. LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012

Honduras es uno de los países de América Latina que desde hace ya varias décadas practica elecciones primarias para elegir los candidatos a puestos de elección popular.<sup>57</sup> Las elecciones internas o para elegir las autoridades (internas) de los partidos políticos fueron establecidas por primera vez por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas emitida por el Gobierno militar presidido por Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978), en cumplimiento de la Carta de Compromiso firmada por todos los sectores de la sociedad, como solución a la crisis política debido al enfrentamiento del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo.

El 18 de noviembre de 2012 se practicaron elecciones primarias en el país. Participaron en estas elecciones 14 movimientos o corrientes internas pertenecientes al Partido Liberal (3), el Partido Nacional (7) y el Partido Libertad y Refundación (4). En estas elecciones internas participaron alrededor de 40,000 aspirantes a 2,990 puestos públicos.<sup>58</sup> Estos datos son una muestra evidente que las elecciones primarias han provocado una verdadera explosión de aspiraciones políticas en el país ya que permiten prácticamente a cada quien que lo

desea buscar el apoyo popular para convertirse en candidato a un puesto público.

No podemos dejar de señalar que el tema de elecciones primarias adolece de un buen manejo democrático, puesto que los líderes de los movimientos internos son prácticamente los dueños de los mismos.

#### Partido Nacional

Nombre Candidato	Total Votos	% Votos
Juan Orlando Hernández Alvarado	446,230	45.42%
Ricardo Antonio Álvarez Arias	380,809	38.76%
Miguel Rodrigo Pastor Mejía	118,876	12.10%
Fernando Francisco Anduray Díaz	17,403	1.77%
Eva Celestina Fernández Rodríguez	6,986	0.71%
Loreley Concepción Fernández Rodríguez	6,313	0.64%
Víctor Hugo Barnica Alvarado	5,820	0.59%

#### Partido Libertad y Refundación

Nombre Candidato	Total Votos	% Votos
Iris Xiomara Castro Sarmiento	563,162	94.73%

#### Partido Liberal

Nombre Candidato	Total Votos	% Votos
Mauricio Villeda Bermúdez	322,627	51.97%
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo	274,476	44.21%
Esteban José Handal Pérez	23,676	3.81%

Para estas elecciones primarias, el Estado hondureño erogó, a través del Tribunal Supremo Electoral, 540 millones de Lempiras. Se instalaron 22,914 mesas electorales distribuidas en 5,439 centros de votación.<sup>59</sup> La manipulación denunciada de las actas

<sup>56</sup> LA GACETA, 15 de mayo de 2012

<sup>57</sup> Cf. Manuel Alcántara Sáez, *Experimentos de democracia interna: las primarias de partidos en América Latina*, Working Paper No. 293, Kellogg Institute, 2002, p. 20 y ss

<sup>58</sup> EL HERALDO, 18 de noviembre de 2012, p. 6

<sup>59</sup> Idem



electorales<sup>60</sup> por parte de líderes y activistas de los partidos políticos en competencia, ha enturbiado lo que debió haber sido una elección interna limpia y ejemplar. Esto se debió, en buena medida, a la enconada rivalidad entre líderes y activistas de las corrientes internas de los partidos políticos, y, a lo que se preveía como una suerte de empate técnico entre los principales líderes de las mismas.

A pesar de los inconvenientes que generó la manipulación de las urnas electorales y las dificultades de carácter técnico de última hora, las elecciones del 18 de noviembre de 2012 han puesto ya en claro quiénes serán los candidatos presidenciales de los partidos políticos más numerosos que se enfrentarán en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013. Son ellos: Juan Orlando Hernández, por el Partido Nacional, Mauricio Villeda Bermúdez, por el Partido Liberal y Xiomara Castro de Zelaya por el Partido Libre. A ellos, hay que agregar a Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción, a Andrés Pavón por el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia y a Romeo Vásquez Velásquez por el Partido Alianza Patriótica Nacional. Todavía está pendiente la selección del candidato presidencial del PINU-SD, del PDCH y de Unificación Democrática o la alianza de éstos entre sí o con cualquiera de los candidatos presidenciables de los partidos políticos tradicionales.

#### **1.4. RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO POLÍTICO ELECTORAL**

Es importante destacar que en el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación

---

<sup>60</sup> <http://www.laprensa.hn/Publicaciones/Elecciones-Internas-2012/Noticias/TSE-culpa-a-politicos-de-inflar-actas#.URBQO6WNvFE>

(CVR) se presentaron un conjunto de 84 recomendaciones para el Estado y la sociedad hondureña para que hechos políticos institucionales que originaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 no se repitan. En ese sentido se presentaron recomendaciones en 8 ámbitos: constitucional, derechos humanos, combate a la corrupción, fortalecimiento del Estado de Derecho, político electoral, internacional, medios de comunicación y política de la memoria, dentro de los cuales en el ámbito político electoral son 13 recomendaciones que representan un 15% del total, lo que evidencia la importancia de atender situaciones del país en este ámbito en relación a generar cambios en el sistema político electoral, cambios en los partidos políticos, y cambios en la institucionalidad electoral.

De una manera u otra, el cumplimiento de tales recomendaciones implica avanzar en un entorno favorable para los derechos políticos. Por ello es de destacar, que ha habido ciertos avances en este ámbito, como los siguientes:<sup>61</sup>

- a. Apertura por parte del TSE y del sistema político electoral para la inscripción de nuevos partidos políticos;
- b. 4 nuevos partidos inscritos;
- c. Convocatoria del TSE a las elecciones primarias para noviembre del 2012, en las que por primera vez irán tres partidos políticos este proceso; y,
- d. Celebración de elecciones primarias el día 18 de noviembre del 2012, de los tres partidos políticos legalmente inscritos.

De igual modo es de destacar, que en los últimos cuatro años se han presentado una serie de propuestas para una nueva Ley Electoral, como las siguientes:

---

<sup>61</sup> Véase. USCVR. Sistema de Monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la CVR, Tegucigalpa, 2012.

- a. Propuesta del anteproyecto del TSE, proyecto financiado por el PNUD “Ley Electoral y de Participación Ciudadana”;
- b. Propuesta “Código Electoral y de Participación Ciudadana” presentada por el CNA;
- c. Propuesta “Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas” presentada por el Mirador Electoral;
- d. Propuesta de reglamentos por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en los temas siguientes: Mesas Electorales, Escrutinios, Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, Justicia Electoral, Igualdad de Oportunidades, Observación Electoral.

Para la debida implementación de las recomendaciones de la CVR, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos presentó la iniciativa en el seno del Consejo de Ministros para la creación de la Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (USCVR), la cual fue aprobada mediante Decreto Ejecutivo PCM 071-2011 del 8 de noviembre de 2011. Dicha Unidad cuenta con independencia administrativa y funcional y está adscrita a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a fin de facilitar el apoyo gubernamental e institucional y canalizar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional.

Actualmente la USCVR ha elaborado una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en relación a las Recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En el marco de las recomendaciones en este ámbito, también, se ha recomendado mejorar los censos electorales y su actualización permanente, en función que la participación electoral sea una política de Estado, de manera que este tenga que llevar a cabo campañas de concienciación ciudadana que animen al voto,

no solo desarrolladas durante los procesos electorales. Es así, que se ha elaborado un diagnóstico del censo electoral en julio del 2012 por la organización *Hagamos Democracia* y el *Instituto Nacional para la Democracia*, cuyos resultados reflejan que un 18.6% del Censo Nacional Electoral han perdido su domicilio electoral, que un 6.1% de fallecidos y cuyos nombres aparecen todavía en los listados electorales, y un 5.4% se encuentran fuera del país. El diagnóstico en referencia muestra que un 30.1% del Censo Nacional Electoral representa el abstencionismo técnico o estructural, lo que significa que del censo electoral que contiene cinco millones (5,000,000) de ciudadanos inscritos, un millón quinientos mil (1,500,000) ciudadanos no tienen la posibilidad de ejercer el sufragio.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Consorcio Hagamos Democracia- Instituto Nacional Demócrata. *Diagnóstico al Censo Electoral de Honduras*, Tegucigalpa, Julio 2012.

## II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos sociales. Han sido diseñados para garantizar a las personas la satisfacción de las necesidades básicas a fin de que puedan llevar una vida digna y decorosa.<sup>63</sup> Estos derechos pueden ser visualizados como una suerte de prerequisites para el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos.

Entre los derechos económicos, sociales y culturales pueden mencionarse los siguientes: a trabajar y gozar de condiciones de trabajo satisfactorias, a fundar sindicatos y a sindicarse, a un salario justo y equitativo, a la seguridad social, a la protección de la familia, las madres y los niños, a un nivel de vida adecuado incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda, a la salud física y mental, a la propiedad individual y colectiva, a un ambiente sano, a participar en la vida cultural del país y a gozar de los beneficios de la ciencia, de la investigación científica, literaria y artística.<sup>64</sup>

Los derechos económicos, sociales y culturales tienen valor intrínseco e instrumental. No solo son valiosos en sí mismos, sino que también tienen un impacto positivo en otros aspectos de la vida social. “La salud, la nutrición y la educación”, puntualiza el PNUD, refiriéndose a tres derechos económicos, sociales y culturales claves, “se aprecian ahora no solo por su valor intrínseco, sino también por sus efectos positivos, directos o indirectos, en el

capital humano, la productividad y el potencial para la participación y la interacción social”.<sup>65</sup>

### A. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El principio de observancia establecido en los instrumentos internacionales en derechos humanos señala que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.<sup>66</sup>

#### 1. DERECHO AL TRABAJO Y CONDICIONES EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS EN EL EMPLEO

Este derecho es exigible por toda persona, sin discriminación de ningún tipo. Tiene varias dimensiones: i) como derecho a ganarse la vida mediante el desarrollo de una actividad digna; ii) si ya se tiene un empleo, como derecho, o grupo de derechos, a gozar de condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo. Estas condiciones mínimas incluyen la igualdad salarial entre el hombre y la mujer, la paga de un salario mínimo que garantice condiciones

<sup>63</sup> Alejandro Anaya, et. AL., *Glosario de términos básicos sobre derechos humanos*, Universidad Iberoamericana, México, 2006, p. 50

<sup>64</sup> Ídem. Véase también Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, *Los derechos económicos, sociales y culturales*, New York, 2004, p. 5

<sup>65</sup> PNUD, *Informe sobre desarrollo humano 2000*, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2000, p. 34

<sup>66</sup> Art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

de vida digna para las y los trabajadores y sus familias, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y la regulación de horarios y descansos<sup>67</sup>; y, iii) la que resulta de la realización del derecho al trabajo, entendiendo que el goce y ejercicio de este derecho, no viene sólo. Está acompañado de la responsabilidad que deviene de los deberes que están asociados a ese trabajo. No asumir esa responsabilidad y terminar sólo exigiendo el derecho, empobrece su ejercicio y compromete su goce.

### 1.1. DESEMPLEO ABIERTO, SUBEMPLEO Y LA PEA EN EL SECTOR FORMAL E INFORMAL

La tasa de desempleo abierto (TDA), está conformada por las personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo. Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, la tasa de desempleo abierto era del 3.6% de la población económicamente activa (PEA). En el área urbana, la TDA era de 5.6% y en el área rural del 1.7%. Desde una perspectiva de género, la TDA era de 2.9% para los hombres y de 5% para las mujeres. De los 120,811 desocupados del país, el 51.4 eran jóvenes menores de veinticuatro años.<sup>68</sup>

La capacidad del mercado laboral para absorber la fuerza de trabajo se mide a través del indicador meses buscando trabajo (MBT) por parte de las personas desocupadas. En este sentido, en las áreas urbanas del país, una persona desocupada lleva en promedio 6.7 meses buscando trabajo, mientras en las áreas rurales alcanza los 5.1 meses. Al analizar este indicador desde una perspectiva de género, encontramos que los MBT para los hombres era de 5.5 y para la mujer 7.1.

---

<sup>67</sup> Para la definición operativa de cada derecho, véase: PÉREZ MUNGUÍA, A. *Los derechos económicos, sociales y culturales: reflexiones sobre su concepto y situación en Honduras*. Tegucigalpa: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH) / Diakónia, Acción Ecueménica Sueca, Diciembre 2003.

<sup>68</sup> INE, EPHPM, mayo, 2012. Resumen Ejecutivo

Ambos indicadores revelan que las mujeres se encuentran en desventaja social en relación a los hombres.

Las Encuestas de Hogares recogen también una categoría denominada los desalentados. Se trata de personas que no están buscando trabajo pues asumen que no lo encontrarán. Aquí se ubican 113,733 personas, de las cuales 51.5% corresponden al área rural y 48.5%, al área urbana.<sup>69</sup>

Más que el desempleo abierto, el verdadero problema del mercado de trabajo hondureño es el subempleo invisible. Se encuentran en esta situación, aquellas personas que, aun estando ocupadas, trabajan menos de treinta y seis horas a la semana y desearían trabajar más. Según los datos de la XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de mayo 2012 del INE, se ubicaban en esta categoría 1,414,055 compatriotas, esto es, el 43.6% de la PEA. Estas personas devengaban salarios inferiores al salario mínimo (ver gráfico 22).

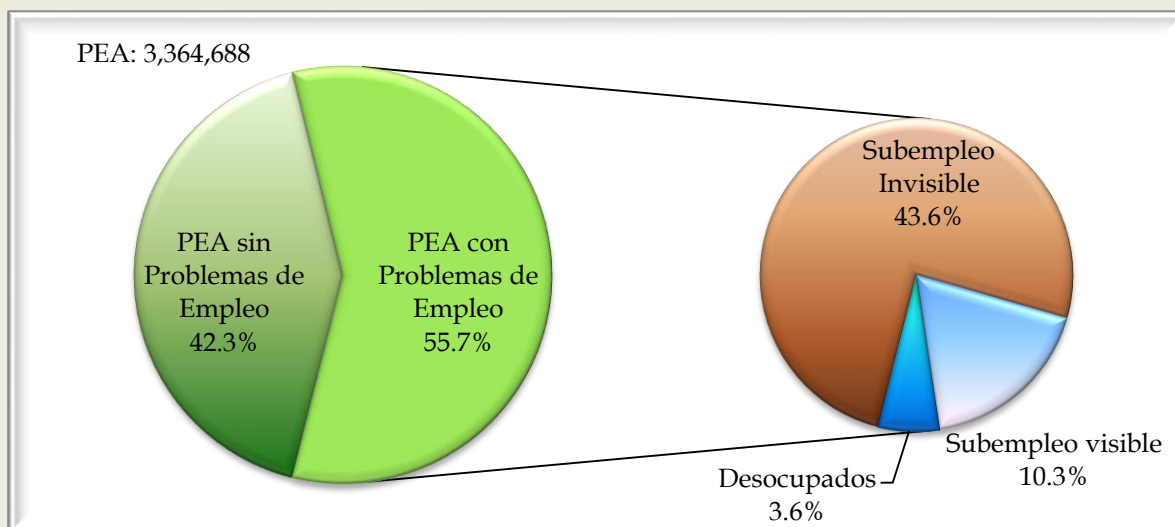
Un porcentaje significativo de la población económica activa del país se inserta en el sector informal de la economía. Es así que de cada 100 personas ocupadas, 42 realizan sus actividades laborales en el sector formal de la economía en el cual reciben un salario pagado por un patrono, 45 lo hacen por cuenta propia en el denominado sector informal, y, 13 son trabajadores no remunerados. Estamos hablando de personas que realizan un trabajo, pero que no reciben pago en metálico por el mismo (ver gráfico 23).

---

<sup>69</sup> Ídem.

**Gráfico 22**

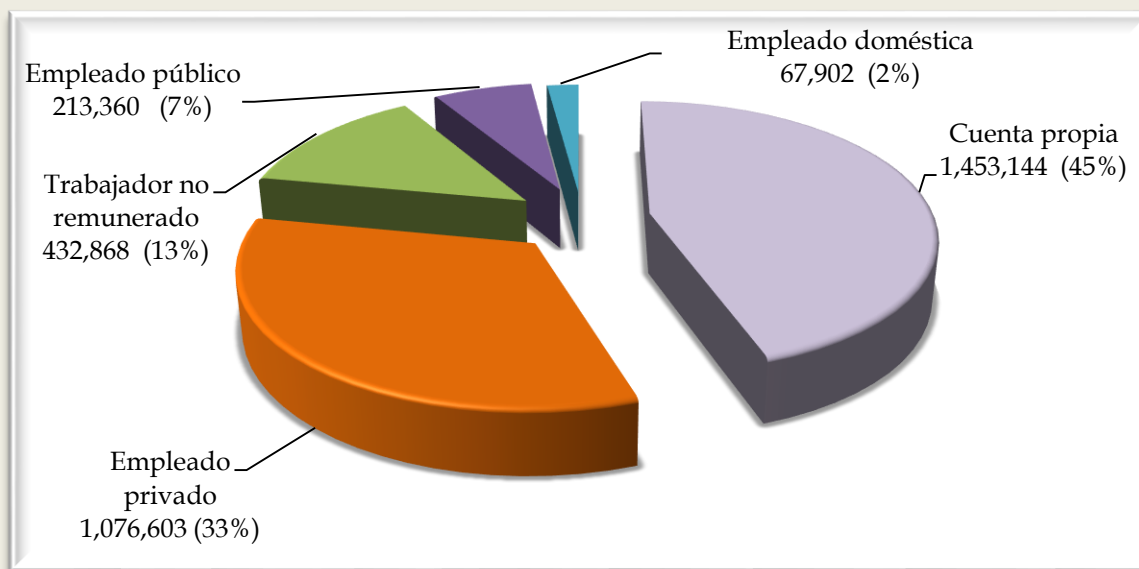
Población económicamente activa y subgrupos de PEA con problemas de empleabilidad.  
Año 2012.



**Fuente:** Observatorio del Mercado Laboral y XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2012, INE.

**Gráfico 23**

PEA por categoría ocupacional a nivel nacional. Año 2012.



**Fuente:** XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2012, INE.

Los trabajadores del sector informal y los trabajadores no remunerados carecen, por regla general, de un buen ingreso, de prestaciones sociales y de seguridad social. Ostentan, en pocas palabras, empleos precarios.

## 1.2. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

El país dispone de un sistema de educación técnica que se imparte en la educación secundaria. Existe, en forma paralela, un sistema de formación técnica y vocacional. La oferta más consistente en esta materia es brindada por parte del Estado, a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), que data del 28 de diciembre de 1972.

El INFOP es dirigido por un Consejo Directivo tripartito, en el que participan cuatro representantes del Gobierno, dos de la empresa privada y dos representantes de las centrales obreras, en representación de los trabajadores. Su administración cotidiana está a cargo de una dirección general, de la cual dependen la sede principal de Tegucigalpa y tres oficinas regionales ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba y San Lorenzo.<sup>70</sup>

Según datos del INFOP, durante el año 2011, participaron en sus actividades educativas a nivel nacional y en diferentes modalidades formativas y áreas ocupacionales, 200,120 personas y de enero a octubre de 2012, participaron de esta oferta educativa 196,846 personas.<sup>71</sup>

La mayoría de los beneficiarios de los servicios del INFOP provienen del sector de comercio y

servicios, seguidos por los del sector agrícola y el de la industria.

La oferta formativa del INFOP está orientada a ofrecer formación profesional en áreas como la producción industrial, formación agrícola, capacitación artesanal, formación agroindustrial, producción agropecuaria, floricultura, pequeña empresa rural, mecanización agrícola, tracción animal, hotelería y turismo, desarrollo empresarial, formación secretarial y formación de instructores. A partir de septiembre de 2011, se ha introducido la formación electrónica virtual a través del internet. En la actualidad, se ofrecen al menos, 13 cursos en línea.

**Participantes en cursos del INFOP  
2009-2012**

Año	Participantes
2009	154,412
2010	173,605
2011	200,120
2012	196,846
<b>Total</b>	<b>724,983</b>

Fuente: INFOP.

Para regular y ampliar la oferta de educación no formal, el Estado hondureño emitió la Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa No-formal. Esta fue aprobada mediante Decreto 313-98, del 18 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de febrero de 1999. Esta Ley creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación No-Formal (CONEANFO), como un órgano descentralizado a cargo de formular políticas en materia de educación no formal y de articular los esfuerzos de distintas entidades, públicas y privadas. Datos recientes indican que CONEANFO atiende unas 12,337 personas a través de 28 programas ejecutados por 10 instituciones que imparten educación no formal.

Existen otras instituciones del sector privado que brindan educación vocacional y formación

<sup>70</sup> Fuente de información: [www.infop.hn](http://www.infop.hn)

<sup>71</sup> Información proveniente de: INFOP. Informe anual 2011. Se asume que los datos sobre participación son recolectados por curso, lo cual podría implicar que la cantidad de personas capacitadas fuera menor, si tenemos en cuenta la posibilidad de que algunas ingresaran a varias actividades de la oferta formativa del Instituto.



profesional. Entre ellas, hay que destacar el Consejo Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Honduras (CADERH) que data de 1983.

En este ámbito de la educación, los desafíos continúan siendo considerables. Entre los factores que habría que tener en cuenta para dimensionar estos desafíos se encuentran la falta de recursos financieros, el bajo nivel de escolaridad de la población hondureña y las dificultades para ampliar la cobertura poblacional y geográfica de sus servicios.

Más allá del mero ámbito de la formación profesional, existe también el desafío siempre actual de mejorar la competitividad del trabajo. Para ello, se requiere diseñar y ejecutar programas de difusión de la innovación tecnológica, capacitación de los trabajadores en habilidades de alto nivel, la introducción de nuevas prácticas gerenciales, la integración de la micro, pequeña y gran empresa en emprendimientos asociados y de una disposición decidida hacia el emprendimiento y el riesgo. Este es un imperativo para una estrategia de desarrollo económico y social incluyente.

### 1.3. POLÍTICA DE EMPLEO

El Gobierno del Presidente Porfirio Lobo Sosa ha hecho ingentes esfuerzos por mejorar la oferta de puestos de trabajo y el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores.

Entre las iniciativas al logro de estos objetivos, el Presidente Lobo Sosa ha obtenido la aprobación por parte del Congreso Nacional de leyes como la Ley para el Establecimiento de la Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, el Programa Nacional de Empleo por Horas, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, la Ley de Creación de Regiones Especiales de Desarrollo, la Ley de Ingresos

Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales, la ampliación de la Matriz energética con la aprobación de más de 50 contratos de energía renovable, la Ley de Empleo en el Exterior. La Formación Profesional para el Empleo y el Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH)<sup>72</sup>.

Una de las iniciativas más importantes del actual gobierno en materia de generación de empleos, es la Ley del Programa Nacional de Empleo por hora. Esta fue aprobada mediante Decreto No. 230-2010 del 4 de noviembre de 2010. Esta Ley fue reglamentada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social mediante Acuerdo STSS-002-2011, de 21 de enero de 2011. Según datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y de los gremios empresariales<sup>73</sup>, cerca de 2,754 empresas manifiestan haber hecho uso del Programa Nacional de Empleo por Horas, generando, hasta septiembre de 2012, 34,642 empleos, el 70% de los cuales se concentra entre la población joven.

Las empresas que se han acogido a la iniciativa (empleo por hora) se encuentran ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca e Intibucá y se dedican a los rubros financieros, de seguros, bienes inmuebles, servicios, agricultura, comercio, industria manufacturera y construcción. En su mayoría, los contratos tienen una duración de dos meses, con jornadas de cuatro horas diarias. Con relación a las expectativas futuras del programa, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social reporta que se ha orientado a 2,223 empresas sobre esta iniciativa.

---

<sup>72</sup> Es de hacer notar, que casi la totalidad de estas iniciativas han sido objeto de cuestionamientos principalmente del sector obrero.

<sup>73</sup> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. *Programa Nacional de Empleo por Hora: Informe mensual a septiembre, año 2012.*

El Programa Nacional de Empleo por Hora que creó la Ley en referencia fue concebido como un programa temporal, anti-crisis y su prolongación fue condicionada a los resultados que se obtuvieran durante su implementación.

Sin embargo, ha sido objeto de fuertes críticas por dos de las centrales obreras, las que han pedido su revisión a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, bajo el argumento que esta Ley flexibiliza el mercado de trabajo, lesiona derechos de las y los trabajadores e infringe convenios internacionales que se encuentran por encima de la legislación nacional.<sup>74</sup>

A pesar de los avances expuestos en materia de generación de empleo como los acreditados por el Programa Nacional de Empleo por Hora, el Estado de Honduras no dispone aún de una política general de empleo, al menos de la forma en que ésta se entiende en el Convenio No. 122 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado de Honduras desde 1980<sup>75</sup>.

En este ámbito laboral, es importante destacar la firma del acuerdo entre el sector empresarial, la clase obrera y el gobierno sobre el aumento al salario mínimo vigente entre un 5.6 y 7.5%, según el número de empleados de cada empresa, para los próximos dos años, el cual será concedido de manera retroactiva a partir del mes de enero del año 2012. Este importante Pacto Social fue refrendado con la firma del Señor Presidente de la República, Licenciado, Porfirio Lobo Sosa, como testigo de

<sup>74</sup> Además de los decretos aparecidos en el diario oficial, v. *En la mira ley de empleo por horas en Honduras*. El Heraldo (versión digital), 07.06.11.

<sup>75</sup> Esto, sin perjuicio que en algunas administraciones se hayan elaborado documentos cuyas políticas, estrategias y líneas de acción no tuvieron continuidad ni siquiera durante los períodos presidenciales en que fueron formuladas, tal fue el caso del “Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno en Honduras (PGED)”, aprobado mediante Decreto Ejecutivo PCM 05-2007 y cuyo panorama temporal se extendía hasta 2015.

honor en un acto llevado a cabo en Casa de Gobierno. Este acuerdo se logró bajo la rectoría de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas de empleo y del manejo de los procedimientos administrativos de solución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo. Como resultado de este acuerdo, el salario mínimo, percibido por unos 500.000 trabajadores, oscilará entre 243.00 y 376.00 dólares. Para las empresas adheridas al régimen de zonas libres, el salario mínimo aplicable a partir de 2014 será de 5,380.70 Lempiras.

Antes de la firma de este histórico acuerdo, la negociación del salario mínimo había objeto de activas controversias y de falta de entendimiento de los interlocutores principales. Esto traía como resultado, que el Estado terminara fijando unilateralmente el mismo, con el consecuente enfado de alguna de las partes involucradas.

#### 1.4. SALARIO MÍNIMO

---

Los criterios y procedimientos para la fijación del salario mínimo en Honduras están regulados por la Ley del Salario Mínimo, emitida en 1971. Una reforma la Ley del Salario Mínimo fue introducida mediante el Decreto 43-97 del 20 de abril de 1997. Esta legislación fue reglamentada el 6 de octubre de 1988 por el Poder Ejecutivo, mediante el acuerdo 345 que norma la organización y funcionamiento de las comisiones del salario mínimo. El 5 de octubre de 2000, fue reformada nuevamente, a través de Acuerdo Ejecutivo STSS 154-2000, que regula el pago del bono educativo, creado por el Decreto 43-97.

El cuadro muestra la tabla del salario mínimo vigente a partir del 1 de enero de 2012.

Como puede verse, la gama de salarios mínimos es variada. Es más bajo en el área rural que en el área urbana. Es ligeramente más bajo en empresas que tienen menos trabajadores que en las que tienen más trabajadores. Es más bajo en las zonas libres que en otras empresas urbanas del sector industrial, servicios y comercial.

Aunque se ha hecho un esfuerzo serio por fijar el salario mínimo con responsabilidad, el monto del salario mínimo continúa siendo un tema de controversia por su impacto en el acceso a condiciones equitativas y satisfactorias

de empleo y de calidad de vida.

Tanto el artículo 128 numeral 5 de la Constitución de la República como el Convenio No. 131 de la OIT, relativo a la fijación del salario mínimo, adoptado desde 1970 pero aún no ratificado por Honduras, prescriben que entre los elementos que habrán de tenerse en cuenta para determinar el nivel del salario mínimo están las necesidades de las y los trabajadores y sus familias. Si tenemos en cuenta que, para mayo de 2012, el INE fijaba en 2,806.7 lempiras mensuales el costo de la canasta básica personal en el área urbana<sup>76</sup> y la

**Tabla de salario mínimo, vigente a partir del 1 de enero de 2012. Acuerdo STSS-001-2012.**

No.	Rama de actividad económica	Tamaño de las empresas por número de trabajadores	Salario mínimo 2012 mensual	Salario mínimo 2012 jornada ordinaria de 8 horas laborables	Salario mínimo 2012 por hora
1	Agricultura, silvicultura, caza y pesca	De 1 a 10	4,612.61	153.75	19.22
		De 11 a 50	4,853.38	161.78	20.22
		De 51 a 150	4,882.79	162.76	20.34
		De 151 en adelante	4,929.21	164.31	20.54
2	Explotación de minas y canteras	De 1 a 10	6,301.68	210.06	26.26
		De 11 a 50	6,490.74	216.36	27.04
		De 51 a 150	6,784.82	226.16	28.27
		De 151 en adelante	6,849.32	228.31	28.54
3	Industria Manufacturera 1.) Fabril y Artesanal				
		De 1 a 10	6,185.52	206.18	25.77
		De 11 a 50	6,580.46	219.35	27.42
		De 51 a 150	6,878.62	229.29	28.66
4	Regionalizado <sup>76</sup>	De 1 a 10	6,944.01	231.47	28.93
		De 11 a 50	6,580.46	219.35	27.42
		De 51 a 150	6,878.62	229.29	28.66
		De 151 en adelante	6,944.01	231.47	28.93
5	Electricidad, gas y agua	De 1 a 10	3,463.89	115.46	14.43
		De 11 a 50	6,504.96	216.83	27.10
		De 51 a 150	6,700.11	223.34	27.92
		De 151 en adelante	7,003.68	233.46	29.18
6	Construcción	De 1 a 10	7,070.26	235.68	29.46
		De 11 a 50	6,388.80	212.96	26.62
		De 51 a 150	6,580.46	219.35	27.42
		De 151 en adelante	6,878.62	229.29	28.66
7	Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles	De 1 a 10	6,944.01	231.47	28.93
		De 11 a 50	6,388.80	212.96	26.62
		De 51 a 150	6,580.46	219.35	27.42
		De 151 en adelante	6,878.62	229.29	28.66
8	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	De 1 a 10	6,944.01	231.47	28.93
		De 11 a 50	6,446.88	214.90	26.86
		De 51 a 150	6,640.29	221.34	27.67
		De 151 en adelante	6,941.15	231.37	28.92
		De 1 a 10	7,007.14	233.57	29.20
		De 11 a 50			
		De 51 a 150			
		De 151 en adelante			

<sup>76</sup> XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2012, INE.

No.	Rama de actividad económica	Tamaño de las empresas por número de trabajadores	Salario mínimo 2012 mensual	Salario mínimo 2012 jornada ordinaria de 8 horas laborables	Salario mínimo 2012 por hora
9	Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas	De 1 a 10	6,563.04	218.77	27.35
		De 11 a 50	6,759.93	225.33	28.17
		De 51 a 150	7,066.21	235.54	29.44
		De 151 en adelante	7,133.39	237.78	29.72
10	Servicios comunales, sociales y personales	De 1 a 10	6,272.64	209.09	26.14
		De 11 a 50	6,460.82	215.36	26.92
		De 51 a 150	6,753.55	225.12	28.14
		De 151 en adelante	6,817.75	227.26	28.41
11	Actividades de investigación y seguridad, actividades de limpieza de edificios	De 1 a 10	6,563.04	218.77	27.35
		De 11 a 50	6,759.93	225.33	28.17
		De 51 a 150	7,023.65	234.12	29.27
		De 151 en adelante	7,023.65	234.12	29.27
12	Actividades de hospitales	De 1 a 10	6,272.64	209.09	26.14
		De 11 a 50	6,460.82	215.36	26.92
		De 51 a 150	6,712.87	223.76	27.97
		De 151 en adelante	6,712.87	223.76	27.97
13	Empresas acogidas a la Ley de Zonas Libres	De 1 en adelante	4,645.34	154.84	19.36
	Salario Mínimo Promedio		<b>6,153.56</b>	<b>205.12</b>	<b>25.64</b>

**Fuente:** Elaboración propia de la SJDH. Decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 32,723 del 17 de Enero del 2012. Regionalizado para las empresas o unidades productivas que aplican los salarios mínimos diferenciados o regionalizados a que se refiere el Acuerdo Ejecutivo N° 001-STSS-07 de fecha 31 de enero del año 2007.

tasa de dependencia, es decir, el número de personas que son mantenidas por cada individuo ocupado, en 2.6, no hace falta realizar complicados ejercicios matemáticos para determinar que el salario mínimo establecido es insuficiente para cubrir necesidades de familias muchas más numerosas que la media establecida por la tasa de dependencia. A esto hay que agregar que, aún con las limitaciones salariales sugeridas, sólo el 42% de la PEA está constituida por asalariados del sector formal. A esto habría que agregar que el trabajo doméstico, continúa siendo excluido de las regulaciones sobre el salario mínimo.

A pesar de todo, es un elemento esperanzador la suscripción en enero de 2012 de dos acuerdos entre los representantes del sector patronal, obrero y público. El primero, el “Acuerdo tripartito sobre la revisión del salario

mínimo para los años 2012 y 2013” y el segundo, el “Acuerdo de protección, estabilidad del empleo, fortalecimiento del sector laboral y empresarial de la maquila hondureña”. Ambos acuerdos fueron recogidos en el Acuerdo STSS 001-2012, emitido por el Presidente de la República, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

### 1.5. DISPARIDADES SALARIALES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y GÉNERO

Desde una perspectiva de nivel educativo y género, hay notables disparidades en el ingreso de la PEA ocupada en el sector formal del mercado laboral.

La mayor disparidad se presenta en el segmento de ingresos de las personas sin ningún nivel educativo. En este ámbito, hay

una diferencia de 1,149 lempiras entre hombres y mujeres. Esto es, una diferencia de 37.6 %. Las disparidades de ingresos entre los hombres y mujeres que tienen educación primaria y secundaria es ligeramente menor que en el caso de los que no tienen educación escolarizada. En el primer caso, la

diferencia es unos 1, 418 lempiras, esto es, del 31.9%. En el segundo caso, es de 1,433, esto es, del 20.8% La diferencia se ingresos entre los hombres y mujeres que tienen educación superior es de 3,985 Lempiras, esto es, del 25.5%.

Como puede verse, las mayores diferencias se encuentran entre hombres y mujeres que no tienen educación formal, seguidos por los que tienen educación primaria, superior y media. Se trata de un ejercicio de comparación de datos agregados que reflejan una situación de desventaja social para las mujeres. Habría que hacer estudios más detallados para poder determinar si estos datos, reflejan una situación de desventaja de las mujeres, las que realizando el mismo tipo de trabajo que los hombres, reciben un tipo de ingreso inferior. Sin embargo, puede decirse que en el sector de empleados de oficina y en el de los directivos, gerentes y administradores, los ingresos entre hombres y mujeres son bastante semejantes.

## 1.6. CONDICIONES SATISFACTORIAS DE TRABAJO

Las normas sobre salud y seguridad ocupacional, el principio de igual oportunidad para la promoción en el trabajo y las prácticas relacionadas con las jornadas de trabajo, descansos y feriados, son regulaciones históricamente establecidas pensando en un mercado formal e industrial de trabajo. En este ámbito, la mayor cantidad de quejas en estos aspectos proviene del sector maquilador, el que, por un lado reúne las características y relaciones clásicas de la producción fabril, y

por otro, incorpora una gran cantidad de fuerza de trabajo femenina.

La maquila ha generado una cantidad importante de empleos directos. En su época de mayor auge, generó unos 130,000 puestos de trabajo.<sup>77</sup> También ha favorecido la apertura de puestos en oficinas bancarias, restaurantes, gasolineras, servicios de transporte y un amplio sector informal de comercio, comidas y vivienda que, en conjunto con el pago a instituciones estatales y municipales, han dinamizado las economías de las poblaciones donde están establecidos los parques industriales.<sup>78</sup>

No hay estudios recientes en este sector. Sin embargo, de acuerdo a un estudio publicado por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 2009, persistían en este sector problemas como los siguientes: (i) inestabilidad en el empleo debido al cierre intempestivo de empresas, cambios de nombre o razón social, suspensión de contratos de trabajo o despidos masivos por reestructuraciones; (ii) jornadas de trabajo que rutinariamente exceden las 8 horas, ligadas a continuas altas metas de producción, generadoras de estrés y (iii) dificultades en el ejercicio de derechos laborales vinculados con la maternidad, incluyendo la exigencia de pruebas obligatorias de embarazo.<sup>79</sup>

El otro tema que destaca en esta sección durante el período reportado por este informe, es la reactivación del caso de los buzos miskitos (*Opario Lemoth Morris y otros*) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de una audiencia

---

<sup>77</sup> Jorge Roberto Interiano. *Historia de la maquila en Honduras*. (c. 2003).

<sup>78</sup> Sitio de la Asociación Hondureña de Maquiladores: <http://www.ahm-honduras.com>

<sup>79</sup> Centro de Derechos de Mujeres (CDM) / Coalición Hondureña de Acción Ciudadana (CHAAC). *Impacto del libre comercio en los derechos laborales de las obreras de la maquila textil en Honduras*. San Pedro Sula, 2009.



celebrada el 24 de octubre de 2011, en el marco del 143 período de sesiones de dicho órgano. Estos compatriotas han presentado una denuncia ante esa instancia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos por considerar que ante discapacidades permanentes producto de accidentes laborales, no recibieron indemnización alguna de las empresas para las que laboraban, ni atención médica adecuada, ni medidas de justicia y reparación por parte de los órganos competentes del Estado hondureño. Durante esta audiencia, las organizaciones que representan a los 43 peticionarios pidieron a la CIDH aprobar lo antes posible su informe final sobre el caso.<sup>80</sup>

La representación estatal indicó que, en la medida de sus posibilidades, el Estado ha venido realizando esfuerzos por mejorar las condiciones de vida y trabajo de los buzos miskitos a través de la apertura de una oficina de la Secretaría del Trabajo, administrada por un empleado proveniente del pueblo Miskito, la que ha difundido manuales de pesca segura, traducidos a la lengua de este pueblo. Igualmente, señaló los esfuerzos que en esta materia adelanta la nueva Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y la Secretaría de Salud, que ha logrado, a través de la cooperación estadounidense, instalar una cámara hiperbárica en el hospital de Puerto Lempira.

Agregó además que, mediante Decreto Ejecutivo se ha instruido a diversas Secretarías de Estado para que pongan en marcha un plan de desarrollo integral y sostenible para los pueblos indígenas y Afrohondureños. En el caso concreto de uno de los peticionarios, la representación del Estado reconoció los

problemas que han existido para la ejecución de una sentencia debido a la insolvencia declarada por uno de los patronos de los buzos. Luego de investigación del Ministerio Público, declaro que esta insolvencia no era punible debido al alzamiento premeditado de bienes para evitar la indemnización. Finalmente, la representación del Estado manifestó su anuencia para llegar a un acuerdo amistoso en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la CIDH.<sup>81</sup>

El 31 de enero de 2012, el Presidente de la República, Licenciado Porfirio Lobo Sosa, en Consejo de Ministros, aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-003-2012, de fecha 14 de marzo de 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,772, mediante el cual se crea la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo, como una respuesta integral y sistemática al clamor de los buzos con discapacidad de la Mosquitia, representados por la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI). Dicha Comisión está integrada por la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de la Marina Mercante. Según datos de la AMHBLI, en el departamento de Gracias a Dios existen alrededor de 4 mil hombres ex buzos, que han quedado en condición de discapacidad, luego de trabajar sin las mínimas condiciones de seguridad laboral en los barcos pesqueros de la zona.

---

<sup>80</sup> Comisión Interamericana conoció el drama y la desprotección en la que viven los buzos miskitos en Honduras. En: <http://cejil.org/comunicados/comision-interamericana-conocio-el-drama-y-la-desproteccion-en-la-que-viven-los-buzos-miskitos>

---

<sup>81</sup> El audio completo de la audiencia puede encontrarse en: <http://www.cidh.org/audiencias/143/10.mp3>



## 1.7. SITUACIÓN DE CONVENIOS

### INTERNACIONALES RELACIONADOS CON ESTE DERECHO

En relación al derecho al trabajo y a condiciones equitativas en el empleo, Honduras ha ratificado los siguientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): i) 122, sobre política de empleo; ii) 111, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación; iii) 100, sobre la igualdad de remuneración; iv) 14, sobre descanso semanal en la industria; v) 106, sobre descanso semanal en el comercio y las oficinas, y, vi) 81, sobre inspección del trabajo. Ha ratificado también el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Sin embargo, se encuentran pendientes de ratificación los siguientes convenios de OIT: i) sobre la fijación del salario mínimo, 1970 (No. 131); ii) sobre feriados pagados, 1970 (No. 132); iii) sobre inspección del trabajo agrícola, 1969 (No. 129) y iv) sobre la seguridad y salud ocupacionales, 1981 (No. 155)<sup>82</sup>.

En aras de cumplir con esta importante responsabilidad, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos realiza las coordinaciones correspondientes con las instituciones responsables de estas materias.

## 2. LIBERTAD SINDICAL

Desde el punto de vista individual, este derecho incluye la facultad de las y los trabajadores de participar en la fundación de sindicatos o de afiliarse al de su elección.

---

<sup>82</sup> En adelante, la información sobre ratificación de convenios internacionales del trabajo se toma de: International Labour Standards Department. *Honduras: Lista de ratificaciones de convenios internacionales del trabajo*. Consultada 22.04.12.

Colectivamente, implica el derecho de los sindicatos a formar federaciones o a integrarse en ellas, tanto las de carácter nacional como internacional. Incluye también el derecho que le asiste a cada sindicato a operar sin obstáculos y a declararse en huelga con arreglo a los procedimientos legales establecidos.

Las condiciones y procedimientos para organizar sindicatos, para afiliarse a ellos y para garantizar su operación, se encuentran reguladas por la Constitución de la República (artículo 128, numerales 13, 14 y 15) y el Código de Trabajo (Título VI, y otros capítulos que tratan sobre la contratación colectiva y los conflictos colectivos de trabajo). El Estado de Honduras ha ratificado los convenios de OIT sobre la libertad de asociación y el derecho a la organización (No. 87) y, sobre el derecho a la organización y negociación colectiva (No. 98). También ha ratificado los dos grandes pactos que en materia de derechos humanos ha aprobado la Organización de las Naciones Unidas en 1966: el de los Derechos Civiles y Políticos, que contempla el derecho de asociación en general y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hace referencia específica a la libertad sindical.

Durante la Administración del Presidente Porfirio Lobo Sosa, se ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, cuyo instrumento de ratificación fue entregado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en noviembre de 2011. El Protocolo de San Salvador, que había sido adoptado por la OEA en 1988, regula en su artículo 8, los derechos sindicales. Otro logro importante del gobierno actual, que va más allá de la libertad sindical, es la aprobación del Convenio 144 de OIT sobre la consulta tripartita para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Este

convenio fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto 122-2011 de 29 de julio y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,617 de 10 de septiembre de 2011. Se espera su pronta ratificación y depósito.

De los principales instrumentos en la materia, Honduras tiene pendiente la ratificación del Convenio de OIT sobre relaciones laborales en el sector público, adoptado desde 1978 (No. 151). En este caso, también la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, realiza la coordinación requerida para su eventual ratificación.

Aunque la gran mayoría de los sindicatos poseen personalidades jurídicas que datan de hace varias décadas, todavía se otorgan reconocimiento legal a nuevos sindicatos. Según datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, durante el año 2010 se otorgó personalidad jurídica a diez nuevos sindicatos, en el 2011 a 9 y en el 2012, hasta el 30 de mayo, se habían extendido 5 nuevas personalidades jurídicas.

Para declarar una huelga, hay que seguir un procedimiento establecido por la ley. Cuando no se sigue este procedimiento, la huelga es declarada ilegal. El 7 de marzo de 2011, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud de la Secretaría de Educación, declaró ilegal la suspensión de labores realizada por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH)<sup>83</sup>, que agrupa a seis colegios magisteriales. De estas organizaciones, el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (SINPRODOH), está reconocida legalmente como sindicato desde el 25 de abril de 1972, y otra, como el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), está afiliadas a centrales

obreras, como la Confederación de Trabajadores de Honduras (CGT)<sup>84</sup>.

De igual manera, el 1 de octubre de 2012, la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social resolvió declarando ilegal la suspensión de labores decretada por los sindicatos SINPRODOH y SINPROEH, las organizaciones magisteriales PRICPHMA, COLPEDAGOGO, COLPROSUMAH y COPEMH, en agosto de 2012.<sup>85</sup>

No se puede dejar de mencionar dos factores estructurales de la mayor importancia con relación a la libertad sindical en Honduras. Uno, que las y los trabajadores organizados sindicalmente representan un sector minoritario en relación a la población económicamente activa (PEA) y del colectivo de los asalariados. Si bien no existen datos actualizados, estimaciones realizadas revelan que los trabajadores sindicalizados representan alrededor del 7.64% de la PEA y el 17.8% de los asalariados. Dos, durante las últimas dos décadas, la mayor parte de conflictos colectivos de trabajo se han presentado en el sector público<sup>86</sup>. Esto no debería ser un obstáculo para reconocer el importante papel que han jugado y continúan jugando los sindicatos, las federaciones y las confederaciones en la vida social y política del país.

---

<sup>83</sup> Comunicado del Gobierno de la República, 26.03.2011.

---

<sup>84</sup> [cohdesse.rds.hn/files/cgt.html](http://cohdesse.rds.hn/files/cgt.html) Consultado 22.04.2012.

<sup>85</sup> Informe presentado por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social a la SJDH.

<sup>86</sup> López, Delia Armida / Rodríguez Corea, Henry / Mazier Alvarado, Emilio. El caso de Honduras. Las organizaciones sindicales centroamericanas como actores del sistema de relaciones laborales / Juan Manuel Sepúlveda Malbrán, ed. San José, C.R.: Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2003. pp. 357-355; Menos del 15% de los trabajadores están sindicalizados en Honduras. El Herald, 01.05.2012 (versión digital); Sindicalismo está en crisis: ex - secretario general de la CUTH. La Tribuna, 02.05.2012. p. 79.

### 3. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

El derecho a la seguridad social implica que toda persona, y su familia, debe estar cubierta por algún mecanismo de seguridad social en previsión de riesgos y situaciones como la enfermedad, la vejez, la muerte o el desempleo.

Por regla general, la seguridad social está ligada a la condición salarial del trabajador y a la cotizar en alguno de los sistemas de seguridad social existente. Esto excluye de la misma a los trabajadores que laboran en el sector informal de la economía o viven en el área rural.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 88% de la población, o sea casi 9 de cada 10 personas, no están cubiertos por ningún tipo de seguro para su salud. Del 12% de la población afiliada, el 9% está afiliada al Instituto Hondureño de Seguridad Social.<sup>87</sup>

#### 3.1. SERVICIOS BRINDADOS, RIESGOS CUBIERTOS Y BENEFICIOS OFRECIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La principal institución del sector es el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fundado en 1959. En la actualidad ofrece tres tipos de prestaciones, de acuerdo a los riesgos o eventualidades que pudieran ocurrir a las y los trabajadores: i) enfermedad – maternidad (EM), en operación desde 1962, ii) vejez, invalidez y muerte (IVM), a partir de 1969, y, iii) riesgos profesionales, el régimen más reciente, que entró en vigencia el 29 de junio de 2005<sup>88</sup>. Su cobertura obligatoria se extiende a las y los trabajadores asalariados del sector

público-privado, público central y público descentralizado, aunque su normativa permite la incorporación voluntaria, en régimen especial, de otras categorías laborales<sup>89</sup>.

Funcionan en el país otros sistemas de previsión social, que complementan y ofrecen servicios que van más allá de los del IHSS, sobre todo, en materia de IVM y riesgos profesionales. Entre ellos se encuentran: el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP), el Instituto de Previsión Militar (IPM), que cubre a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) que cubre a las y los docentes de los niveles preescolar, básico y secundario del sector público y privado y el Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), que cubre a los trabajadores de esta institución pública.

Durante el año 2011, el Estado hondureño, a través de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, emprendió una serie de iniciativas para el mejoramiento de la administración financiera y actuarial del INPREMA. Hay que destacar entre las medidas adoptadas, el establecimiento de una Comisión Interventora, mediante Decreto Ejecutivo PCM 015-2011, de 15 de marzo, y la preparación y discusión de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de esta institución. La Comisión Interventora presentó a la Secretaría de Finanzas la situación de iliquidez del Instituto e implementó un plan operativo de

<sup>87</sup> INE, “Morbilidad, utilización de servicios y gastos en salud en la ENDESA 2005-2006” Disponible en <http://www.ine.gob.hn/drupal/node/103>. Consultado el 1 de diciembre 2012.

<sup>88</sup> <http://www.ihss.hn/General/Paginas/AntecedentesIHSS.aspx> Consultada el 23.04.2012.

<sup>89</sup> Ley del Seguro Social, Decreto No. 140 de 19 de mayo de 1959, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 16,819 el 3 de julio de 1959. Las reformas más importantes que ha sufrido son las contenidas en los decretos 46-89 de 18 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 25,832 el 16 de mayo de 1989, y, 66-93 de 15 de abril de 1993, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 27,050 el 22 de mayo de 1993.

emergencia<sup>90</sup>. La nueva Ley del INPREMA fue aprobada mediante Decreto No. 247-2011 del 14 de diciembre de 2011. La intervención del IMPREMA ha sido rechazada por el gremio magisterial que se quejó de no haber tenido la participación debida en el proceso.<sup>91</sup> La dirigencia magisterial presentó, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad contra lo actuado en el IMPREMA.

### 3.2. SECTORES NO CUBIERTOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL Y POLÍTICAS Y PLANES PARA INCORPORARLOS

Los afiliados al IHSS están distribuidos en veinte poblaciones del país. La mayoría de los mismos se encuentran en el Distrito Central (municipio de la capital de la República), San Pedro Sula, Choloma y Villanueva. Estas tres últimas ciudades corresponden al departamento de Cortés. Para diciembre de 2011, el IHSS tenía registrados a 634,262 cotizantes y 1,383,365 beneficiarios de sus servicios de EM (se suman al/la asegurado directo, sus hijos e hijas hasta once años de edad y a cónyuges o compañeras de hogar por maternidad).

Si bien estas cantidades son significativas, el IHSS enfrenta un problema crónico de cobertura que tiene su causa principal en la estructura del mercado de trabajo en Honduras<sup>92</sup> (ver gráfico 24). Solamente el 45% de la PEA se ubica en el sector formal de la

economía, que es la que está en posibilidades de cotizar al sistema de seguridad social. El IVM, por ejemplo, sólo cubriría el 15.12% de la PEA y el 34.55% de la población asalariada total. Una proyección actuarial realizada por un experto internacional ya hace cerca de quince años, asumía, en un escenario de baja cobertura, que es por cierto al que más se acercan las cifras reales de la actualidad, que para el año 2050, aunque el IHSS llegase a tener 1,8 millones de cotizantes, sólo estaría cubriendo un 20% de la PEA.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Segundo Informe a la Nación del Presidente Constitucional de la República, Licenciado Don Porfirio Lobo Sosa, presentado al Congreso Nacional. 2011.

<sup>91</sup> Como ejemplo de una posición que se ha mantenido constante desde marzo de 2011, v. <http://radioamerica.hn.net/profesores-rechazan-intervencion-en-el-inprema/> Consultada 24.04.12.

<sup>92</sup> Este es un problema que Honduras comparte particularmente con Guatemala y Nicaragua. V. por ej. *Envejecimiento en América Latina: sistemas de pensiones y protección social integral* / Antonio Prado y Ana Sojo, eds. Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina (CEPAL): 2010. pp. 41 ss.

---

<sup>93</sup> Durán-Valverde, Favio. Evaluación actuarial del régimen IVM del IHSS y estimación de costos de la reforma. San José, C.R.: Fundación Friedrich Ebert (Honduras), 2000. En: Martínez, Yesenia. Pobreza, seguridad social y desarrollo humano en Honduras. Tegucigalpa: PNUD, 2003.

**Proyección de activos cotizantes del IHSS (1998 – 2050).**

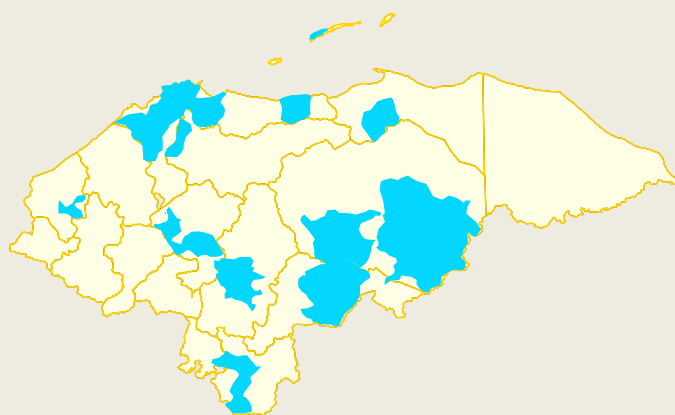
Años	PEA Total	Asegurados		Total	Cobertura %
		Hombres	Mujeres		
1998	2,245,633	228,339	147,65	375,989	16.7
1999	2,338,855	231,437	150,578	382,016	16.3
2000	4,409,386	236,685	154,557	391,241	16.2
2005	2,894,683	278,907	184,306	463,213	16
2010	3,436,073	334,097	221,816	555,913	16.2
2015	4,019,000	396,467	262,665	659,131	16.4
2020	4,621,185	465,863	306,435	772,298	16.7
2030	5,898,130	630,625	408,563	1,039,189	17.6
2040	7,407,168	840,005	539,42	1,379,425	18.6
2050	9,162,020	1,125,912	726,955	1,852.867	20.2

**Fuente:** Evaluación actuarial del régimen MM del IHSS y estimaciones de costos de la reforma, por Favio Durán Valverde, San José, Costa Rica, Marzo del 2000, p. 16.

Como puede verse en el mapa, hay amplias áreas del país a las que no alcanza la cobertura del IHSS.

**Gráfico 24**

Municipios cubiertos por el IHSS.



Distrito Central	Cortés, Villanueva	Danlí	Choluteca	Monjaras
San Pedro Sula	El Progreso	El Paraíso	Tela	Naco
La Ceiba	Choloma	Juticalpa	Puerto Cortés	Roatán
Comayagua	Siguatepeque	San Lorenzo	Santa Rosa de Copán	Catacamas y Tocoa

**Fuente:** IHSS

El Estado hondureño ha estado preocupado por ampliar la cobertura de las instituciones públicas de seguridad social. Desde un punto de vista normativo, esta aspiración está

recogida en la Constitución de la República (artículos 142, 143 y 144). Más recientemente, esta aspiración ha sido reiterada en la Política de Protección Social (PSS), aprobada mediante

Decreto Ejecutivo PCM 008-2012 del 18 de marzo de 2012.

Los artículos constitucionales establecen claramente el derecho de toda persona a la seguridad social, la creación de instituciones de asistencia y previsión social, el funcionamiento de un sistema unitario estatal y declara de utilidad pública la ampliación del régimen de seguridad social a los trabajadores de la ciudad y del campo. Por su parte, la PPS "...promueve el fortalecimiento institucional del sistema de seguro social para afrontar la extensión de la cobertura y garantizar la unidad, eficiencia y calidad de los servicios; además, fomenta la extensión progresiva de la cobertura de la seguridad social en pensiones y salud a los grupos sin acceso a este servicio, con o sin capacidad de pago".

El hecho que el Estado de Honduras manifieste su voluntad de reconocer y hacer efectivo el derecho a la seguridad social, ciertamente es un paso fundamental. Sin embargo, es un desafío de grandes proporciones que requiere un esfuerzo sostenido para transformar la naturaleza del mercado de trabajo y ejecutar una política social integral, gradual y efectiva (ver gráfico 24).

### 3.3. SITUACIÓN DE CONVENIOS

#### INTERNACIONALES RELACIONADOS CON ESTE DERECHO

En materia de convenios de la OIT relacionados con el derecho a la seguridad social, Honduras presenta un saldo pendiente, ya que no ha ratificado ninguno de los siguientes instrumentos: i) Convenio sobre los Estándares Mínimos de Seguridad Social, 1952 (No. 102); ii) Convenio sobre las Prestaciones en Caso de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1964 (No. 121); iii) Convenio sobre las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes, 1967 (No. 128); iv) Convenio sobre Asistencia Médica y

Prestaciones Monetarias de Enfermedad, 1969 (No. 130); v) Convenio sobre el Fomento del

Empleo y la Protección contra el Desempleo, 1988 (No. 168); vi) Convenio sobre Política Social (Normas y Objetivos Básicos), 1962 (No. 117) y; vii) Convenio sobre la Igualdad de Trato (Seguridad Social), 1962 (No. 118).

Para avanzar en materia de seguridad social, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social deberán definir una estrategia conjunta para impulsar la aprobación de los convenios de la OIT pendientes de aprobación.

## 4. PROTECCIÓN A LA FAMILIA, LA MATERNIDAD Y LA NIÑEZ

De acuerdo al artículo 111 de la Constitución de la República, el Estado tiene el deber de proteger la familia, la niñez y la maternidad.

### 4.1. MEDIOS FORMALES E INFORMALES DE ASISTENCIA A LA FAMILIA

La principal institución del sector responsable de atender esta importante temática es el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), establecido en el marco de las reformas al sector niñez, suscitadas a partir de la ratificación por Honduras de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990. Fue creado por el Decreto Legislativo 199-97 del año de 1997. Sus responsabilidades incluyen no sólo la rectoría de políticas, sino también la ejecución directa de programas y proyectos de prevención, atención y rehabilitación social.

Al entrar en funcionamiento en 1998, el IHNFA heredó no sólo los activos y centros de atención, sino también el personal y la cultura laboral de la antigua Junta Nacional de Bienestar Social. Consumido por los problemas internos con que nació, que le han impedido realizar los altos fines que lo justifican, en



menos de quince años de operaciones, ha tenido que ser intervenido ya en tres ocasiones. La primera y la segunda, ocurrieron durante la Administración del Presidente Ricardo Maduro, y la tercera, fue producto del Decreto Ejecutivo PCM 063-2011 aprobado por el Presidente Porfirio Lobo Sosa en el año 2011.

En el informe al Presidente de la República, rendido el 15 de diciembre de 2011, la Comisión Interventora, integrada por las y los Subsecretarios de Estado en los Despachos del Interior y Población, Educación Pública, Salud, Justicia y Derechos Humanos, el Director General de Instituciones Descentralizadas del Sector Finanzas y el Secretario Ejecutivo del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, dio cuenta de sus hallazgos.<sup>94</sup> En primer término, confirmó lo ya señalado, hace cerca de cinco años atrás, por el Comité Internacional de los Derechos del Niño, cuando examinó el tercer informe periódico del Estado con relación al cumplimiento de la Convención: la mayor parte del presupuesto del Instituto se consume en gasto corriente y gran parte del personal no posee formación técnica en materia de niñez y familia.<sup>95</sup>

En este sentido, el informe de la Comisión Interventora reveló que, a diciembre de 2011, el Instituto sólo tenía presencia en 36 municipios de 298 de la geografía nacional, atendía directamente a 3,172 niños y niñas, con una planilla de 1,300 empleados y empleadas. A esto debe agregarse el descubrimiento de personal supernumerario contratado fuera de los parámetros presupuestarios y la concesión de aumentos selectivos injustificados. La Comisión informó al Presidente de la

República que el 93% del presupuesto del Instituto se invierte en salarios y beneficios colaterales para el personal permanente y temporal.

En otros aspectos del quehacer del IHNFA, la Comisión Interventora reportó haber encontrado descuidos en el manejo de la representación legal de casos relacionados con bienes inmuebles de la institución, lo cual podría poner en riesgo la propiedad del Instituto sobre los mismos. También se detectó el incumplimiento de requisitos legales en los procesos de adopción de niños y niñas y la precariedad de condiciones materiales y administrativas en los centros de internamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. El IHNFA, confirmó la Comisión Interventora, no ha sido capaz de cumplir con su mandato de órgano rector de la política pública en materia de familia y niñez, ni con la responsabilidad de supervisión de las organizaciones no-gubernamentales que ejecutan programas de asistencia a la niñez, particularmente aquellos que implican residencia. En estos últimos, existen los mayores riesgos de abuso.

Para superar esta precaria situación institucional y como resultado del esfuerzo conjunto con representantes de sectores estatales, gubernamentales y de sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, se presentó ante el Congreso Nacional de la República un Anteproyecto de Ley para la creación de la Defensoría Nacional de la Niñez, como ente rector de las políticas públicas que tendrá la responsabilidad de atender a los 3.7 millones de niños y niñas.

Otra institución estatal a través del cual el Estado canaliza apoyo a la familia es el Programa de Asignación Familiar (PRAF). A través del PRAF, el Estado administra un conjunto de transferencias condicionadas orientadas a mejorar la situación de las familias

---

<sup>94</sup> Comisión Interventora IHNFA. Informe Final. 15 de diciembre 2011.

<sup>95</sup> Comité de los Derechos del Niño. 44°. Período de Sesiones. Examen de los informes presentados por los estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales: Honduras (CRC/C/HND/CO/3, 2 de mayo de 2007). Párrafos 14, 15 y 16.

más pobres del país que asumen la forma de bonos. Entre estos bonos hay que mencionar, el bono escolar, el bono de la tercera edad, el bono solidario en educación, el bono juvenil y, desde el inicio del gobierno del Presidente Lobo Sosa, el bono 10 Mil. El bono 10 Mil es un programa de la Presidencia de la República orientado a mejorar las condiciones de educación, salud y nutrición a través de transferencias monetarias a los hogares de los niños, niñas y adolescentes pobres del país. El Bono 10 Mil y otros bonos, cuentan con un alto grado de aceptación, sobre todo, entre la población más pobre.<sup>96</sup> Otros apoyos estatales a las familias en condiciones de pobreza y extrema, son canalizados a través de la recién creada Secretaría de Desarrollo Social que fue creada por el Decreto 31-2010 del año 2010. Entre sus principales programas, aún incipientes, pueden mencionarse el Vaso de Leche, el Programa Desarrollemos Honduras y otros.<sup>97</sup>

### 4.1.1. DESAFÍOS DE LA MATERNIDAD

#### TEMPRANA

Honduras ha venido enfrentando el desafío que representa la maternidad en adolescentes. Como ha sido planteado, existe una fuerte conexión entre la maternidad en adolescentes y la prolongación de la pobreza y la marginación social.<sup>98</sup> Esto es así porque “las mujeres adolescentes de los grupos más desfavorecidos tienen una probabilidad mucho mayor que las jóvenes de los niveles socioeconómicos más altos de convertirse en madres antes de llegar a la adultez”.<sup>99</sup>

<sup>96</sup> Véase PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras, 2011, Litografía e Imprenta Lil, San José, Costa Rica, 2012, p. 120

<sup>97</sup> Véase información pertinente en <http://desarrollosocial.gob.hn>

<sup>98</sup> Guttmacher Institute, “Maternidad temprana en Honduras: un desafío constante” *En Resumen*, Serie 2006, n. 4

<sup>99</sup> Ibidem, p. 2

En los últimos años, el tema de la maternidad en adolescentes ha estado en el centro del debate. Un periódico local constataba en 2008 que el 30% de los embarazos que se atienden en los centros asistenciales regionales son de jovencitas de edades comprendidas entre 13 y 19 años.<sup>100</sup> Más recientemente, un periódico local señalaba que en una ciudad como San Pedro Sula, que más de la mitad de los sesenta partos que se atienden en los hospitales públicos corresponden a adolescentes entre 14 y 20 años.<sup>101</sup>

“En América Latina”, señala el Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2012, “los partos de madres adolescentes han disminuido rápidamente, pero la cantidad sigue siendo grande: en promedio, 80 por cada 1.000 mujeres jóvenes, cada año. En unos pocos países, entre ellos el Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, las tasas de alumbramiento en la adolescencia son superiores a 100 por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, es decir, se aproximan a las registradas en la mayoría de los países de África al sur de Sahara”.<sup>102</sup> Honduras tiene una tasa de 108 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, la que solamente es superada por la de Nicaragua, que tiene una tasa de 109 nacimientos por cada mil mujeres ubicadas en el mismo tramo de edad. Esto significa que Honduras ocupa el segundo lugar de América Latina en Adolescentes embarazadas.<sup>103</sup>

El tema del embarazo en adolescentes y sus consecuencias, sobre todo en las familias en desventaja social, ha vuelto a poner en la agenda pública la educación sexual en el sistema educativo. Ya se han redactado guías sobre educación sexual para este propósito,

<sup>100</sup> La Prensa, San Pedro Sula, 17 de septiembre de 2008

<sup>101</sup> La Tribuna, 26 de septiembre de 2012

<sup>102</sup> UNFPA, Estado de la población mundial 2012, Nueva York, 2012, p. 35

<sup>103</sup> Véase [www.acaive.com/honduras-es-el-segundo-pais-con-más-embarazos-adolescentes-e...](http://www.acaive.com/honduras-es-el-segundo-pais-con-más-embarazos-adolescentes-e...)

pero han encontrado oposición en distintos tipos de sectores del país. Como ha señalado la CEPAL en relación a esta cuestión, “a pesar de la importancia del tema, la realidad es que los países en general no tienen políticas concretas respecto a la educación sexual de los y las adolescentes por diferentes motivos, entre ellos, por limitaciones sociales o culturales. En algunos países la educación sexual es obligatoria, en otros prohibida, en otros se la promueve pero no se cuenta con servicios específicos”.<sup>104</sup>

#### **4.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONTRA LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA NIÑEZ, INCLUYENDO REGULACIONES Y PROGRAMAS SOBRE EL EMPLEO INFANTIL**

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, el trabajo infantil es “la participación económica de personas que aún no han cumplido los 18 años y están inmersas en ocupaciones laborales en condiciones de explotación económica, en ocupaciones que pueden ser peligrosas o entorpecer su educación o que sean perjudiciales para la salud física o mental o para el desarrollo espiritual, mental o social del niño o niña”. (Art. 32)

Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, la población infantil, o sea la comprendida entre 5 y 17 años de edad, es de 2,603,729, o sea, el 31.4% de la población nacional. De estos 1,357,132, o sea el 52.1%, son niños y 1,246,597, o sea el 47.9%, son niñas. El 73.7% de la población infantil se dedica solo a estudiar, el 13.5% trabaja y estudia y el 12.8%, ni trabaja ni estudia. Del total de la población que trabaja, 79.7% son niños y el 20.3%

restante, son niñas. El 61% de los que no estudian ni trabajan son niñas y el 39% restante, son niños. El 76% de los que trabajan se concentran en el área rural. El 24% restante, se ubica en el área urbana. El ingreso promedio que perciben los niños y niñas que trabajan es de 1,824 Lempiras mensuales. 1,344 Lempiras en el área rural y 2,626 en el área urbana.<sup>105</sup>

Entre los niños y niñas que trabajan, algunos realizan trabajos peligrosos. Entre las peores formas de trabajo infantil que realizan los niños y niñas de Honduras se encuentran las siguientes: i) trabajo infantil peligroso en la agricultura; ii) trabajo infantil en cohetorías; iii) trabajo infantil en buceo, iv) trabajo infantil en vertederos de basura; v) trabajo infantil doméstico en hogares de terceros, y, vi) explotación sexual comercial de personas menores de edad.<sup>106</sup>

Como medida de protección a los derechos de la niñez y de erradicación al trabajo infantil, el 15 de febrero de 2011, mediante Decreto Ejecutivo PCM 011-2011<sup>107</sup>, el Presidente de la República en Consejo de Ministros adoptó la *Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas* como la política nacional en la materia. Desde la perspectiva de las políticas generales del Estado, esta Hoja de Ruta busca su consolidación en la Ley para el Establecimiento de la Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras<sup>108</sup>, aspirando a la vez a su entrelazamiento con otras políticas sectoriales, especialmente aquellas sobre pobreza, educación y salud.

<sup>104</sup> Citado por Laura Rodríguez Wong y Ignez H. O. Perpétuo, *La transición de la salud sexual y reproductiva en América Latina. 15 años después de El Cairo-1994*, CEPAL/UNFPA, Santiago de Chile, 2011, p. 22

<sup>105</sup> XLIII Encuesta Permanente de Hogares (Resumen Ejecutivo), mayo, 2012

<sup>106</sup> OIT, *Trabajo infantil en Honduras: Síntesis de estudios de línea de base*, San José, Costa Rica, 2004, Tabla 1.7

<sup>107</sup> Publicada el 22 de marzo de 2011 en el Diario Oficial La Gaceta número 32,473.

<sup>108</sup> Aprobado mediante Decreto Legislativo 286-2009, el 13 de enero de 2010.

La Hoja de Ruta es un verdadero plan de acción para erradicar gradualmente esta problemática en el país, pues señala los objetivos, resultados, indicadores, metas y estrategias fundamentales para lograrlo. La Hoja de Ruta ha sido construida con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien la enmarca en una iniciativa regional latinoamericana más amplia. Fue el resultado de una consulta con una amplia gama de actores procedentes de instituciones del Estado, organizaciones no-gubernamentales, centrales de trabajadores y asociaciones empresariales hondureñas. El seguimiento, monitoreo y evaluación de su cumplimiento recae principalmente sobre la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el apoyo de la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil (Decreto PCM 17-98) y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas.

La Hoja de Ruta aspira a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el 2015 y el trabajo infantil, en general, para el 2020. Para lograr sus objetivos desde un abordaje integral, la Hoja de Ruta insta a trabajar en seis dimensiones básicas de la problemática: lucha contra la pobreza, educación, salud, marco normativo e institucional, sensibilización y movilización social, generación de conocimientos y seguimiento.

Para concluir este apartado hay que anotar que el Informe Anual de la Gestión Presidencial 2011 informa que a través del Programa Mano Amiga se capacitó en áreas técnicas a 10,900 jóvenes en riesgo social y a 705 “pepenadores” (muchos de ellos niños y niñas) que trabajan en basureros municipales.<sup>109</sup>

<sup>109</sup> Segundo Informe a la Nación del Presidente Constitucional de la República, Licenciado Don Porfirio Lobo Sosa, presentado al Congreso Nacional. 2011.

### 4.3. ATENCIÓN A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 139 del Código de la Niñez y la Adolescencia, las y los niños se encuentran en situación de riesgo social cuando:

- a) Se encuentren en estado de abandono o de peligro;
- b) Carecen de la atención requerida para la satisfacción de sus necesidades básicas;
- c) Su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administran;
- d) Carecen de representante legal;
- e) Son objeto de maltratos o corrupción;
- f) Se encuentran en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad y,
- g) Son adictos a sustancias que producen dependencia o se encuentren expuestos a caer en la adicción.

No hay datos actualizados sobre la problemática de niñez en situación de calle. El último censo que se realizó en Tegucigalpa, data de hace cerca de diez años y reportaba 302 niños y niñas en esta situación<sup>110</sup> (ver gráfico 25).

Como puede verse, el 80% eran niños y el 20% niñas. El 80% de ellos, se encontraban en el rango de 14 a 17 años. El 99.3 % de los consultados tenía familia y un 63% tenía contacto con ella. En un 36%, la familia rechazaba al niño/a y un 23% de los mismos, rechazaba a la familia. El 43% de las niñas y niños

<sup>110</sup> En la relación metodológica del informe se menciona que fueron excluidos del conteo los niños que se consideró deberían categorizarse como “niñez trabajadora” y aquellos otros que se estimó estaban “en proceso de callejización”. Eso quizá podría explicar el número relativamente bajo que se reporta. (IHNFA - UNICEF). *Censo de niñez en situación de calle*. Junio - julio 2003. Tegucigalpa.

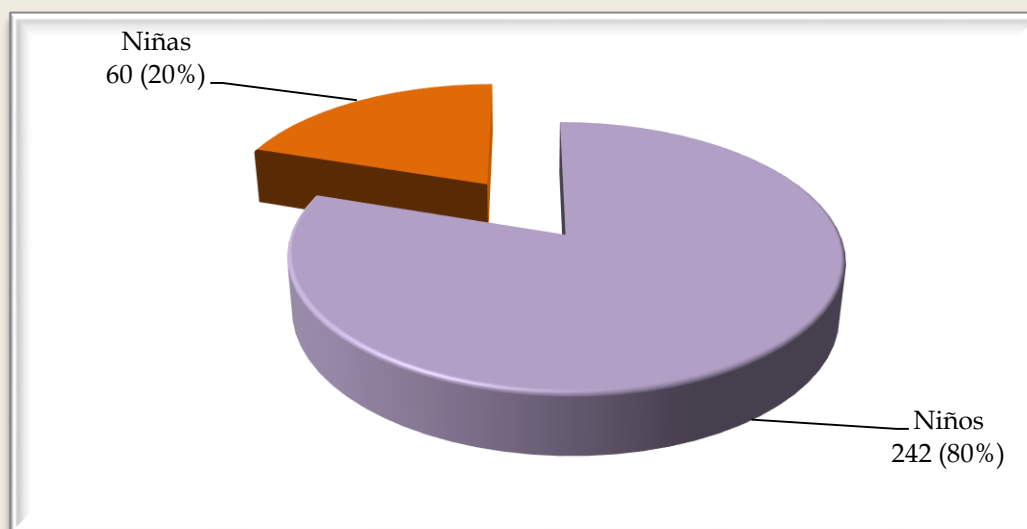
consultados dijeron que la principal razón para haber abandonado la casa y estar en la calle, fue el maltrato familiar. El 32% tenía contacto semanal con la familia. El 59% declaró que su actividad principal era pedir dinero. Un 25% declaró que se dedicaba a robar y un 10%, se dedicaba a la prostitución. El 88% había sido agredido durante su estadía en la calle. La policía había agredido al 66% de ellos/as. El 34% había sido agredido por extraños. El 88% consumía algún tipo de droga. El 67% de los mismos/as consumía pegamento, el 60% consumía también tabaco y el 43%, consumía marihuana.

111

El 76% de los niños y niñas consultadas, había estado en alguna institución, la cual habían abandonado para volver de nuevo a la calle.<sup>112</sup> Una de estas instituciones que ha intentado atraer a los niños y niñas de la calle, ha sido

Casa Alianza. No se ha vuelto a hacer un censo de los niños y niñas que viven en la calle para estimar las dimensiones de la problemática que aflige a este sector de la niñez hondureña. Sin embargo, una mirada atenta a algunas calles aledañas al mercado de la ciudad de Comayagüela, para mencionar un caso, revelan que esta problemática persiste, sin opción clara de solución. Han faltado esfuerzos sostenidos y sistemáticos para enfrentar la situación de los niños y niñas de la calle. Las instituciones estatales, encargadas de atender a la infancia, se han visto rebasadas por esta compleja problemática, que es uno de los subproductos de las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que vive un porcentaje significativo de los hogares hondureños.

**Gráfico 25**  
Porcentaje de niños y niñas en situación de calle.



**Fuente:** IHNFA - UNICEF, Censo de Niñez en Situación de Calle, Tegucigalpa, Junio-Julio 2003.

<sup>111</sup> Datos tomados de Comité de Derechos del Niño, *Aplicación de la convención sobre los derechos del niño. Respuesta a la lista de preguntas que deben abordarse al examinar el tercer informe periódico de Honduras (CRC/C/HND/3)*, 44 período de sesiones, 15 de enero al 2 de febrero de 2007, p. 19

<sup>112</sup> Idem



## 4.4. SITUACIÓN DE CONVENIOS

### INTERNACIONALES RELACIONADOS CON ESTE DERECHO

Con respecto a la protección de la familia, la maternidad y la niñez, el Estado de Honduras ha ratificado los dos grandes pactos de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 1966. También se han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, el Convenio OIT sobre la Edad Mínima de Trabajo, de 1973 (No. 138) y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, de 1999 (No. 182). No se ha ratificado todavía el Convenio Revisado de OIT sobre la Protección de la Maternidad, de 1952 (No. 103). Sin embargo, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos realiza acciones orientadas a la ratificación del mismo.

#### 4.4.1. ESTADO DE SITUACIÓN DEL TRABAJO JUVENIL

El artículo 2 de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud establece que son jóvenes las personas que tienen una edad comprendida entre 12 y 30 años.<sup>113</sup>

Según datos de la Encuesta de Hogares de Mayo de 2012 se encuentran en este rango de edad 3,283,691 jóvenes de los cuales 1,648,386 (50.2%) son hombres y 1,635,691 (49.8%) son mujeres. Los jóvenes hondureños representan el 39,5% del total de la población del país. El 30.6% de los jóvenes hondureños, solo estudia, el 43.3% estudia y trabaja y el 26.2% ni estudia ni trabaja (ver gráfico 26). No hay diferencias

significativas en materia de sexo, entre los que solo estudian. Entre los que trabajan y estudian, el 70% son hombres y el 29.4% son mujeres, y entre los que no estudian ni trabajan, el 78.3% son mujeres y el 21.7% son hombres. La categoría de no trabaja ni estudia en el caso de las mujeres oculta el hecho del trabajo doméstico no remunerado en el hogar. El 40.7% de la población que trabaja se ubica en la agricultura, silvicultura, caza y pesca, el 20.5% en comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes, el 13.2% en la industria manufacturera y el 18.3% en la construcción y servicios comunales, sociales y personales.<sup>114</sup>

El mayor problema laboral de las y los jóvenes hondureños no es el desempleo abierto, ni el subempleo visible, sino que el subempleo invisible. Según datos del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011, entre 2003 y 2008, la Tasa de Desempleo Abierto mantuvo un promedio de 4.2%. Por su parte, la tasa de desempleo visible durante el mismo periodo, fue de 5.9%. En cambio, la Tasa de Desempleo Invisible en este lapso de tiempo, mantuvo un promedio del 30.4%.<sup>115</sup> El subempleo invisible afecta más a los hombres que a las mujeres y más a los jóvenes del área rural que los jóvenes del área urbana.<sup>116</sup> Las tasas de subempleo invisible en los jóvenes se encuentran por encima de las tasas de subempleo invisible en adultos.<sup>117</sup> Las personas que se ven involucrados en situaciones de subempleo invisible, tienen ingresos inferiores al salario mínimo promedio mensual.

<sup>113</sup> "Decreto No. 260-2005, Ley Marco para el desarrollo Integral de la Juventud", en LA GACETA No. 30,903 del 16 de enero de 2006, p. 2

<sup>114</sup> INE, *XLIII Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM)*, mayo, 2012

<sup>115</sup> PNUD, *Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011*, Litografía e Imprenta Lil, San José, Costa Rica, 2012, p. 152

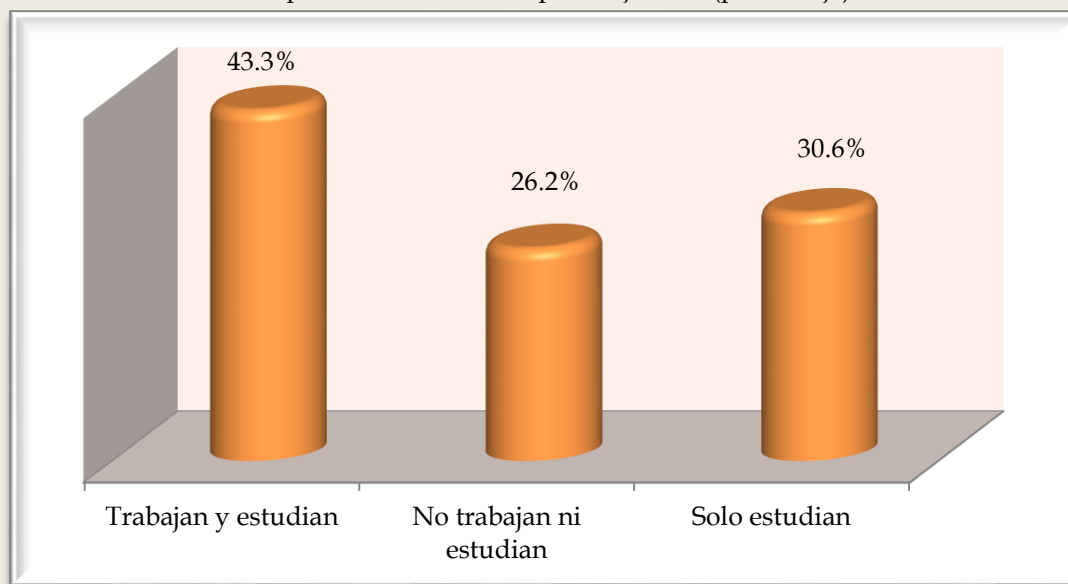
<sup>116</sup> *Ibidem*, p. 146

<sup>117</sup> *Idem*



**Gráfico 26**

Ocupación versus desocupación juvenil (porcentaje).



**Fuente:** XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Mayo 2012, INE.

## 5. EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, A ALIMENTACIÓN, A VIVIENDA Y A REFORMA AGRARIA

El titular del derecho a un nivel de vida adecuado es la persona y su familia. Este derecho se refiere básicamente a las condiciones de vida, la alimentación y la vivienda adecuados.

### 5.1. EL ESTÁNDAR DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES

Honduras tiene un porcentaje significativo de sus hogares viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

El comportamiento de la pobreza en los hogares del país ha sido fluctuante. Subió entre 2001 y 2003. Bajó entre 2004 y 2009. Volvió a subir a partir de 2010. Actualmente, se encuentra en el punto más alto del periodo considerado. Afecta al 66.5% de los hogares. La

extrema pobreza ha tenido un comportamiento semejante. Actualmente afecta al 46% de los hogares del país. El 69.3% de los hogares en pobreza habitan el área rural y el 63.6% lo hacen en el área urbana.<sup>118</sup>

A la pobreza habrá que agregar la desigualdad, calculada a través del contraste de los ingresos percibidos por los sectores más acomodados y los más pobres de la sociedad. A 2010, por ejemplo, el INE nos indicaba que el ingreso per cápita mensual (el ingreso total del hogar en un mes, dividido entre sus miembros) en el 20% de los hogares con mayores ingresos era de 7,761.00 Lempiras. En cambio, en el 20% de los hogares con menor ingreso, era de 380.00 Lempiras mensuales<sup>119</sup>. Medida a través del Coeficiente Gini, Honduras es uno de los tres

<sup>118</sup> INE, XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples mayo 2012, Resumen Ejecutivo.

<sup>119</sup> <http://www.ine.gob.hn/drupal/node/216> Consultado el 29.04.2012.

países con mayor desigualdad de ingresos en el continente americano.<sup>120</sup>

En condiciones de alta desigualdad en los ingresos, la pobreza se reduce lentamente. Esto es así, porque los frutos del crecimiento económico se concentran en los sectores de mayores ingresos.

### Comportamiento del Indicador de Pobreza a Nivel Nacional con otros Ingresos del Hogar (Porcentaje).

Año	Pobreza		
	Pobres	Relativa	Extrema
2001	63.7	19.5	44.2
2002	64.8	19.2	45.6
2003	65.3	18.6	46.7
2004	64.6	18.4	46.2
2005	63.7	17.6	46.0
2006	59.9	19.6	40.4
2007	58.2	20.8	37.5
2008	59.2	22.9	36.2
2009	58.8	22.3	36.4
2010	60.0	20.9	39.1
2011	61.9	20.3	41.6
2012	66.5	20.5	46.0

Fuente: INE. EPHPM mayo 2012.

## 5.2. EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA

La pobreza, pero, sobre todo la extrema pobreza, va acompañada de un bajo nivel de consumo alimenticio en las familias y de situaciones de desnutrición generalizada en los niños y niñas.

Según datos de un estudio reciente,<sup>121</sup> un 12% de la población hondureña presenta problemas de subnutrición, entendida ésta como la “inseguridad alimentaria crónica, en que la

ingestión de alimentos no cubre las necesidades energéticas básicas de forma continua”<sup>122</sup>. En términos comparativos, Honduras se ubica por encima de la media latinoamericana, que es de 9%, pero por debajo del promedio centroamericano, que es de 14.2% (ver gráfico 27).

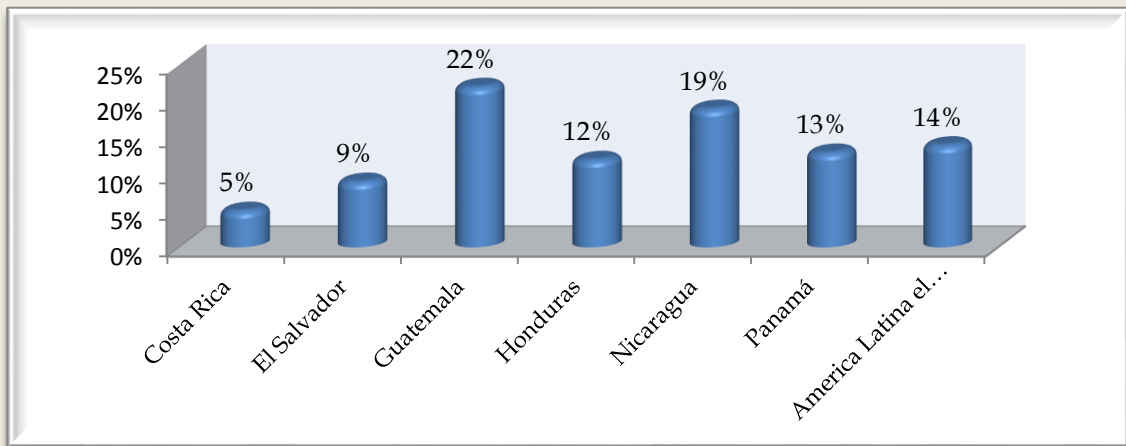
En materia de desnutrición infantil, Honduras, con un 29%, dobla la media para América Latina y el Caribe y se sitúa en la región centroamericana, sólo por debajo de Guatemala (ver gráfico 28).

<sup>120</sup> Perry, Guillermo; Steiner, Roberto. *Crecimiento económico y desigualdad*. Focal. Nota de política. Julio de 2011. p. 3, figura 1.

<sup>121</sup> Centroamérica en cifras: datos de seguridad alimentaria nutricional y agricultura familiar, diciembre de 2011 / Programa Regional de Seguridad Alimentaria para Centroamérica (PRESANCA II) / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) / Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (IALCSH) / Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA) de Centroamérica.

<sup>122</sup> Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA). *Conceptos Básicos*. En: [http://www.pesacentroamerica.org/pesa\\_ca/conceptos.php](http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/conceptos.php)

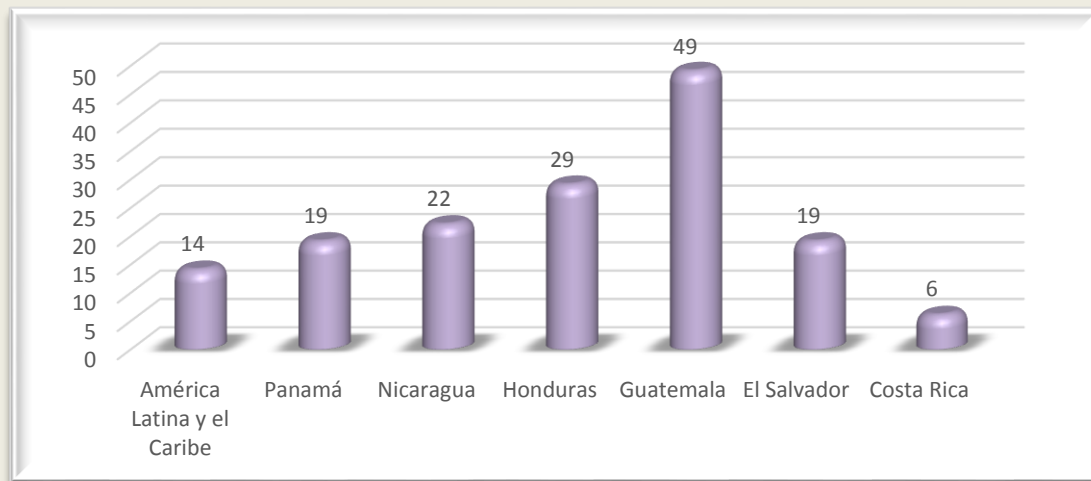
**Gráfico 27**  
Porcentaje de personas subnutridas. Años 2006-2008.



**Fuente:** FAO 2011 *El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo*.

**Gráfico 28**

Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica moderada y grave.



**Fuente:** UNICEF 2005-2009.

Honduras ha hecho esfuerzos para combatir la desnutrición infantil y la subnutrición en los hogares en extrema pobreza a través de programas como la Merienda Escolar, el vaso de leche y otros. A través de los dos primeros programas, se beneficiaron en el año 2011 unos 1,500,000 niños y niñas de 20,000 escuelas

públicas del país. La Merienda Escolar fue financiada en un 80% por el Gobierno de la República mediante un fondo fiduciario suscrito con el Programa Mundial de Alimentos, y el 20% restante, con apoyo de los Gobiernos de Canadá y Taiwán y la empresa privada.

El Estado también contribuye sustancialmente a la creación de condiciones para ejercer el derecho a la alimentación a través del Instituto Nacional Agrario (INA). Esta institución del Estado brinda asistencia técnica a empresas campesinas que benefician a miles de familias campesinas, realiza proyectos agrícolas de variada naturaleza, otorga títulos de propiedad a grupos de campesinos(as) organizados y concede becas a hijos e hijas de padres y madres campesinas.<sup>123</sup> Lo propio puede decirse de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). La SAG tiene una amplia gama de proyectos orientados a mejorar las condiciones de los pequeños productores del área rural.

Enmarcada en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), se ha aprobado el Decreto Ejecutivo No. PCM-038-2010, que establece la Política Nacional y la Estrategia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional con la finalidad de garantizar la adopción de los lineamientos de las respectivas políticas sectoriales y sus planes de largo plazo en salud, educación, agroforestal, microempresa, protección social, agua y saneamiento, gobernación e infraestructura básica.

Los principales indicadores que apuestan a la seguridad alimentaria son el incremento de la productividad (oferta) y el incremento en las exportaciones – ingreso (disponibilidad).

Se han conformado 11 regionales y priorizadas 7 cadenas en cada una de ellas<sup>124</sup>, como se ilustra seguidamente:

---

<sup>123</sup> INA, Logros y actividades del INA, 2012

<sup>124</sup> Desarrollo de Cadenas Productivas y la Regionalización de los Servicios de la SAG. Informes sobre los esfuerzos implementados por la SAG en pro de garantizar la seguridad alimentaria: Una óptica desde la disponibilidad de alimentos y acceso a ingresos.

### Priorización de cadenas por región.

Región	Cadenas priorizadas	Región	Cadenas priorizadas	Región	Cadenas priorizadas
R-01 sede San Pedro Sula, Cortes	Acuícola	R-05 Olanchito	Arroz	R- 12 Sede Tegucigalpa	Avícola
	Avícola		Frijol		Frijol
	Bovina- Carne		Maíz		Maíz
	Bovina- Leche		Bovina-carne		Chile
	Cacao		Bovina-leche		Cebolla
	Plátano		Cítricos		Tomate
	Caña de azúcar		Palma africana		Plátano
R-02 Comayagua	Acuícola	R-08 Juticalpa	Avícola	R-13 Choluteca	Caña de azúcar
	Frijol		Frijol		Rosquillas
	Maíz		Maíz		Acuícola
	café		Bovina-carne		Pesquera
	Bovina- Carne		Bovina leche		Apícola
	Porcina		Cacao		Sorgo
	mango		sandía		Bovina-carne
R-03 sede Santa Rosa de Copan	Apícola	R-11 Danlí	Avícola	R- 14 La Esperanza	Bovina-leche
	Frijol		Frijol		Marañón
	Maíz		Maíz		Moringa
	Bovina- leche		Bovina-carne		Biocombustible
	Café		Bovina-leche		ajonjolí
	Caña de azúcar		Porcina		Frijol
	piña		Cacao		Maíz
R-04 sede La Ceiba, Atlántida	Pesquera		café	R- 14 La Esperanza	Sorgo
	Frijol		Raíces y tubérculos		Bovina-carne
	Bovina-leche		Plátano		Bovina-leche
	Cacao		Biocombustibles		Café
	plátano		aguacate		papa
	R-14 Sub 01 Ocotepeque	Frijol	Total cadena priorizada a nivel nacional:32  Principales: Bovina-leche, frijol, maíz, bovina carne, café, plátano, cacao.		
Maíz					
Bovina- carne					
Bovina- leche					
Café					
Cebolla					
papa					
Fuente: Informe de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.					

### 5.3. DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

La Constitución de la República en su artículo 178, establece que “Se reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna. El Estado formulará y ejecutará programas de vivienda de interés social...”.

De acuerdo a los instrumentos internacionales en derechos humanos los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia incluyendo una vivienda adecuada.

Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, hay en el país unas 1,786,742 viviendas, que albergan 1,822,142 hogares con 8,303,399 personas. El 49.1% de las viviendas se encuentra en el área urbana, y, el 50.9 restante, en el área rural. El promedio de personas por vivienda es de 4.6 personas. En los hogares urbanos, el promedio es de 4.3 personas, y en hogares rurales, de 4.8.

En el área urbana, el 95.7% de las viviendas cuentan con servicio de agua. En el área rural, es de un 82.2%. El 13.1% de las viviendas no cuentan con un sistema de saneamiento adecuado. Esta proporción es mayor en el área rural en la cual el 17.4% no cuenta con un sistema de saneamiento adecuado. Las viviendas más pobres en el área rural emplean letrinas con pozo y otras adolecen de cualquier forma de eliminación de excretas.<sup>125</sup>

Más de la mitad de las viviendas que tienen abastecimiento regular, son atendidas por servicios privados o colectivos, categoría que incluye empresas privadas, juntas de agua y patronatos (ver gráfico 29).

Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, el 98.2% de los hogares en el área urbana tienen energía eléctrica. En el área

rural, este porcentaje es del 63.6%. Es usual que en este ámbito territorial, el 30% de las viviendas se alumbren con velas, candiles, lámparas de gas y madera de ocote. El 17.6% de los hogares del primer quintil de ingresos, se alumbran con estos materiales. El 94.2% de los hogares del quinto quintil de ingresos, el de los de mayores ingresos, dispone de servicios de electricidad<sup>126</sup> (ver gráfico 30).

En relación al hacinamiento, entendido como la cohabitación de más de 3 personas por pieza, se observa que el 9.8% de las viviendas en Honduras presentan esta situación. Sin embargo, las series acumuladas del último quinquenio, revelan un descenso paulatino de esta problemática.

El hacinamiento está estrechamente relacionado con la pobreza. Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, en el primer quintil de ingresos, el de los más pobres, la tasa de hacinamiento es de 16.1%. En cambio, en el quinto quintil de ingresos, el de las familias de mayores ingresos, el hacinamiento es de 1.5% (ver gráfico 31).

El hacinamiento es inversamente proporcional al nivel educativo de la o el jefe de hogar. Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, en los hogares donde la o el jefe de hogar no tiene ningún nivel educativo, el hacinamiento es de 13.5%. En los hogares donde la o el jefe de hogar tiene nivel secundario, es de 6.2%. En los hogares donde la o el jefe de hogar cuenta con educación superior, el hacinamiento, es de 0.7.

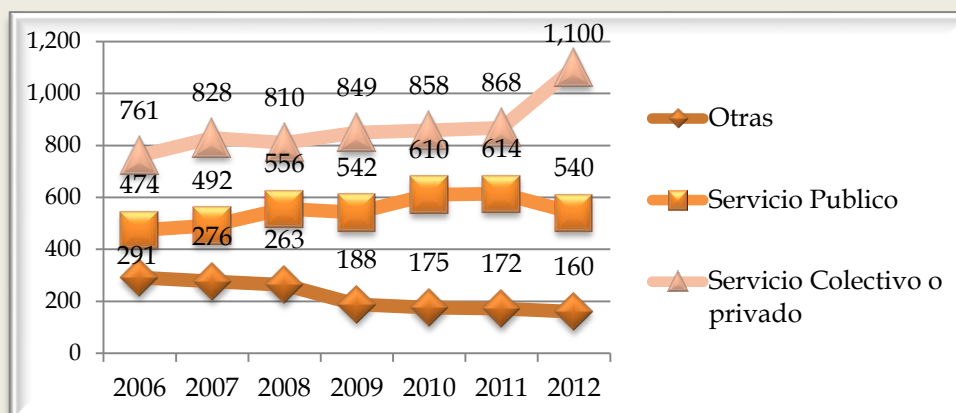
<sup>125</sup> INE, XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo, 2012. Resumen ejecutivo

<sup>126</sup> INE, EPHPM mayo 2012. Resumen Ejecutivo



**Gráfico 29**

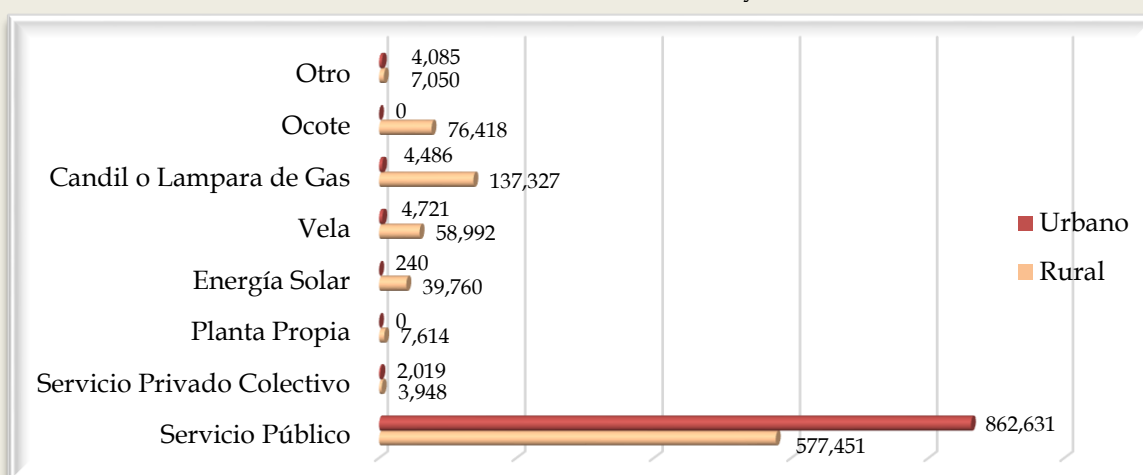
Acceso al agua de viviendas de acuerdo a prestador del servicio. Años 2006 - 2012  
(valores en miles de viviendas).



**Fuente:** XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2012, INE.

**Gráfico 30**

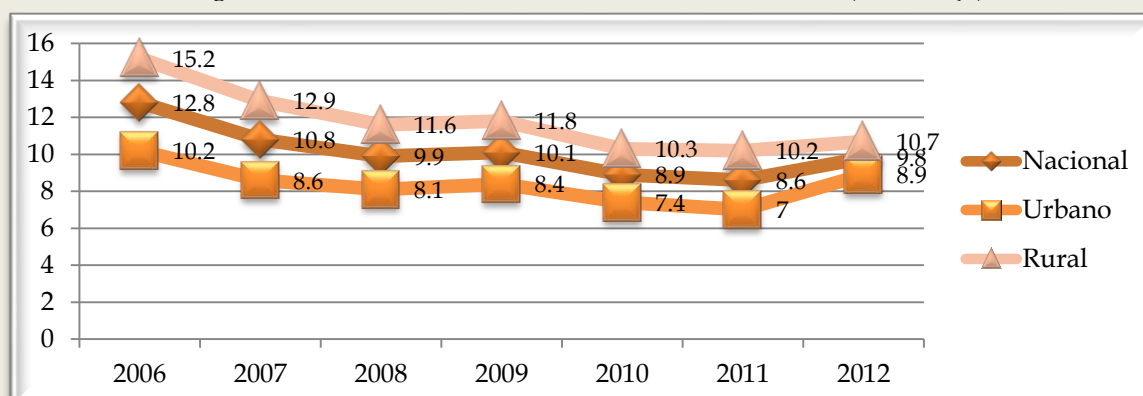
Fuentes de alumbrado en áreas urbana y rural 2012.



**Fuente:** XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2012, INE.

**Gráfico 31**

Hogares en condición de hacinamiento. Años 2006-2012. (Porcentaje).



**Fuente:** XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2012, INE.

Se hacen esfuerzos para enfrentar el déficit de viviendas en el país. El 24 de enero de 2011 recién pasado, el Presidente de la República aprobó, en Consejo de Ministros el Decreto Ejecutivo PCM-004-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,439 del 10 de febrero de 2011, mediante el cual se crea el Programa Presidencial de Coordinación del Sector Habitacional (Pro-VIVIENDA). Este programa tiene como propósito, como su nombre lo indica, coordinar esfuerzos para formular, impulsar y ejecutar la estrategia del sector habitacional del Gobierno. (Ver Gráfico 33)

#### 5.4. REFORMA AGRARIA

El Estado hondureño mantuvo un activo papel de mediador en el conflicto agrario presentado en la zona del Aguán. Por su trascendencia, se le describe con cierto detalle. El 13 de abril de 2010 el Gobierno de la República y el MUCA firmaron un Acuerdo con los siguientes puntos: (i) Desalojo de las fincas ocupadas por las y los campesinos; (ii) Adjudicación y posesión inmediata y pacífica del MUCA de 3,000 hectáreas cultivadas de palma africana; (iii) Adjudicación de 1,000 hectáreas de tierra cultivadas de palma africana en un plazo de 1 año; (iv) Adjudicación de 7,000 hectáreas de tierra no cultivadas; (v) Dotación de servicios de salud, educación y vivienda, aspectos a trabajar progresivamente entre el Gobierno de la República y el MUCA; (vi) Compromiso del Presidente de la República de instruir a las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional para mantener un respeto irrestricto a los derechos humanos e investigar cualquier denuncia de supuestas violaciones a los mismos; y (vii) Instalación de una Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos propuestos por el MUCA e integrada por cuatro personas: dos Funcionarios del Gobierno de la República propuestos por el MUCA, Ing. Samuel Reyes Rendón, Designado Presidencial y la Abogada Ana A. Pineda H.,

Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos y dos miembros de Sociedad Civil: El Lic. Andrés Pavón, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y el Dr. Juan Almendarez Bonilla, Director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).

El 24 de mayo 2011, se firmó un Acuerdo entre el Gobierno de la República y el MARCA que implica: (i) La adquisición de 1,500 hectáreas de tierra en un plazo no mayor a 6 meses; (ii) Entrega inmediata de 470 hectáreas de tierras cultivadas de Palma africana (Se comprobó que la entrega fue de 670 hectáreas.); (iii) Dotarles de servicios de asistencia técnica de parte del INA y generar proyectos sociales de parte del Gobierno de la República; y, (iv) Permitir un espacio de 3 meses de negociación a las partes (Gobierno de la República y MUCA) para la firma de un Acuerdo General.

El 16 de junio 2011, se logró un Acuerdo final con la participación de las y los campesinos, empresarios y el Presidente de la República, Lic. Porfirio Lobo Sosa y demás autoridades del Gobierno de la República. Este Acuerdo implicó la compraventa de siete (7) fincas con un área de 4,700 hectáreas a un precio de Lps. 135.000.00 por hectárea (\$ 7,105.00 por hectárea).



Firma del acuerdo de negociación entre el empresario Miguel Facussé B, el Director Ejecutivo del INA Cesar David Ham Peña y el Presidente de la República, Lic. Porfirio Lobo Sosa.

Luego de meses de negociación, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno del Presidente Lobo y el MUCA fueron ratificados por el Congreso Nacional de la República, al aprobar, el 13 de septiembre de 2011 el Decreto No. 161-2011, el cual es publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,635 de 4 de octubre del mismo año. El Congreso Nacional de la República justificó la intervención del Estado en la urgente necesidad de prevenir el agravamiento de un conflicto presente en la zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, durante varios años. El Decreto en referencia autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Finanzas, otorgue garantía soberana y fiduciaria del Estado a las instituciones del sistema financiero privado o entidades públicas para la compra de 4,045.7 hectáreas distribuidas en siete fincas de la Exportadora del Atlántico y 667.04 en una finca de Oleopalma de Centroamérica. El precio por hectárea se pacta en 135,000.00 Lempiras.

El Decreto establece también que el traspaso de la propiedad a la empresa campesina operará hasta que el préstamo sea pagado y que la tierra adquirida no podrá ser objeto de nueva tradición, pues se constituye en patrimonio familiar generacional, salvo la disolución de la empresa asociativa, en cuyo caso el Estado conserva la primera opción de compra, a través del Instituto Nacional Agrario (INA). Finalmente, se establece que el pago a los actuales propietarios se realizará dentro del término de noventa días a partir de la vigencia del decreto. Para efectos organizativos, el MUCA tomó la decisión de convertirse en una empresa asociativa campesina bautizada con el nombre de Empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicios “Liberación MUCA”.

## 5.5. ACCESO A LA TIERRA: PROCESO DE TITULACIÓN POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO<sup>127</sup>

Según información proporcionada por el INA los procesos de titulación de tierras rurales se realizan en dos formas: a) Colectiva o Social a favor de los grupos campesinos conformados en Empresas Asociativas o Cooperativas Agropecuarias Campesinas y a las Comunidades Indígenas; y, b) Individual, a favor de campesinos personalmente beneficiarios de la reforma agraria.

En el periodo comprendido entre el año 2010 a 2012 se han otorgado 35,260 títulos beneficiando a 45,693 familias. Del total de las personas beneficiarias 16,349 son mujeres y 29,344 son hombres.

En cuanto a la titulación de tierras emitidos a favor de empresas o cooperativas agropecuarias campesinas como se ilustra a continuación.

**Empresas campesinas beneficiadas con la titulación. Años 2010 a 2012.**

Año	Títulos	Hectáreas	Empresas campesinas Beneficiadas	Beneficiarios directos	
				Hombres	Mujeres
2010	218	13,667.05	186	2,923	655
2011	168	11,577.95	135	2,061	627
2012	39	982.15	17	250	157
<b>Total</b>	<b>425</b>	<b>26,227.15</b>	<b>338</b>	<b>5,234</b>	<b>1,439</b>

<sup>127</sup> Información proporcionada por el INA a petición de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Del 2010 al 2012 se emitieron 13 títulos de propiedad a favor de las comunidades: Xicaque, Chortí, Lenca y Miskita en una extensión superficial de 56,140.32 hectáreas, beneficiando a 4,198 jefes de familia.

#### **Títulos otorgados en comunidades indígenas. Años 2010 a 2012.**

Año	Descripción	Títulos	Hectáreas	Ubicación	Beneficiarios		
					Mujeres	Hombres	Total
2010	Comunidad Xicaque	1	115.21	Orica, Francisco Morazán	93	81	174
2011	Comunidad Chortí	7	255.96	Copán Ruinas, Copán	155	90	245
	Comunidad Lenca	2	422.55	Masaguara y Jesús de Otoro, Intibucá	68	48	116
2012	Comunidad Chortí	1	25	Sensenti, Ocotepeque	16	4	20
	Comunidad Chortí	1	29.13	Copán Ruinas Copán	21	23	44
	Comunidad Miskita	1	55,292.47	Puerto Lempira, Gracias a Dios	1,703	1,896	3,599
	<b>Totales</b>	<b>13</b>	<b>56,140.32</b>		<b>2,056</b>	<b>2,142</b>	<b>4,198</b>

En cuanto a la titulación individual en el mismo periodo se otorgaron 34,822 títulos sobre 67,920.3 hectáreas.

#### **Beneficiarios titulación individual. Años 2010 a 2012.**

Año	Mujeres		Hombres		Totales	
	Títulos	Hectáreas	Títulos	Hectáreas	Títulos	Hectáreas
2010	849	3,895.81	1,870	16,046.60	2,719	19,942.41
2011	2,998	5,102.24	6,657	27,459.15	9,655	32,561.39
2012	9,007	5,174.01	13,441	10,242.22	22,448	15,416.23
<b>TOTAL</b>	<b>12,854</b>	<b>14,172.06</b>	<b>21,968</b>	<b>53,747.97</b>	<b>34,822</b>	<b>67,920.03</b>

### **5.5.1 ACCESO A LA TIERRA Y ORGANIZACIÓN CAMPESINA**

El INA para llevar a cabo el proceso de reforma agraria atiende diferentes tipos de organizaciones entre las que figura la Asociación de Desarrollo Campesino que opera como una Confederación Campesina a nivel nacional que aglutina 12 Frentes Campesinos que a su vez conglomeran a 635 Empresas Asociativas Campesinas. Además se atiende a 22 Organizaciones Campesinas afiliadas a 3 Confederaciones: Consejo Nacional de Campesinos (CNC), Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas

de Honduras (COCOCH) y Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC).

A la fecha existen 3,969 Empresas Asociativas y Cooperativas Campesinas que aglutinan 72,298 personas beneficiadas, de las cuales 45,331 son hombres 26,967 son mujeres.

### **5.5.2 CONFLICTOS AGRARIOS**

Según información proporcionada por el INA, los conflictos agrarios se clasifican en:

Conflictos de Primer Grado; estos son los conflictos más graves que atiende la Dirección Ejecutiva del INA con el apoyo de las Oficinas Regionales Agrarias, a partir de actuaciones de

oficio o por solicitudes de afectación y/o adjudicación presentadas por los campesinos.

Los Conflictos de Segundo Grado, son los que se tramitan en forma normal en las diversas Oficinas Regionales Agrarias y en la Central.

Los conflictos registrados a nivel nacional se ilustran seguidamente:

#### Conflictos de primer grado.

Nombre del departamento	Problema
Colón	Cooperativas y empresas Campesinas aglutinadas en los movimientos Muca y Marca pretenden la adjudicación de predios propiedad de los señores Miguel Facusse, Miguel Morales y Reinaldo Canales.
Choluteca	Empresas y cooperativas solicitan afectación y posterior adjudicación del área fiscal en sitio Pavana.
	Empresas y cooperativas solicitan afectación de tierras propiedad de la compañía mercantil azucarera de Grecia
	Empresas y cooperativas campesinas beneficiadas mediante adjudicación en dominio pleno han realizado ventas irregulares a particulares, en el sector denominado Las Hormigas.
Comayagua	Empresas campesinas solicitan recuperación para fines de reforma agraria, un área de las tierras que han sido concedidas en arrendamiento a las granjas Marianas San Bernardo S.A
Comayagua	Empresas y cooperativas con requerimiento fiscal por el delito de usurpación.
Cortés	Empresas y cooperativas aglutinadas en el movimiento organizado de San Manuel solicitan afectación de tierras propiedad de la compañía azucarera hondureña CAHSA.

Nombre del departamento	Problema
Yoro	Empresas y cooperativas aglutinadas en el movimiento organizado de San Manuel solicitan afectación de tierras propiedad de la compañía Azucarera Norte S.A AZUNOSA.

#### Conflictos de segundo grado.

No.	Oficina regional agraria	Número de expedientes
1	Zona del litoral Atlántico	21
2	Zona occidental	8
3	Zona central	9
4	Zona oriental	9
5	Zona sur	20
6	Departamento de Francisco Morazán	23
7	Oficina central Tegucigalpa	264
8	Zona norte	116
9	Departamento de Colón	15
10	Departamento de Olancho	15
	<b>total</b>	<b>500</b>

#### Conflictos agrarios en las comunidades indígenas y afrohondureñas.

Departamento	Numero
Atlántida	5
Colón	7
Islas de la Bahía	1
La Paz	1
Lempira	1
Intibucá	2
Olancho	2
Yoro	4
<b>Total</b>	<b>23</b>

## 6. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

El derecho a la protección de la salud implica que cada persona debe gozar del más alto nivel posible de salud física y mental. Es obligación del Estado garantizar este derecho a través de medidas preventivas y asistenciales que incluyen la reducción de la mortalidad infantil, la prevención de enfermedades epidémicas y endémicas y la asistencia médica en caso de enfermedad. El Estado está obligado también a garantizar un ambiente sano y equilibrado que favorezca la conservación de la salud.

Veamos, a continuación, algunos indicadores claves en materia de salud.

### 6.1. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

La Tasa de Mortalidad Infantil es la tasa de niños y niñas menores de un año por cada mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad en la niñez, es la misma medición en niños y niñas menores de cinco años.

No se dispone de datos actualizados. La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) data del año 2005-2006. Según esta fuente, 23 niños y niñas por cada 1,000 nacidos vivos murieron durante el primer año de vida. La ENDESA 2005-2006 y las encuestas anteriores, mostraron que existe una relación inversamente proporcional entre la educación de la madre y la mortalidad infantil. En madres sin educación formal, la TMI fue casi el doble (37 por cada 1,000) que en madres con educación superior (20 por cada 1,000).

La tasa de mortalidad en niños y niñas menores de cinco años fue de 32 por cada 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil se encuentra estrechamente relacionada con la condición económica de los padres. En el

primer quintil de ingresos, los hogares más pobres, la tasa de mortalidad infantil fue de 50 por cada 1000 nacidos vivos. En el quinto quintil, el de los hogares de mayores ingresos, la tasa de mortalidad infantil, fue de 20 por cada 1,000 nacidos vivos.

### 6.2. COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN

“Durante el año 2009-2011 se lograron coberturas superiores al 90% con las vacunas Hepatitis B Pediátrica y BCG a nivel hospitalario y clínico materno infantil, lográndose a junio de 2012 que del total de hospitales públicos que ofertan servicios de vacunación (25/28) clínicas materno infantil (61/62), hospitales de IHSS (6 y 3 hospitales privados se vacune al 97% de los recién nacidos).

Para el año 2012 en el esquema nacional de vacunación se ofertan 16 vacunas en red de servicios de salud pública y seguridad social dirigidos a la protección de la salud de las familias hondureñas a lo largo de todo el ciclo de vida”<sup>128</sup>.

Entre las principales vacunas aplicadas en el sistema de salud hondureño, las vacunas del denominado esquema básico, se encuentran las de Tuberculosis (BCG), Fiebre Amarilla, Rotavirus, Difteria, Tos Ferina, Tétanos, *Haemophilus Influenzae* tipo b, Hepatitis B, Poliomielitis, Sarampión, Rubeola y Parotiditis. La Secretaría de Salud el 20 de noviembre de 2012 inauguró la campaña de vacunación contra Influenza y Neumococo, dirigida a personas mayores de 60 años, diabéticas, con insuficiencia renal y niños de seis a 35 meses

<sup>128</sup> Informe Programa nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). Secretaría de Salud. Dirección General de Promoción de Salud.



de edad que padezcan de asma y a trabajadores de la salud<sup>129</sup>.

Según datos de la ENDESA 2005-2006, el 85% de los niños y niñas nacidas en los cinco años anteriores a la encuesta, tenían su carné de vacunación. Esto significaba un ligero retroceso en relación al 87% reportado en la ENESF 2001. Así mismo, se sabe que el 75% de las y los niños entre 12 y 23 meses recibieron todas las vacunas esenciales en 2005-2006. También se observa un ligero retroceso en relación al 78% de 2001.

Esta es un área que sucesivos gobiernos han mantenido como prioritaria. Esta continuidad ha permitido avances paulatinos, pero constantes hacia una cobertura ya cercana al total de las y los niños en edad de recibir sus vacunas. En su informe anual presentado ante el Congreso Nacional en 2011, el Presidente de la República informaba que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) hondureño había sido reconocido como el mejor de Iberoamérica, al alcanzar una cobertura de 95%. Durante, el mes de abril de 2012, se recibió el reconocimiento de la Fundación Bill y Melinda Gates, lo que le ha permitido al Estado hondureño introducir las vacunas contra el neumococo y el rotavirus en el cuadro de inmunización del país.<sup>130</sup>

El 19 de marzo de 2012 dio inició la campaña de vacunación para niñas de las escuelas públicas y privadas incluyendo en el cuadro de vacunación la del virus papiloma humano. Esta campaña pretende inmunizar al menos 20,000 niñas y niños entre los 10 y 11 años.

---

<sup>129</sup> Esquema Nacional de Vacunación Honduras 2012. Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

<sup>130</sup> Lobo y padre de Bill Gates inaugurarán campaña de vacunación. *La Prensa*, 23.04.2012 (versión digital).

### 6.3. ESPERANZA DE VIDA

---

La esperanza de vida es el número promedio de años que una persona puede prever que vivirá si se mantienen en el futuro las tasas de mortalidad por edad del momento en la población. La esperanza de vida sana es una variable estadística relacionada, que estima el número equivalente de años de buena salud que una persona puede prever que vivirá teniendo en cuenta las tasas de mortalidad y la distribución de la prevalencia de los problemas de salud en la población en ese momento.<sup>131</sup>

La esperanza de vida es un indicador muy importante para medir la calidad de vida en un país. Por ello se le emplea en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano. Es también una guía para las estimaciones actuariales en sistemas de previsión social.

De acuerdo al Anuario Estadístico 2010 de la Secretaría de Salud, para el año 2010, la esperanza de vida al nacer en Honduras era de 73.6 años. En los hombres, este indicador se ubicaba en 70.1 años y en la mujeres, en 77.2 años. Es de hacer notar que tradicionalmente han existido dificultades en el cálculo de este indicador en Honduras, debido al déficit de inscripción de defunciones, por lo que estas cifras dependen mucho de estimaciones y predicciones.

### 6.4. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A PERSONAL SANITARIO

---

No hay datos recientes para estimar este indicador. Hacia diciembre de 2005, el Plan Nacional de Salud 2021 fijaba en 9 la razón de médicos por cada 10,000 habitantes. Esta era, según la Organización Panamericana de la Salud, la segunda más baja del istmo centroamericano. La cifra más baja

---

<sup>131</sup> Definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

correspondía a Belice, que era de 8.5% por cada 10.000 habitantes. Costa Rica duplicaba la tasa hondureña ya que tenía para entonces 20 médicos por cada 10,000 habitantes.<sup>132</sup>

## 6.5. PROPORCIÓN DE MUJERES

### EMBARAZADAS QUE RECIBEN ATENCIÓN DE PERSONAL SANITARIO DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO

---

Según los datos de la ENDESA 2005-2006, el 92% de las mujeres embarazadas tuvo atención pre-natal de personal sanitario. De éstas, un 72% recibió los cuidados por parte de un médico y un 19% por enfermera o auxiliar de enfermería. Esta cifra significaba un incremento de 9 puntos porcentuales sobre el 83% reportado por la Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar (ENESF) en 2001.

Para entonces, el 67% de los partos fue atendido en establecimientos sanitarios por profesionales de la salud. Esto significaba un pequeño incremento en relación al 62% estimado para 2001. En el área urbana, el 90% de los alumbramientos fue asistido por personal calificado. En cambio, en las zonas rurales, el porcentaje era apenas del 50%.

## 6.6. EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA DE SALUD EN MATERIA DE ATENCIÓN PRIMARIA, INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN

---

El Plan Nacional de Salud 2021, publicado en diciembre de 2005, fue el primer intento por parte de la Secretaría de Salud de formular y concertar un instrumento de planificación

---

<sup>132</sup> Organización Panamericana de la Salud (OPS). *Situación de salud en las Américas: Indicadores básicos*. 2007. En: [http://www.paho.org/spanish/dd/ais/IB\\_2007\\_SPA.pdf](http://www.paho.org/spanish/dd/ais/IB_2007_SPA.pdf) Si bien el informe se emite en 2007, los datos sobre personal de salud corresponden a 2005.

estratégica a largo plazo. Este fue fijado en cincuenta años.

El Plan Nacional de Salud 2021 aspiraba a que el sistema hondureño estuviera orientado hacia la atención primaria en salud (APS). Contenía propuestas estratégicas para varios grupos poblacionales: escolares, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidades y pueblos indígenas. Priorizaba las áreas de salud materno infantil y nutrición, control de enfermedades transmisibles, control de enfermedades crónicas no transmisibles y la reforma del sector salud. Para cada una de estas áreas identificaba objetivos, resultados esperados e indicadores, para los años 2010, 2015 y 2021.

Nos estamos aproximando al 2015. Este será, sin lugar a dudas, un buen momento para evaluar los logros del Plan Nacional 2021. Este es, seguramente, un desafío que deberá enfrentar la Secretaría de Salud con visión de futuro.

## 6.7. POLÍTICAS, LEYES O PRÁCTICAS QUE PUEDEN MENOSCABAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

---

### 6.7.1 LA PROHIBICIÓN DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA DEL DÍA DESPUÉS.

---

Desde la perspectiva de derechos humanos, uno de los temas de salud que ha suscitado mayor debate durante los últimos tres años, ha sido el de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). Si bien la controversia se remonta a su inclusión o no en los cuadros de medicamentos de la Secretaría de Salud, el debate tomó mayor relevancia cuando mediante Decreto 54-2009 del 12 de abril de 2009, el Congreso Nacional de la República prohíbe el uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la PAE. Dicho Decreto fue vetado por el entonces Presidente de la República, Manuel Zelaya

Rosales, el día 15 de mayo de 2009. La Corte Suprema de Justicia se pronunció el 1 de febrero de 2012, en aplicación del artículo 216 de la Constitución de la República, el cual establece que el Poder Legislativo no podrá someter a discusión nuevamente un proyecto de ley que se hubiere vetado alegando inconstitucionalidad, sin antes escuchar al tribunal supremo de justicia. La Corte Suprema de Justicia concluyó que la PAE era abortiva y que, por tanto, la prohibición contenida en el Decreto 54-2009, no era incompatible con la Constitución de la República.

Al pronunciarse, la Corte Suprema de Justicia asumió una definición del *aborto* que no se encuentra prescrita en la Constitución de la República, ni en los tratados de derechos humanos pertinentes, ni en la legislación secundaria. La única disposición que define el aborto, es el artículo 126 del Código Penal, que lo tipifica como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. El dictamen de la Corte Suprema de Justicia esgrimíó como argumentos de valor los de profesoras de la Universidad de Navarra y de la Pontificia Universidad Católica de Chile e ignoró argumentos de peso esgrimidos por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en Inglés) y de los Institutos Nacionales de Salud y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos de América y de Honduras. Estos últimos sostienen que un embarazo se establece a partir de la implantación del óvulo fecundado en el útero.<sup>133</sup>

El dictamen de la Corte Suprema de Justicia tampoco realizó un análisis minucioso de los motivos de inconstitucionalidad invocados en

el veto presidencial, con lo cual se perdió la oportunidad de efectuar una verdadera ponderación entre derechos en la situación concreta, que es la técnica que aconseja la teoría de la argumentación jurídica en casos constitucionales complejos, como la prohibición de que se trata.

La decisión de prohibir la píldora Anticonceptiva de emergencia (PAE) fue y continúa siendo cuestionada por el Movimiento de Mujeres.

## 6.7.2 PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS Y LOS JÓVENES Y LAS IDENTIDADES DE GÉNERO

Un reciente estudio sobre el derecho a la protección de la salud de los y las jóvenes y las identidades de género en Centroamérica y el Caribe, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, señala que en Honduras:

- a. Existe un acceso y conocimiento limitado de los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la salud;
- b. Hay un alto grado de discriminación y violencia contra las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales y que los mecanismos de prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción no responden apropiadamente a este reto; y,
- c. La legislación, las políticas y los programas de interés para las y los adolescentes no parecen estar incorporando adecuadamente sus necesidades en lo que atañe a la salud sexual y reproductiva y los servicios de prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones transmitidas sexualmente.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> *Protection of Human Subjects*, 45 C.F.R. Sec. 46.202 (2009); Hughes, EC (ed). Committee on Terminology, The American College of Obstetricians and Gynecologists. *Obstetrics-Gynecologic Terminology*. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company, 1972.

<sup>134</sup> Organización Panamericana de la Salud (OPS). *El derecho a la salud de los jóvenes y las identidades de género*:

He aquí un desafío que debe ser enfrentado por las instituciones estatales involucradas.

### 6.7.3 ACCESO A MEDICAMENTOS

Durante el segundo trimestre de 2012 se han incrementado las denuncias sobre falta de medicamentos en los centros asistenciales públicos. Entre los más afectados por esta carencia, se encuentran los pacientes con enfermedades crónicas y/o graves.

A título de ejemplo, los miembros del Comité de Acceso para la Atención Integral de las Personas con VIH-SIDA han interpuesto denuncias ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que la Secretaría de Salud provea de terapias de rescate a, al menos, 19 pacientes cuya terapia antirretroviral no está funcionando. Los problemas con el tratamiento derivan de que el VIH ha desarrollado resistencia a los medicamentos que están tomando los pacientes. A esta conclusión se llega no sólo por manifestaciones clínicas, sino también por exámenes específicos de su carga viral y análisis de resistencia. Es por eso que los representantes de este colectivo han reclamado, tanto el cambio de medicamentos, como una atención integral que incluya las pruebas de laboratorio necesarias y los reactivos para dichos estudios.<sup>135</sup>

### 6.8. EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE SALUD QUE DEN ATENCIÓN ESPECIAL A GRUPOS HUMANOS Y SECTORES GEOGRÁFICOS MARGINADOS

En el año 2004, se aprobó la Política Nacional para la Prevención de la Discapacidad, la

Atención y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad y el Comité Nacional de Discapacidad.

En ese mismo año, se aprobó la Política Nacional de Salud Mental en la cual se definen seis áreas estratégicas y dos ejes transversales. Las áreas son: i) ética y derechos humanos; ii) violencia intrafamiliar; iii) promoción y prevención; iv) identidad, cultura y migración; v) fortalecimiento institucional; y, vi) investigación científica. Los ejes son: i) equidad de género; ii) ética, y derechos humanos.

No hay que ser una persona muy observadora para constatar que los servicios públicos de salud para estos dos colectivos, presenta una gran diferencia entre los objetivos de los planes y la realidad fáctica que viven los mismos. En relación a otros colectivos humanos que requieren atención especial o que viven en zonas geográficas históricamente postergadas, no sólo no existen planes específicos. En estos casos, ni siquiera se cuenta con datos o estadísticas desagregadas para orientar políticas y programas particularizados.

La garantía de los Derechos y Dignidad de las Personas con Discapacidad es responsabilidad de la Dirección General para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad que está adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población. Esta Dirección ejecuta dos proyectos, uno en el área de salud y otro, en educación.

En el proyecto de Salud, se realiza un proceso de identificación y dotación de un carnet para las personas con discapacidad. Este proyecto inició hace 3 años con el propósito de crear un censo de las personas con discapacidad para su debida identificación y el acceso a los derechos de los que son sujetos (as) de acuerdo a lo establecido en Artículo 53, Capítulo IV de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, emitida mediante

hallazgos, tendencias y medidas estratégicas para la acción en salud pública. Washington, D.C.: OPS, 2011.

<sup>135</sup> Enfermos de VIH-SIDA expuestos a morir rápido: afrontan una situación delicada. *La Tribuna*, 16.05.2012. p. 76; Aidsinonet.org. *Terapia de rescate: hoja 408* en: [http://www.aidsinonet.org/fact\\_sheets/view/408?lang=spa](http://www.aidsinonet.org/fact_sheets/view/408?lang=spa)

Decreto 160-2005. Este proyecto consta de 2 etapas:

Primera etapa: VÍA CORTA. Esta es la etapa que se desarrolla actualmente, y que tiene como propósito la creación del material de identificación: una ficha diagnóstica y un manual de aplicación que fueron creados en base al registro con el que cuenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), denominado Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), diseñado por un grupo de especialistas del sector y representantes de cada red. En esta etapa, el objetivo es identificar a las Personas con Discapacidad que pertenecen a diversas instituciones del sector estatal. Se capacitó a representantes de las mismas, para aplicar la ficha.

Segunda etapa: VIA LARGA. Esta etapa está iniciando su ejecución. Consiste en identificar a todas las personas con discapacidad, estén o no afiliadas a una institución y dará el seguimiento a la vía corta mediante la convocatoria del grupo de trabajo conformado en la primera etapa. En esta fase, se incluye la creación de una matriz para las y los médicos generales y especialistas del sector público y privado para mejorar la primera ficha, hacerla más específica y ser capaz de establecer el diagnóstico y la ampliación de la base de datos de las Personas con Discapacidad.

A la fecha, la Dirección General para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad cuenta con una cifra de cuatro mil cuatrocientas noventa y cuatro (4,494) fichas ingresadas y tres mil ciento setenta y tres (3,173) carnets impresos y entregados. Se han realizado también brigadas a nivel nacional para identificar a las personas con discapacidad que no pueden movilizarse y hacerles conocer de sus derechos, así como del acceso que tienen a un carnet de identificación.

Para mantener un enlace con las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno de la República nombró un Comisionado Especial de las personas con discapacidad, quien además ejecuta actividades en beneficio de este sector.

## **6.9. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES DE**

### **SALUD RELACIONADAS CON AMBIENTE E HIGIENE INDUSTRIAL**

La atención de esta temática corresponde a la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Gestión Sanitaria Ambiental (UGSA), que realiza funciones de regulación, vigilancia y promoción en el sector. Según los datos de esta Unidad, casi el 80% de las primeras atenciones de menores de 5 años en unidades ambulatorias se deben a diarreas e infecciones respiratorias agudas. Ambas afecciones tienen relación con el ambiente en su dimensión de problema de salud, pues se vinculan a la calidad del agua que se consume y del aire que se respira.

Durante los últimos veinte años y en observancia al Código de Salud (Decreto No. 65-1991), se ha venido aprobando, entre otros, normas técnicas y reglamentos en materia de la calidad del agua potable (Acuerdo 084, 31 de julio 1991), las emisiones de gases contaminantes y el humo de los vehículos automotores, las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario (Acuerdo 058, 9 de abril de 1996); salud ambiental (Acuerdo 0094, junio 1997), el manejo de desechos sólidos (Acuerdo 378-2001), la construcción y operación de cementerios, actividades de cremación de cadáveres o restos humanos (Acuerdo 160-2004) y el control sanitario de productos y servicios de establecimientos de interés



sanitario (Acuerdo 06, 21 de septiembre de 2005).<sup>136</sup>

A pesar de los avances en materia normativa, el país continúa careciendo de un sistema integrado de protección ambiental que permita la coordinación y la mayor efectividad de los servicios y competencias que tienen asignadas las municipalidades y varias secretarías de Estado. Entre estas últimas se encuentran: Trabajo y Seguridad Social, Recursos Naturales y Ambiente, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, y, Seguridad.

#### **6.10. ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES**

El Estado tiene una deuda pendiente con las personas adultas mayores ya que los servicios públicos de salud específicos para ellos y ellas son prácticamente inexistentes. Sin embargo, para efectos de buenas prácticas que deben ser emuladas, debe reconocerse la labor pionera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), al menos en la Ciudad de Tegucigalpa.

De acuerdo a información provista por el IHSS, el Centro de Atención al Adulto Mayor se inauguró el 13 de noviembre de 2003, brindando, desde enero de 2004, servicios de medicina general y especializada en Gerontología. Actualmente depende de la Clínica Periférica No. 1, pero se planea descentralizarlo para que opere con mayor autonomía. El Centro cuenta con las áreas de admisión, archivo, pre-clínica, trabajo social, toma de muestras, observación, farmacia, administración y área de recreo. Su personal, se ha ido capacitando y especializando en el cuidado de las personas adultas mayores.

En la Secretaría de Salud existen dos consultorios de atención exclusiva para el adulto mayor. Actualmente se está trabajando en un “manual de guías clínicas de atención al adulto mayor” las que entraron en vigencia en el segundo semestre del 2011.

En los llamados “nuevos modelos de gestión” incorporados en la Secretaría de Salud se está brindando atención por grupos itinerantes en los departamentos de Lempira, Copan, Intibucá, Santa Barbará, La Paz, Comayagua y Francisco Morazán.

En las Municipalidades de San Pedro Sula y Tegucigalpa hay programas especiales de atención médica general donde están incluidas las personas adultas mayores. También disponen de programas de apoyo permanente a las casas hogares o residencias de ancianos.

Para honrar el compromiso con este sector, se cuenta con una Ley de Protección al Adulto Mayor aprobada mediante Decreto Legislativo No. 7066-2002, que vino a sustituir la Ley de Tratamiento Especial para Personas de la Tercera Edad. Esta ley tiene como finalidad brindar protección integral al adulto mayor y garantizar el ejercicio de sus derechos. Establece también las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de: (i) La política pública nacional, la cual se encuentra a nivel de borrador y fue elaborada para la observancia de los derechos de los adultos mayores, colocándole como un grupo vulnerable y de especial atención por parte de la Secretaría de Salud; (ii) Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración gubernamental deberá observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional; y, (iii) La creación del Instituto hondureño del adulto mayor (IHAM).

La Ley de Protección al Adulto Mayor establece que las y los hondureños que

<sup>136</sup> Edwin Natanahel Sánchez Navas, (comp.), *Compendio de legislación ambiental 2011*



sobrepasen la edad de 60 años se beneficiarán de precios especiales en la adquisición de productos o servicios especiales, estableciéndose descuentos hasta del 50% para actividades recreativas como cines, teatros, museos, espectáculos deportivos y conciertos públicos o privados. Se les otorgará un 25% de descuento en pasajes para transporte aéreo, terrestre o marítimo, nacional o internacional, ya sean privadas o del Estado. Entre el 20 y 25% de descuento en hoteles, restaurantes, cafeterías y servicios de salud brindados en hospitales, incluyendo las farmacias. También contempla descuentos de 25% en consultas médicas, 30% en intervenciones quirúrgicas y servicios de odontología, cardiología, exámenes de laboratorio, optometría y oftalmología, incluyendo la compra de aros y lentes y en la contratación de servicios de ingeniería y arquitectura. En condiciones especiales, los familiares de un adulto mayor fallecido tendrán derecho a un 25% de descuento por la compra de lotes en cementerios, cajas mortuorias y servicios de funeraria.

También a nivel de legislación se cuenta con la Ley del Seguro Social y el Decreto No. 080-2001, del 1 de junio del año 2001, que contiene sus reformas y el Reglamento Especial de Afiliación Progresiva de los Trabajadores Individuales y Autónomos contenido en Acuerdo 007-JD-2008 de fecha 30 de septiembre de 2008.

Durante el último semestre del año 2008 y primer semestre del año 2009, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) realizó un proceso de consulta sobre la necesidad de desarrollar un Sistema Unitario Estatal de Previsión Social. Es importante mencionar que en el periodo señalado, se obtuvieron elementos jurídicos e institucionales que permitieron elaborar un primer documento denominado “Estrategia Nacional de Previsión Social”. Este no llegó a ser socializado y validado por la crisis política institucional

derivada de la ruptura del orden constitucional que vivió el país en 2009.

Las nuevas autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (2010-2014), conscientes del esfuerzo que se realizó, han considerado pertinente retomar el documento formulado dado que este cuenta con la legitimidad derivada de un proceso de consulta. Tiene el mérito de que en su momento logró consensuar los puntos de vista de los distintos actores participantes.

Con el propósito de revisar este documento y hacerle los ajustes necesarios, se ha procedido a conformar una Comisión Técnica en Seguridad Social integrada por los delegados de INJUPENH, INPREMA, INPREUNAH, IHSS, IPM, IPP, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Secretarías de Estado (Finanzas, Gobernación, Desarrollo Social y Planificación), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y las Centrales de Trabajadores.

La Comisión Técnica de Seguridad Social, dirigida por la STSS, ha considerado necesario introducir cambios legales, conceptuales, metodológicos y técnicos a fin de que esta propuesta contribuya a universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los asalariados y el 50% de la población ocupada no asalariada del país, (Visión de país 2010-2038). La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social se ha planteado la necesidad de crear un Nuevo Sistema de Pensiones Unificado que funcione en un Sistema Unitario Estatal con la aportación de todos los interesados (trabajadores, empleadores y el Estado). Este sistema debe ser enmarcado en la Constitución de la República y demás leyes pertinentes.

Sobre las medidas de cuidado de las y los Adultos Mayores, la Ley de Protección Integral al Adulto Mayor, regula la responsabilidad de los familiares en el cuarto grado de

consanguinidad y segundo de afinidad para dar atención y cuidados a sus adultos mayores.

El total de atenciones de las y los Adultos Mayores corresponde aproximadamente al 6% del total de atenciones dados por el sistema de salud y casi un 8% del total de egresos hospitalarios. La cobertura total es mayor al 90%. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, está consciente de la insuficiente cobertura de seguridad social a que tienen derecho los trabajadores, trabajadoras y sus dependientes. Apenas (657,597) es decir un 20% de la Población Económicamente Activa (PEA), está cubierta por algún régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). De ese 20%, un 13% obtendrán una pensión de IVM a través del IHSS, el cual difícilmente podrá conceder pensiones dignas, con una aportación total de apenas 3% sobre un techo de aportación. Del 7% restante, un 5% obtendrán su pensión, a través de los otros Institutos de Jubilaciones y Pensiones. Se espera que menos de un 5%, obtengan una cobertura adecuada al momento de pensionarse.

Los esfuerzos de la asistencia social se han traducido en múltiples programas y proyectos de los gobiernos, centrados en algunos grupos focalizados y en ciertas zonas geográficas sin desarrollar una estrategia lo suficientemente amplia, coherente y coordinada en la prestación de dichos servicios. Es así, que esta situación ha dado lugar a una compleja y segmentada red de programas de asistencia social, microseguros de salud y bonos de atención de vejez, de cobertura, insuficiente y carentes de la integralidad.

La gran mayoría de la población hondureña (casi el 80%) no tiene acceso a una pensión y depende de un sistema de salud público que apenas cubre el costo de la consulta, radiología, imágenes y medicamentos. Este sistema no representa una alternativa para las personas

más pobres del país. Entre ambos subsistemas (pensiones y salud) solamente se cubre al 20% de la población. Esto hace que los trabajadores y trabajadoras independientes, los profesionales, los propietarios de pequeños negocios y de talleres artesanales, los taxistas, trabajadores no asalariados, los vendedores ambulantes y otros sectores que no están afiliados a un sistema de previsión social, vean este derecho como parte de reivindicación que no ha recibido suficiente atención del Estado de Honduras.

Se han firmado convenios de cooperación entre las residencias de ancianos y la Secretaría de Salud en las cuales se les da prioridad en los centros asistenciales a las y los pacientes provenientes de estos centros así como la dotación de algunos medicamentos básicos. Se han llevado a cabo campañas de inmunización contra la Influenza en las que se ha dado cobertura al 95% de la población mayor de 60 años.

## 7. DERECHO A LA EDUCACIÓN

El derecho a la educación tiene valor intrínseco. Tiene valor en sí mismo. Es una puerta para el desarrollo pleno de las personas. Sin embargo, también tiene valor instrumental porque es indispensable para el goce y el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Se trata de un derecho complejo, pues compromete al Estado a una obligación de resultado, a varias obligaciones de comportamiento y a garantizar, al menos, dos libertades.

La obligación de resultado es el reconocimiento del derecho de toda persona a recibir una educación que enfatice la dignidad humana, la participación y la tolerancia. Las obligaciones de comportamiento comprenden el hacer obligatoria y asequible a todas las personas la

enseñanza primaria, generalizar la enseñanza secundaria hasta conseguir progresivamente su gratuidad, y, hacer accesible la enseñanza superior a todas y todos, de acuerdo a la capacidad de cada uno.

El derecho a la educación implica también el respeto al menos a dos libertades: i) la libertad de los padres, madres o tutores para escoger el centro educativo que esté de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas; y, ii) la libertad que tienen las y los particulares para fundar instituciones educativas, siempre y cuando cumplan con las normas mínimas fijadas por el Estado.

Veamos ahora algunas de las características generales de la educación en Honduras.

## **7.1. COBERTURA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN**

### **7.1.1. GRATUIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN.**

Según el artículo 171 de la Constitución de la República, la educación impartida oficialmente es gratuita. La educación básica es, además, obligatoria y tendrá que ser costeadada totalmente por el Estado. A partir del establecimiento del currículo nacional básico en 2003, corresponde también al Estado la atención obligatoria a niñas y niños de último año de segundo ciclo de educación pre-básica (a los cinco años de edad), mediante jardines infantiles oficiales, centros preescolares de educación no formal y centros comunitarios de educación pre-básica.<sup>137</sup>

Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, la cobertura neta de la educación pre-básica, la que se imparte a niños y niñas de 5 a 6 años, es del 42.1%. La

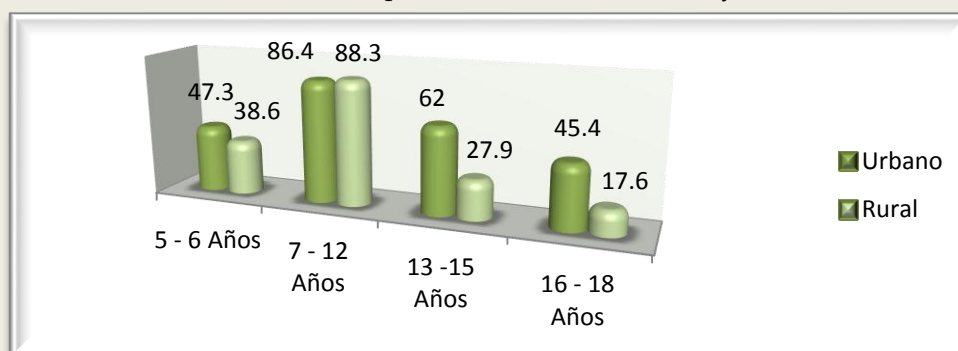
cobertura neta en educación primaria, (conocida hoy en día como el primero y segundo ciclo de la educación básica) que comprende al grupo de edad de 7 y 12 años, era del 87.5%. Este es el nivel educativo que tiene mayor cobertura. La tasa de cobertura neta de los niños y niñas con edades comprendidas entre 13 y 15 años es del 41.4%. Este es el denominado Tercer Ciclo de la educación básica que comprende del séptimo al noveno grado, que es obligatorio. Al nivel secundario propiamente dicho, el denominado ciclo diversificado, solo asiste el 30.2%. La educación secundaria ha sido definida como el umbral mínimo que requiere una persona en la sociedad de la información para poder superar la pobreza y mantenerse alejada de ella. Este es, seguramente, uno de los grandes desafíos de la educación hondureña. La Ley Fundamental de Educación promulgada durante el Gobierno del Presidente Porfirio Lobo Sosa ha aceptado el desafío declarando la obligatoriedad de la educación secundaria.

Si se analizan las tasas de cobertura por dominio, se observa que no hay grandes diferencias entre el ámbito urbano y rural en la educación pre-básica y en los dos primeros ciclos de la educación básica. En educación pre-básica, la diferencia es de 10 puntos porcentuales. En los dos primeros ciclos de la educación básica, no existe prácticamente ninguna diferencia. Las diferencias comienzan a ser notorias a partir del tercer ciclo de la educación básica y del ciclo diversificado. El 60% de los niños y niñas del área urbana asisten al tercer ciclo de la educación básica. En el área rural, este porcentaje es de apenas el 25.5%. La diferencia entre uno y otro, es de 34.5 puntos porcentuales. El 40.8% de los niños y niñas del área urbana asisten al ciclo diversificado. En el área rural, este porcentaje es de apenas el 16%. La diferencia en este nivel educativo, es de 24.8 puntos porcentuales (ver gráfico 32).

<sup>137</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). *Datos mundiales de educación*. VII Ed. 2010/2011. IBE/2010/CP/WDE/HO

**Gráfico 32**

Tasa de cobertura educativa por edades, en áreas urbana y rural. Año 2012.



Fuente: INE, EPHPM Mayo 2012.

### 7.1.2. EDUCACIÓN SUPERIOR

La cobertura neta de la educación superior, que comprende a jóvenes de 18 a 24 años, es de un 14.3%.<sup>138</sup> Este porcentaje se ha mantenido estable durante la última década, a pesar del surgimiento de nuevos centros de educación superior.

Existen en el país seis instituciones públicas de educación superior y catorce privadas. Ocho de estas instituciones, dos públicas y seis privadas, han surgido a partir de 2001. El 61% de la matrícula corresponde a las universidades públicas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la más grande universidad del país, tiene en su seno a 7 de cada 10 estudiantes de las instituciones públicas. Las mujeres constituyen la mayoría de los estudiantes de la educación superior en Honduras. El 57% de la matrícula en educación superior, sumando instituciones públicas y privadas, corresponde a estudiantes mujeres.

Hasta ahora, ninguna Universidad parece tener cobertura en los departamentos de Valle, La Paz, Lempira, Gracias a Dios e Islas de la

Bahía. Existen, sin embargo, sistemas de educación a distancia, principalmente en las dos universidades públicas de mayor tamaño. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, la matrícula en modalidad de distancia, representaba, para 2010, el 32% de su matrícula total. En el caso de la UNAH, el sistema de distancia ostenta el 10% de la matrícula total de la institución. Hasta ahora el sistema de educación a distancia es básicamente semi-presencial, con un uso todavía muy limitado de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.

### 7.1.3. CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES

El sistema educativo hondureño presenta agudas debilidades en la calidad de los aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Los estudiantes no están aprendiendo lo que debieran. Estas falencias en la calidad de los aprendizajes han sido puestas en evidencia por las pruebas de rendimiento que se han venido aplicando en tercer y sexto grado en las clases de español y matemática. Estas pruebas fueron aplicadas inicialmente por la Unidad de Medición de la Calidad (UMCE) y actualmente por el proyecto Mejorando el Impacto del Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH).

<sup>138</sup> La información para esta sección proviene de: Calderón Padilla, Rutilia. *El crecimiento y desarrollo de la educación superior en Honduras*. *Innovación Educativa* 11 (57), oct. - dic. 2011: 81 - 89.

Las pruebas practicadas por ambas instituciones revelan la baja calidad de los aprendizajes en español y matemáticas.

Según datos de 2008, el resultado promedio para primero, tercero y sexto grado en escuelas públicas, fue de 58,2% en la asignatura de Español y de 53,4%, en Matemáticas. Tradicionalmente, el área rural se ha encontrado en desventaja en relación al área urbana en las pruebas de español. En matemática, los resultados muestran semejantes deficiencias en el área rural y urbana.<sup>139</sup>

La Prueba de Aptitud Académica (PAA), practicada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para seleccionar los estudiantes que ingresan cada año ha mostrado, la deficiente calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes de educación secundaria. Según datos de la Dirección de Admisión de la UNAH, desde que se instituyó la PAA 183 mil estudiantes se han sometido a ella. De estos solo lograron aprobarla 131 estudiantes. Esto es el 73% de los estudiantes que tomaron la PAA.<sup>140</sup> De los 45.973 estudiantes que tomaron la PAA en 2012, solamente la aprobaron 29,227 estudiantes, lo que representaron el 63.5% del total de aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios.<sup>141</sup>

## 7.2. TASAS DE ANALFABETISMO Y PROMEDIO DE ESCOLARIDAD

Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, el 146% de las personas mayores de 15 años no sabe leer y escribir. La tasa de analfabetismo es mayor en el área rural (20.9%) que en el área urbana (8.1%). El analfabetismo es superior en las personas de mayor edad que en los jóvenes y ligeramente mayor en las

mujeres que en los hombres. Hasta 24 años, la tasa de analfabetismo es del 10%. Entre la población de 45 y 59 años de edad, el analfabetismo es de 19.7% y en la población de 60 años y más, el analfabetismo es de 39.4%. Entre las mujeres, la tasa de analfabetismo es 14.9% y en los hombres, es de 14.3%. Según esta misma fuente, el número de años de estudio promedio de la población es de 7.4 años. 7.2 años en hombres y 7.6 años en mujeres.<sup>142</sup> El analfabetismo y el abandono prematuro de la escuela, que se encuentra en la base del relativamente bajo promedio de años de estudio de la población hondureña, representan una gran desventaja para acceder a los beneficios de la cultura escrita y a un desarrollo personal pleno, que es un derecho humano esencial.

Hay varios proyectos que han venido luchando consistentemente contra el analfabetismo y en la atención a las personas que abandonaron prematuramente la educación escolarizada. Entre ellos hay que destacar el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Honduras (PRALEBAH) y EDUCATODOS.

## 7.3. EXISTENCIA DE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL ACCESO GENERAL A LA EDUCACIÓN

Un importante avance en materia de política educativa es la emisión de la Ley Fundamental de Educación, aprobada por el Congreso Nacional de la República mediante Decreto No. 262-2011, el 19 de enero de 2012. Esta ley, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de febrero de 2012, deroga y sustituye a la ya casi cincuentenaria Ley Orgánica de Educación, emitida mediante Decreto No. 79 de 14 de noviembre de 1966. El proceso de concertación fue dilatado. Esta ley culmina el largo proceso de concertación educativa

<sup>139</sup> UNESCO. *Datos mundiales*. cit.

<sup>140</sup> EL HERALDO, 6 de diciembre de 2012, p. 12

<sup>141</sup> LA TRIBUNA, 8 de diciembre de 2012, p. 12

<sup>142</sup> INE, EPHPM, mayo, 2012, "Educación. Cuadro No. 1 Tasa de analfabetismo y años de estudio promedio".



promovida por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) desde el año de 1998. A pesar de sus visibles beneficios para la educación hondureña, la dirigencia de los colegios magisteriales ha cuestionado la Ley Fundamental de Educación argumentando que viola algunos aspectos de la normativa establecida por el Estatuto del Docente.

Entre las características de la nueva ley se podrían mencionar las siguientes: (i) Busca fundamentar la actividad educativa del país en el derecho humano a la educación; (ii) Aspira a conformar un sistema nacional de educación de naturaleza integral, estructurado en diversos niveles y modalidades; (iii) Confirma, pero a la vez redefine, el Consejo Nacional de Educación, integrado por nueve miembros; (iv) Establece los lineamientos básicos del modelo educativo y el currículo, en el cual amplía la educación básica hasta el noveno grado y declara la gratuidad y obligatoriedad de la educación media o secundaria; (v) Prescribe un sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, el cual incluye la evaluación de los docentes; y, (vi) Permite la participación de la comunidad escolar, entendida como el conjunto de actores que tienen un interés directo en la buena marcha de los centros educativos, como los padres de familia y líderes comunitarios. En este último aspecto, recoge conceptos claves de la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y a la Participación Comunitaria, aprobada también por la presente administración.

El Estado ha promovido la creación de centros educativos para grupos con necesidades especiales. Hacia 2007 existían 46 organizaciones, asociaciones, fundaciones y centros de atención a estudiantes con discapacidades. Aunque algunos de estos centros reciben una subvención del Estado, en general el patrocinio proviene principalmente

de la empresa privada o de organizaciones no gubernamentales.<sup>143</sup>

El Estado ha promovido también la educación bilingüe e intercultural para atender las necesidades educativas de los grupos étnicos del país. Para este propósito, se creó en el año de 1997 el Programa Nacional de Educación para las Etnias y Población Afroantillana de Honduras (PRONEEAAH), el cual pasó a convertirse, a partir del año 2009, en la Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe. La mayor parte de los logros de esta iniciativa se han concentrado en el diseño y desarrollo curricular con textos y materiales de apoyo para la primaria completa en siete lenguas y la formación y capacitación docente en Educación Intercultural Bilingüe.<sup>144</sup> Según datos del Censo de 2001, los pueblos indígenas y afro descendientes eran alrededor de 473,531 personas, representando el 7.2% de la población hondureña.

#### 7.4. EL ESTATUS SOCIAL Y LABORAL DE LAS Y LOS MAESTROS

---

Las relaciones entre el Estado y el gremio de los maestros que trabajan en escuelas públicas están reguladas por el Estatuto del Docente, que fue aprobado mediante Decreto No. 136-97 del 11 de septiembre de 1997. El Estatuto del Docente concede a las y los maestros, privilegios como ajustes salariales periódicos y vacaciones pagadas.

El Estatuto del Docente tiene un peso significativo sobre las finanzas públicas. Por ello, ha sido motivo de activas controversias desde su aprobación.

A título de ejemplo, una de las estas confrontaciones. En el año 2010, el Estado propuso la desindexación temporal de las

---

<sup>143</sup> UNESCO. *Datos mundiales*. cit.

<sup>144</sup> *Ídem*.



cláusulas salariales de diversos estatutos profesionales, entre ellos, el de los maestros. La decisión, tomada para evitar el impacto que los aumentos tendrían en las finanzas públicas, fue recogida en el Decreto 224-2010 del Congreso Nacional de la República del 27 de octubre de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,352 de 29 de noviembre del mismo año. La medida tenía como base la declaración de estado de emergencia fiscal que se había realizado mediante Decreto Legislativo 18-2010 de 28 de marzo.

El conflicto se agravó con la redacción del artículo 136 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2011, contenido en el Decreto 264-2010 de 2 de diciembre de 2010, donde se dejaba en suspenso el Decreto 174-2000, de 30 de octubre de 2000, al cual se le atribuía ser el Estatuto del Docente, pero que en realidad era otro Decreto. El problema fue corregido hasta cuatro meses después, mediante la aprobación del Decreto 16-2011, de fecha 29 de marzo de 2011.

Ambos Decretos provocaron fuertes protestas y suspensiones de labores al inicio del año escolar 2011, particularmente durante los meses de febrero y marzo. A esto se agregó el reclamo por los reparos presentados por el Tribunal Superior de Cuentas contra maestros que presuntamente tenían irregularidades en pagos y puestos laborales. A esto hay que agregar la crisis actuarial y financiera del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y la aprobación de la Ley Fundamental de Educación durante el presente año 2012.

El desencuentro entre magisterio y gobierno de la República se extendió durante todo el año lectivo 2011, pasando por una huelga de hambre de varios maestros en el mes de mayo, quienes solicitaban el reintegro de 305 de sus compañeras y compañeros suspendidos sin goce de sueldo por dos y seis meses.

El Gobierno del Presidente Lobo Sosa ha tratado de inducir a los colegios magisteriales a no hacer uso de la huelga como principal estrategia de lucha para el logro de sus reivindicaciones. Con este propósito, el Estado ha llegado a convocar a las y los maestros a audiencias de descargo para disuadirlos de este estilo de lucha. Según lo planteado por Marlon Escoto, Ministro de Educación, este tipo de medidas va orientado a restaurar la gobernabilidad del sistema educativo nacional y cumplir la jornada laboral de 200 días al año.

## 8. DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL

El Derecho a participar en la vida cultural del país comprende: i) El goce de los beneficios de la cultura y del progreso científico por parte de la población en general; ii) La promoción de la identidad y la herencia cultural de los pueblos indígenas y Afrohondureños; iii) La protección de los derechos de los autores, inventores y artistas; y, iv) El respeto de la libertad académica, científica y artística.

### 8.1. DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN ACTIVIDADES CULTURALES

La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes fue creada en 1975 como la entidad encargada de formular las políticas y estrategias para la acción del Estado en materia cultural.<sup>145</sup>

Existen también otras instituciones cuyo quehacer está estrechamente relacionado con el ámbito de la cultura. Este es el caso, por ejemplo, de las dos principales universidades públicas del país, la Universidad Nacional

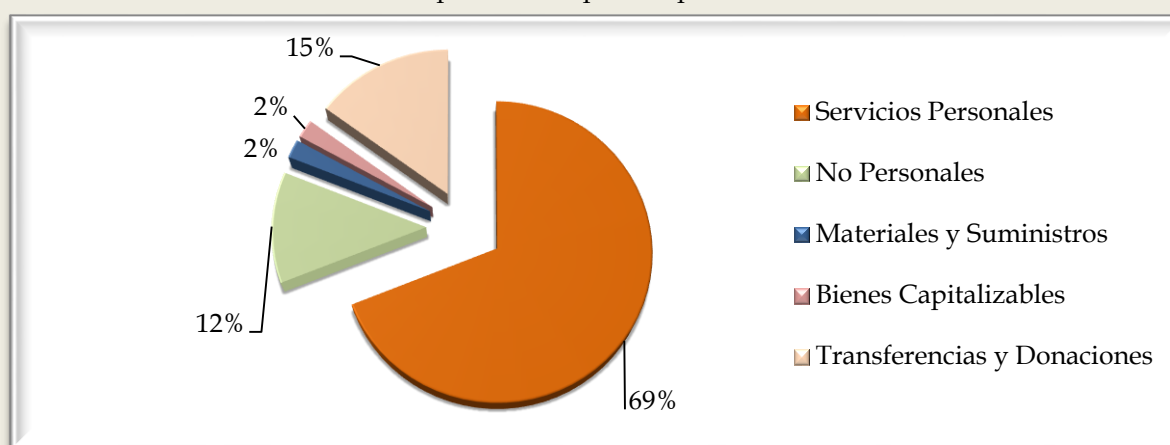
<sup>145</sup> Salvo los cuadros de presupuesto, la información para esta sección proviene de: Secretaría de Cultura. *Plan Nacional de Cultura 2002 – 2006*.

Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). También realizan actividades de promoción cultural, la Secretaría de Educación y varias corporaciones municipales del país. Dentro de la estructura de la actual Secretaría de Cultura, Artes y Deportes (SCAD), se encuentra también el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, una unidad desconcentrada del

Estado.

En un nivel aún más descentralizado de la estructura cultural, existe una red nacional de casas de la cultura en diferentes municipios y poblaciones, coordinado por la SCAD, y, el trabajo de fundaciones, centros y círculos privados que operan museos, grupos de teatro y otras iniciativas.

**Gráfico 33**  
Presupuesto 2011 por Grupo de Gasto.



Fuente: SCAD 2011.

**Presupuesto 2011 por Grupo de Gasto.**

Descripción de Programa	Servicios Personales	No Personales	Materiales y Suministros	Bienes Capitalizables	Transferencias y Donaciones	Total
Actividades Centrales*	24,929,220	7,380,925	812,974	399,000	12,735,500	L. 46,257,619
Dirección Gral. de las Artes	14,674,877	626,376	355,000	200,000		15,856,253
Bibliotecas, Archivos y publicaciones	10,160,138	493,068	378,000	820,000	328,300	12,179,506
Formación y Educación Artística	5,735,144	883,385	91,100	143,000	384,000	7,236,629
Radio Nacional y Cine	4,969,065	1,724,502	321,000	235,000		7,249,567
Dirección Gral. Cultura popular	3,846,882	457,744	88,000	53,000	126,000	4,571,626
<b>Total</b>	<b>64,315,326</b>	<b>11,566,000</b>	<b>2,046,074</b>	<b>1,850,000</b>	<b>13,573,800</b>	<b>L. 93,351,200</b>

\*Actividades Centrales: Despacho, Gerencia Administrativa, Secretaria General, Auditoria, Unidad de Proyectos y Unidad de Planificación y Gestión.

De las direcciones generales de la SCAD, dependen la Biblioteca, el Archivo y la Hemeroteca Nacionales y la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, las Escuelas Nacionales de Danza y Teatro, el Conservatorio Nacional de Música, la Radio Nacional de Honduras y el Centro de la Cultura Garinagu, un ente desconcentrado de la SCAD.

La Secretaría de Cultura, Arte y Deportes (SCAD), ha venido arrastrando, de su fundación, los problemas derivados de un presupuesto insuficiente. Los fondos disponibles son destinados básicamente para el pago de personal.

## **8.2. PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD Y HERENCIA CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS.**

En el ámbito institucional, la iniciativa más importante en lo relativo a los pueblos indígenas y afrohondureños del gobierno del Presidente Lobo Sosa es la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH). En términos legislativos, se trata de una reforma a los artículos 28 y 29 de la Ley General de la Administración Pública, realizada mediante el Decreto No. 203-2010, del 14 de octubre de 2010. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,364, del 12 de noviembre de 2010.

La SEDINAFROH tiene, en otras funciones, las siguientes: i) formular, coordinar, ejecutar y evaluar políticas públicas que fomenten el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y Afrohondureños; ii) proteger y fomentar sus identidades; iii) coordinar con las demás secretarías de Estado las actividades de desarrollo y beneficio de las comunidades indígenas y Afrohondureños; iv) promover la ratificación y cumplimiento por parte del Estado hondureño de los convenios internacionales sobre derechos indígenas; y, v) contribuir a erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y

otras formas conexas de intolerancia. SEDINAFROH está estructurada en dos Subsecretarías de Estado, una de Desarrollo Financiero o de Proyectos, y, otra, de promoción de políticas de igualdad.

## **8.3. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA**

El sistema de educación superior se ha ido expendiendo en los últimos años. Son las universidades públicas y privadas, la principal fuente para el desarrollo y la difusión de la ciencia y tecnología. Para ello, el sistema universitario nacional ha ido incrementando la oferta de maestrías y doctorados que capacitan para la investigación y creación del conocimiento.

Entre las universidades que tienen mayor proyección en el ámbito de la investigación se encuentran las siguientes: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la Escuela Agrícola Panamericana (EAP) y la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR). La clasificación iberoamericana de universidades, basada en el número de investigaciones y publicaciones, Ranking Scimago, ubicaba en 2011 a la UNAH en el puesto 492 de 1,369 universidades de Iberoamérica, y, en el lugar 393 de 1,219 universidades de América Latina y el Caribe. La EAP se ubicaba en el puesto 593 en Iberoamérica y 484 en América Latina. La UNAH se ubica entre las 10 mejores universidades centroamericanas de las 61 instituciones públicas y privadas que fueron consideradas para este *ranking*.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> *Ídem*.

### III. RESPUESTA INTEGRAL A LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

#### A. RECOMENDACIONES FORMULADAS DURANTE EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU)

El Estado de Honduras suscribe la Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993. Hace casi 20 años, Honduras asume el compromiso de diseñar e implementar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, sin que se concretizara el mismo. En ese sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su “Informe sobre Honduras, marzo 2010”, insta al Estado a formular un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos en estrecha cooperación con el Sistema de las Naciones Unidas y con la participación activa de la sociedad civil.

Es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la que asume el cumplimiento de este importante compromiso internacional. El 04 de Noviembre de 2010, Honduras comparece en tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a sustentar el Examen Periódico Universal y asume importantes compromisos voluntarios. El 17 de marzo de 2011, Honduras se presenta en segunda comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos, en el Examen Periódico Universal y se formulan 128 recomendaciones. Para darle seguimiento a las mismas se conformaron diversas mesas temáticas con la participación activa de representantes de Secretarías e instituciones del Estado, organizaciones, grupos metas y sectores de sociedad civil, academia, empresa privada y otros actores sociales.

A la fecha se han cumplido 68 de las 128 recomendaciones y 58 se encuentran en proceso de implementación. Un informe especial dará cuenta en detalle de este proceso.

#### B. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN

El Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en fecha 13 de abril de 2010, en Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-011-2010, mediante el cual se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), con los objetivos de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del veintiocho (28) de junio de dos mil nueve (2009), identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcionar al pueblo hondureño elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

El día 7 de julio del año 2011, la CVR en un acto público entregó al pueblo de Honduras y a los titulares de los tres poderes del Estado su informe final con los resultados de sus funciones y 84 recomendaciones divididas en 8 ámbitos: Reformas constitucionales, derechos humanos, fortalecimiento del Estado de Derecho, político electoral, combate a la corrupción, internacional, medios de comunicación social y preservación de la memoria histórica.

Sobre este particular, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó en su cuarta sesión plenaria del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones, celebrada el 7 de junio del año 2011, la Resolución número AG/RES. 2662 (XLI-O/11), mediante la cual reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a reducir la impunidad, promover y

proteger los derechos humanos. En dicha Resolución, se acoge con satisfacción la creación en varios Estados miembros de mecanismos extrajudiciales o *ad hoc*, como las comisiones de la verdad y la reconciliación, que contribuyen con el trabajo del sistema judicial, a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y valora la preparación y publicación de sus informes; asimismo, alienta a los Estados interesados a difundir y aplicar las recomendaciones formuladas por mecanismos nacionales extrajudiciales o *ad hoc* como las comisiones de la verdad y reconciliación y a vigilar su implementación en el ámbito interno.

En consonancia a esa Resolución el Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en Consejo de Ministros, el día 8 de noviembre de 2011 aprueba el Decreto Ejecutivo No. PCM-071-2011 .que crea la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (USCVR), con la finalidad de atender las recomendaciones contenidas en el Informe de la CVR.



Consejo de Notables: Señores Oscar Aníbal Puerto, Manuel Gamero, Donaldo Reyes Avelar, Enrique Aguilar Paz y Lea Azucena Cruz. (Derecha a Izquierda).

La USCVR y la Secretaría han impulsado la implementación de las recomendaciones con la participación activa de diversos actores de la sociedad civil. A la fecha se han cumplido 25 de las 84 recomendaciones, 43 están en proceso de implementación y en 16<sup>147</sup> no hay ningún nivel de cumplimiento.

<sup>147</sup> En 16 recomendaciones el nivel de cumplimiento depende de otros poderes y organismos internacionales.

## C. LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

### 1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

La Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se diseñó bajo el contenido siguiente:

#### 1.1 SEGURIDAD HUMANA, INTEGRA LOS DERECHOS SIGUIENTES:

- Derecho a la educación.
- Derecho a la salud.
- Derechos sexuales y reproductivos.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho al trabajo.
- Derecho a la vivienda adecuada.
- Derecho a la Cultura.
- Derecho al agua.
- Derecho al medio ambiente sano.

#### 1.2 SISTEMA DE JUSTICIA, CONTIENE LOS DERECHOS:

- Derecho a la vida.
- Derecho a la seguridad.
- Derecho a la integridad y libertad personal.
- Derecho a la justicia.
- Derecho a la verdad.

#### 1.3 DEMOCRACIA, DESAGREGA LOS DERECHOS:

- Acceso a la información.
- Libertad de expresión.
- Derecho a la participación.



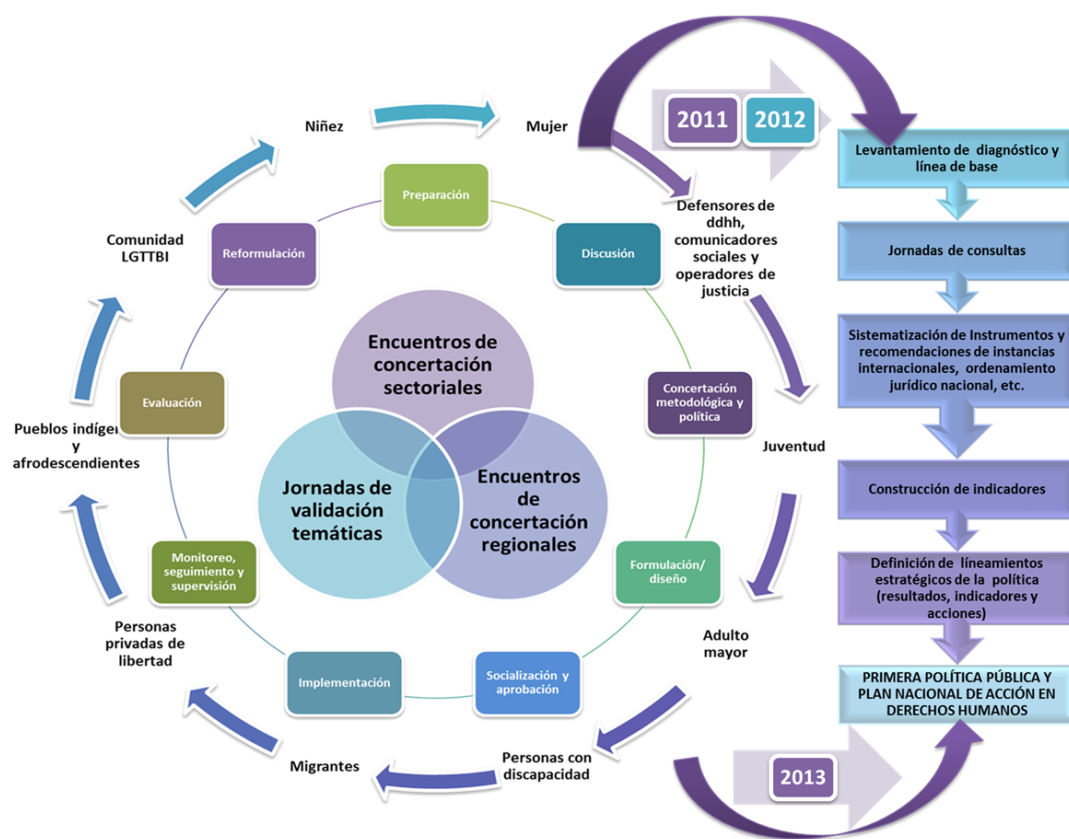
## 1.4 GRUPOS DE POBLACIÓN, ABORDA LOS SIGUIENTES GRUPOS DE POBLACIÓN:

- Niñas y niños.
- Jóvenes.

- Adultos mayores.
- Pueblos indígenas y afrohondureños.
- Mujeres.
- Migrantes.
- Comunidad LGBTTI.

## 2. PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Seguidamente se presentan los principales momentos del proceso de diseño de la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos humanos.



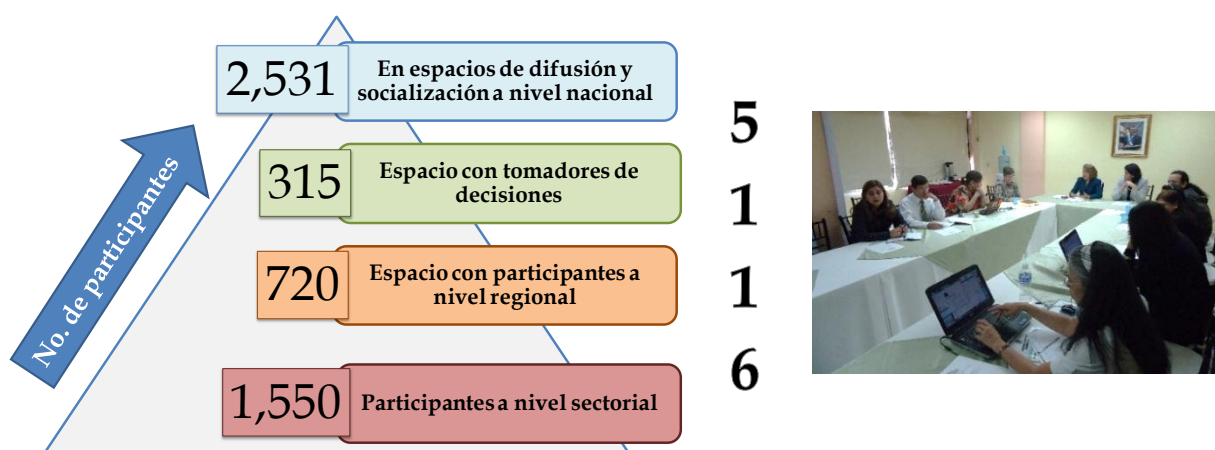
## 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA E INCLUYENTE

En el proceso que conduce al diseño de estos instrumentos han participado 5,116 personas pertenecientes a 399 instituciones de gobierno, 968 organizaciones, grupos y sectores de la sociedad hondureña, del cual resultaron 573 propuestas de la ciudadanía y de funcionarios públicos, 746 recomendaciones del Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos, 517 recomendaciones de informes y estudios especializados, 731 recomendaciones de 34 políticas públicas en diversos temas.



El diseño de la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos arrojó en cifras el resultado siguiente.

Evento	No. de Jornadas	No. Instituciones/ Dependencias Gubernamentales	No. Organizaciones de Sociedad Civil	No. De Propuestas	No. de Participantes
Jornada de consulta sectorial	33	36	273	298	1,550
Jornada de consulta Regional	14	187	338	132	720
Jornada de socialización y validación con tomadores de decisión	23	42	192	83	315
Otras Espacios de difusión y socialización.	110	134	165	60	2,531
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>399</b>	<b>968</b>	<b>573</b>	<b>5,116</b>

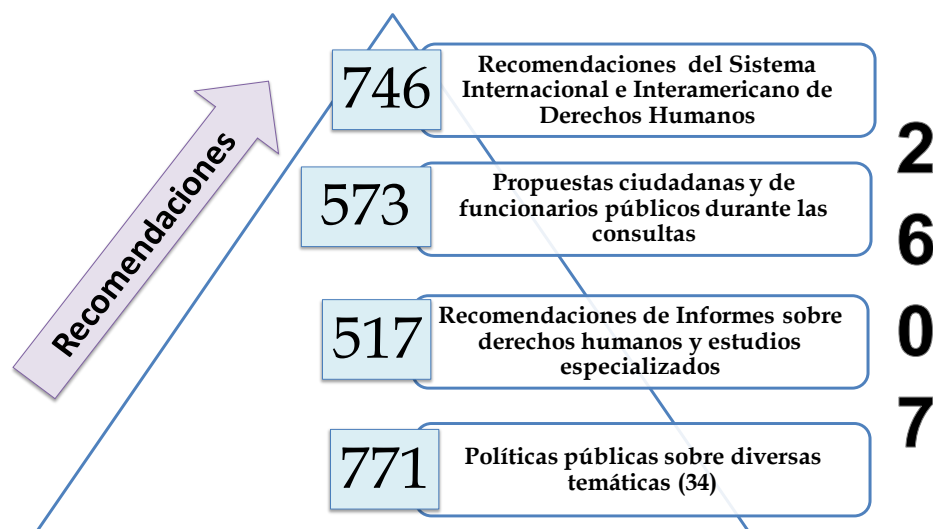


La Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en cifras (Jornadas de difusión y socialización).



## 4. SISTEMATIZACIÓN NORMATIVA EN DERECHOS HUMANOS

Ambas herramientas cuentan con una exhaustiva recopilación de las principales fuentes en derechos humanos, de las cuales las recomendaciones de los diversos mecanismos y procedimientos temáticos y las de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación tuvieron especial atención como se ilustra a continuación.



Tipo de Documento	No. De Documentos	No. De Propuestas
Estudios, Diagnósticos y Censos	130	Datos
Políticas Publicas sectoriales, informes y planes diversos	34	771
Instrumentos Jurídicos Nacionales	1,437	Datos
Instrumentos Jurídicos Internacionales	145	746
<b>Total</b>	<b>1,746</b>	<b>1,517</b>

## 5. ENTREGA OFICIAL DE LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

En el marco de la clausura del Segundo Congreso Nacional de Derechos Humanos celebrado el 10 de diciembre de 2012 se entrega al Presidente de la República, Lic. Porfirio Lobo Sosa el documento que contiene la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.



La titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos entrega al presidente de la República Lic. Porfirio Lobo Sosa la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

# CONCLUSIONES

## A. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Este es un informe que cubre los años 2011 y 2012, dos años claves del Gobierno del Presidente Porfirio Lobo Sosa. Hay que señalar, sin embargo, que muchos de los problemas encontrados tienen su substrato en tres condiciones históricas y estructurales de la sociedad hondureña: la pobreza y la inequidad en la distribución de los ingresos y los activos productivos y la impunidad.

La crisis política que atravesó el país a partir del 28 de junio de 2009 en el marco de la ruptura del orden constitucional, dejó al descubierto graves violaciones a los Derechos Humanos que existían en el país y que se agudizaron con la crisis. Además, se elevaron los niveles de criminalidad y la violencia contra las personas.

Cabe el mérito al Presidente de la República y sus colaboradores y colaboradoras, el haber tomado medidas concretas para enfrentar los desafíos de la polarización política y social, el aislamiento internacional, la crisis económica y grave deterioro de la situación de los derechos humanos, como consecuencia de la crisis institucional que culminó con el golpe de Estado de junio de 2009. Este es un aporte invaluable a la tarea, siempre renovada, de construir una nación democrática con justicia social.

Durante el período analizado por el presente informe, se observa un incremento en los homicidios ocurridos contra el gremio de profesionales del derecho, comunicadores sociales, miembros de la comunidad de diversidad sexual, mujeres, personas bajo custodia en los centros penales y los sucedidos en el Valle del Bajo Aguán en el marco del conflicto agrario. Sin embargo, es necesario aclarar que, con respecto a varios de estos colectivos, esta problemática se ha manifestado desde fechas muy anteriores al período estudiado por este informe. Tales el caso de las muertes de periodistas y personas privadas de libertad que han sido documentadas por varias organizaciones desde 2003, o la de miembros de la diversidad sexual, desde 2008.

En la actual situación de derechos humanos, aparece como un problema recurrente, especialmente en el escenario de muertes violentas, la falta de una investigación efectiva. Si el Estado de Honduras, a través de los órganos competentes del sistema penal (Ministerio Público, policía de investigación y Poder Judicial), no investiga, enjuicia y juzga seria y adecuadamente todos los casos por violación al derecho a la vida, se corre el riesgo de que estas muertes sean percibidas como privaciones arbitrarias del derecho a la vida, con la consiguiente responsabilidad internacional que ello conllevaría.

El tipo de homicidios reportado, y particularmente la falta de respuestas de las instituciones del sistema penal, se convierte no sólo en un problema de seguridad que afecta a los derechos más esenciales, como la vida, la integridad y la libertad. Tiene también impacto en otros derechos fundamentales, como la libertad de pensamiento y expresión (en el caso de los comunicadores sociales) y el principio de igualdad y no discriminación (en el caso de las mujeres y los miembros de la comunidad de la diversidad sexual).

La impunidad es un problema estructural históricamente presente en la sociedad hondureña, largamente incubada y arraigada. Constituye uno de los principales factores que favorece y perpetúa la cultura de

irrespeto a los derechos humanos, vulnerando y debilitando directamente el sistema nacional de protección de los derechos humanos. Es por ello que, para disminuir los altos índices de violencia e impunidad que vuelven ilusorio el derecho de acceso a la justicia en nuestro país, resulta impostergable la reforma profunda de los sectores de seguridad y justicia.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha promovido activamente la puesta en marcha del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), el nombramiento de sus miembros y su fortalecimiento presupuestario. Este último aspecto, requiere de mayor apoyo por parte del Gobierno de la República.

En el caso de las personas privadas de libertad, vale mencionar que entre 1997 y 2004, hubo una reducción en la mora judicial y el porcentaje de personas sin condena en casi cuarenta puntos porcentuales entre 1997 y 2004. Esta reducción se debió a la introducción de una serie de políticas y medidas concretas y focalizadas en el sistema penal. Entre estas hay que destacar la creación del Ministerio Público, la emisión de la Ley del Reo sin Condena, el nombramiento de jueces supernumerarios para evacuar las causas pendientes, el fortalecimiento del Programa de la Defensa Pública, la aprobación del Código Procesal Penal y el nombramiento de jueces de ejecución penal. Sin embargo, en los últimos años se advierte un cierto estancamiento en este proceso. Debe revisarse la situación del sistema penitenciario para determinar si se trata de un incremento constante de las personas procesadas, lo cual ha terminado por rebasar aún los recursos y los instrumentos que permitieron un avance, o si es en cambio un problema de efectividad en los mecanismos y actores del sistema penal, o una combinación de ambos factores.

La aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional que crea el Instituto Nacional Penitenciario, constituye un avance muy importante para establecer un régimen de prisiones más humano, orientado hacia la rehabilitación, readaptación y reinserción como derecho humano y dirigido por un órgano especializado en la administración de los centros penitenciarios y custodia de las personas privadas de libertad.

Esta Secretaría de Estado considera su deber advertir sobre los retos que se avizoran en este período de transición. Entre los más importantes desafíos se encuentran la necesidad de ubicar los recursos económicos para echar a andar el Instituto Nacional Penitenciario, sus programas y dependencias, y, el destino que se dará al personal actual proveniente de la Secretaría de Seguridad, actualmente responsable de la custodia.

El nuevo personal que sea contratado incluyendo a los miembros de la Comisión de Transición ordenada en el marco de la mencionada Ley deberá cumplir con requisitos de idoneidad profesional y personal, alejando en el reclutamiento todo criterio de clientelismo partidario. Durante las últimas dos décadas, se pueden encontrar en la administración pública hondureña ejemplos de nuevas instituciones que defraudaron las expectativas que de ellas se tenía, precisamente porque absorbieron el personal y la cultura laboral de sus antecesoras o fueron saturadas por activistas políticos sin preparación ni compromiso. Debe evitarse a toda costa que esto suceda con el nuevo Instituto.

Una medida importante adoptada por el Congreso Nacional de la República es la aprobación de la Ley contra la Trata de Personas, mediante Decreto No. 59-2012 de fecha 25 de abril de 2012, cuya práctica inhumana, en no pocos casos, deviene verdaderamente una forma contemporánea de esclavitud. Dentro de las medidas que establece la nueva legislación se encuentra la creación de la Comisión

Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, como órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, e integrado por varias instancias gubernamentales, municipales y de la sociedad civil. Esfuerzo que debe tener el mayor respaldo posible para su debido funcionamiento.

Honduras ha podido garantizar a sus ciudadanas y ciudadanos el derecho de elegir y ser electo. Durante los últimos años, hemos asistido a dos elecciones: i) las elecciones generales para salir de la crisis política generada por el derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009, y, ii) las elecciones primarias para seleccionar las y los candidatos a las elecciones generales de noviembre de 2013.

Como se sabe, en las elecciones generales de noviembre de 2009 salió electo el Presidente Porfirio Lobo Sosa. El mismo día en que tomó posesión de la Presidencia de la República, mostró su voluntad de construir un gobierno de unidad nacional, asegurando de esta forma el derecho y la posibilidad de las y los ciudadanos de acceder, en condiciones generales de igualdad, a cargos públicos rompiendo el criterio político - sectario que ha regido para la escogencia del gabinete de gobierno. Históricamente en nuestro país se ha instaurado un gobierno de partidos en vez de un gobierno de unidad como lo manda la Constitución de la República e Instrumentos Internacionales. El principio de democracia participativa, que regula nuestra Constitución, es un llamado al gobierno que resulta electo por la voluntad mayoritaria del pueblo para que comparta funciones en la administración pública con miembros de los partidos de oposición, grupos minoritarios y demás sectores.

Dos acciones mostraron con claridad su voluntad política de reconciliación nacional. En primer lugar, lideró personalmente la salida del país en dirección a la República Domingo del expresidente Manuel Zelaya Rosales que había permanecido durante varios meses en la Embajada de Brasil en Honduras. En segundo lugar, nombró como Ministros en su gobierno a los candidatos de los partidos políticos que habían sido sus rivales en las elecciones generales. Cuando uno de ellos no aceptó integrar su gobierno, le pidió que nominara a miembros distinguidos de su partido político para que ocupara una cartera ministerial.

La voluntad política del Presidente Lobo Sosa fue clave para la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático celebrado el 22 de mayo de 2010 con los Presidentes de Colombia y Venezuela para que el expresidente Zelaya Rosales pudiera retornar al país y para la inscripción legal del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), del cual es su coordinador. El Partido LIBRE fue inscrito legalmente el 20 de octubre de 2011. En dicho acuerdo se destaca “la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras, hacer seguimiento a las recomendaciones hechas a Honduras como resultado de haberse sometido al Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y coordinar y concertar la cooperación y apoyo de Naciones Unidas y otros organismos internacionales para fortalecer las políticas públicas y las capacidades nacionales para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Honduras”.

En las elecciones internas del 18 de noviembre de 2012 participaron tres partidos políticos: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre. El Estado hondureño financió estas elecciones en las cuales participaron 14 corrientes internas y más de dos millones de votantes. Es así que para las elecciones generales de noviembre de 2013 ya han sido seleccionados los candidatos de los tres partidos políticos



que participaron en las elecciones internas: Juan Orlando Hernández, por el Partido Nacional, Mauricio Villeda por el partido liberal y Xiomara Castro por el Partido LIBRE.

Todavía se encuentran pendientes de elección los candidatos de los partidos políticos que no participaron en las elecciones internas del 18 de noviembre de 2012. Ya se encuentran igualmente seleccionados los candidatos a diputados al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano y los candidatos de autoridades edilicias.

Los hondureños y hondureñas se aprestan para seleccionar en las elecciones de noviembre de 2013 a sus representantes a los cargos de elección popular. Su derecho a elegir y ser electos ha sido garantizado por el gobierno del Presidente Lobo Sosa.

## **B. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

En el derecho al trabajo vale señalar que uno de los factores que se relacionan con la calidad del empleo es el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que participa en el sector formal de la economía, frente a aquel que lo hace en el sector informal. De cada 100 ocupados/as, 45 efectúan sus actividades laborales a cambio de un salario pagado por un patrono, 40 lo hacen por cuenta propia, generando su empleo, y, 15 son trabajadores (as) no remunerados, vale decir, personas que trabajan de alguna forma pero que no reciben un pago en metálico a cambio.

Desde el sector informal es muy difícil generar un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas. Estos empleos tampoco participan en ningún sistema de previsión social. Está claro que la calidad del empleo termina teniendo un impacto no sólo en el disfrute del derecho al trabajo, sino también en los derechos a un nivel de vida adecuado y en el de la seguridad social. Se trata de lo que ha sido denominado un empleo precario.

Con el propósito de generar más puestos de trabajo, el Congreso Nacional de la República de la Ley del Programa Nacional de Empleo por Horas, el 4 de noviembre de 2010, mediante Decreto No. 230-2010. Este programa fue concebido como un programa temporal, anti-crisis y su prolongación, quedo condicionada a los resultados que se obtengan durante su implementación.

El programa ha sido objeto de fuertes críticas por dos de las centrales obreras, las que han pedido su revisión a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por considerar que al flexibilizar el mercado de trabajo se estarían lesionando derechos de las y los trabajadores e infringiendo convenios de la OIT que se encuentran por encima de la legislación nacional. De acuerdo a información de la Secretaría de Trabajo y la Seguridad Social y los gremios empresariales, cerca de mil empresas manifiestan haber hecho uso del Programa Nacional de Empleo por Horas, generando, hasta abril de 2012, 15,334 empleos, el 69% de los cuales se concentra entre la población joven. Con relación a las expectativas futuras del programa, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social reporta que se ha orientado a 2,223 empresas sobre esta iniciativa.

Debe destacarse positivamente, la suscripción en enero de 2012 de dos acuerdos entre los representantes de los sectores patronal, obrero y público. El primero, es el “Acuerdo tripartito sobre la revisión del salario mínimo para los años 2012 y 2013” y el segundo, es el “Acuerdo de protección, estabilidad del empleo, fortalecimiento del sector laboral y empresarial de la maquila hondureña”. Ambos fueron



recogidos en el Acuerdo STSS 001-2012, emitido por el Presidente de la República, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Mediante el primero, se fijó el salario mínimo para dos años, llegándose incluso a establecer el de 2014, para empresas adheridas al régimen de zonas libres.

Deben señalarse dos componentes estructurales que afectan la satisfacción del derecho al trabajo en su dimensión de derecho a condiciones equitativas y satisfactorias en el empleo. El primero de ellos tiene que ver con el monto del salario. En este sentido, tanto el artículo 128, numeral 5 de la Constitución de la República como el Convenio No. 131 de la OIT, relativo a la fijación del salario mínimo, adoptado desde 1970 pero aún no ratificado por Honduras, prescriben que entre los elementos que habrán de tenerse en cuenta para determinar el nivel del salario mínimo están las necesidades de las y los trabajadores y sus familias. Si se tiene en cuenta que para marzo de 2011, el INE fijaba en 2,681.00 Lempiras mensuales el costo de la canasta básica personal en el área urbana y que la misma institución nos indica que la tasa de dependencia, es decir, el número de personas que son mantenidas por cada individuo ocupado, es de 2.5, un simple ejercicio aritmético basta para enterarse el salario mínimo vigente es insuficiente para cubrir estas necesidades. El segundo elemento estructural es que sólo el 45% de la PEA está constituida por asalariados del sector formal. En este contexto, hay que observar que trabajo doméstico continúa estando excluido de las regulaciones sobre el salario mínimo.

El IHSS manifiesta un problema crónico de cobertura que tiene su causa principal en la estructura misma del mercado de trabajo en Honduras. Generalmente, los sistemas de previsión se sustentan en un aporte tripartito del trabajador, el patrono y el Estado. Pero, como ha quedado indicado, en el caso hondureño, solamente un 45% de la PEA se ubica en el sector formal de la economía. Si se analiza el alcance del régimen de invalidez, vejez y muerte, sólo el 15.12% de la PEA está cubierta, lo que equivale al 34.55% de la población asalariada. En este contexto, la limitación en el número de cotizantes tiene un impacto en la cantidad y calidad de servicios ofrecidos y en la cobertura geográfica de la institución.

Una proyección actuarial realizada por un experto internacional ya hace cerca de quince años, asumía, en un escenario de baja cobertura, que es por cierto al que más se acercan las cifras reales de la actualidad, que para el año 2050, aunque el IHSS llegase a tener 1,8 millones de cotizantes, sólo estaría cubriendo un 20% de la PEA.

Con relación a las políticas y planes para incorporar a los sectores no cubiertos actualmente por la seguridad social, puede afirmarse que existe una política de Estado, expresada al más alto nivel normativo en tres artículos de la Constitución de la República (142, 143 y 144), y, más recientemente reafirmada en el texto de la Política de Protección Social (PSS), aprobada el 18 de marzo de 2012 mediante Decreto Ejecutivo PCM 008-2012. El que el Estado de Honduras manifieste su voluntad de reconocer y hacer efectivo el derecho a la seguridad social, ciertamente es un paso fundamental, pero se necesita ahora un plan específico que guíe a la institucionalidad del sector social en la realización gradual, pero concreta, de este objetivo.

El 15 de febrero de 2011, mediante Decreto Ejecutivo PCM 011-2011, el Presidente de la República en Consejo de Ministros adoptó la Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas como la política nacional en la materia. Desde la perspectiva de las políticas generales del Estado, esta Hoja de Ruta busca su anclaje en la Visión de País y Plan de Nación, aspirando a la vez a su entrelazamiento con otras políticas sectoriales, especialmente aquellas sobre pobreza, educación y salud.

La Hoja de Ruta es un verdadero plan de acción para erradicar gradualmente esta problemática en el país, pues señala los objetivos, resultados, indicadores, metas y estrategias fundamentales para lograrlo. Ha sido construida con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien la enmarca en una iniciativa regional latinoamericana más amplia, el apoyo financiero de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID) y a través de la consulta con una gran cantidad de instituciones del Estado, organizaciones no-gubernamentales, centrales de trabajadores y asociaciones empresariales hondureñas. El seguimiento, monitoreo y evaluación de su cumplimiento recae sobre la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el apoyo de la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil (Decreto PCM 17-98) y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas.

Con respecto a la protección de la familia, la maternidad y la niñez, el Estado de Honduras ha ratificado los dos grandes pactos de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos son de 1966. Ha ratificado también la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; el Convenio OIT sobre la Edad Mínima de Trabajo, de 1973 (No. 138) y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, de 1999 (No. 182). Honduras enfrenta un serio desafío en materia de embarazo en adolescentes. Ocupa el segundo lugar de América Latina en Adolescentes embarazadas. El embarazo en adolescentes ha vuelto a colocar el tema de las guías sobre sexualidad para estudiantes de educación secundaria en el centro del debate público.

El Instituto Nacional de Estadística reporta que, para mayo de 2012, el 66.5% de los hogares hondureños viven en pobreza y el 46%, en condiciones de extrema pobreza. Aún más preocupante resulta conocer que durante la última década, el estándar de vida de la población apenas ha mejorado, y que, independientemente de los ligeros progresos observados durante la segunda mitad del decenio, los indicadores actuales son muy similares a los de 2001.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como el “Bono Diez Mil” que ejecuta la Secretaría del Despacho Presidencial, son sumamente importantes en vista que si las y los beneficiarios aprovechan la oportunidad, verán mejorados sus ingresos, consumirán más y permitirán la mayor actividad del mercado interno, particularmente en los sitios alejados de los centros más dinámicos de la economía.

El Poder Ejecutivo, a través de la acción personal del señor Presidente de la República y de los esfuerzos realizados por el Instituto Nacional Agrario, ha invertido una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en lograr los acuerdos con las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, consiguiendo, en la medida de lo posible, encontrar arreglos aceptables para las partes, incluyendo las empresas agroindustriales, y permitiendo con ello aliviar también los problemas de violencia en el sector. Para evitar un mayor derramamiento de sangre en las zonas de conflicto deberá promoverse un debate serio para definir políticas y ejecutar medidas para atender el derecho de acceso a la tierra, a la seguridad ciudadana y a un nivel de vida adecuado.

Honduras cuenta con un Programa Ampliado de Inmunización (PAI) hondureño había sido reconocido como el mejor de Iberoamérica, al alcanzar una cobertura de 95%. En este sentido, durante el mes de abril de 2012, se recibió el reconocimiento de la Fundación Bill y Melinda Gates, por cuyo apoyo se han introducido las vacunas contra el neumococo y el rotavirus en el cuadro de inmunización del país.

Esta es un área que sucesivos gobiernos han mantenido como prioritaria y esa continuidad ha permitido avances paulatinos, pero constantes, hacia una cobertura ya cercana al total de niños y niñas en edad de recibir sus vacunas. El éxito en la cobertura de los programas de vacunación constituye una experiencia exitosa de mejoramiento de las condiciones de vida de la población hondureña, que bien podría utilizarse como modelo para estructurar consensos, por ejemplo, en torno a la educación de las y los niños.

Desde la perspectiva de derechos humanos, uno de los temas de salud que ha suscitado mayor debate durante los últimos tres años, ha sido el uso o no de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), por lo que, deberá generarse un debate científico para adoptar las medidas que respondan a las pretensiones del movimiento de mujeres.

Durante el segundo trimestre de 2012 se han incrementado las denuncias sobre falta de medicamentos en los centros asistenciales públicos. Entre los más afectados por esta carencia se encuentran los pacientes con enfermedades crónicas y/o graves. Por otra parte, los miembros del Comité de Acceso para la Atención Integral de las Personas con VIH-SIDA, interpusieron denuncias ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por los casos de al menos 19 pacientes cuya terapia antirretroviral no está funcionando. El fracaso del tratamiento se presenta en pacientes en los que el VIH ha desarrollado resistencia a los medicamentos que están tomando. Es por eso que los representantes de este colectivo han reclamado tanto el cambio de medicamentos como una atención integral que incluya las pruebas de laboratorio necesarias y los reactivos para dichos estudios.

No se ha desarrollado en el país una práctica de calcular y recoger información e indicadores de cultura, comunicación, ciencia y tecnología. Dichos indicadores tiene que ver con inventarios, encuestas y cálculos que nos señalen, sólo por citar algunas variables, las cantidades, ubicación geográfica, visitantes y tasas por habitantes de museos, bibliotecas, centros de documentación y archivos, estaciones de televisión y radio, cines, auditorios, teatros, casas de cultura, asociaciones gremiales culturales, libros publicados y discos grabados (en formatos tradicionales o electrónicos), centros de promoción de las culturas autóctonas, sitios de patrimonio histórico y cultural, acceso de la población a Internet, participación de la niñez y juventud en la vida cultural y otras similares.

Esta es una labor sumamente importante que debería ser emprendida por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes con apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa y otras instituciones nacionales e internacionales pertinentes. Si no se cuenta con indicadores de partida, es muy difícil conocer objetivamente la situación en que se está, fijarse objetivos y metas de mejoramiento y evaluar si la acción cultural del Estado tiene algún tipo de rumbo.

Finalmente, se reconoce que después del 28 de Junio de 2009, Honduras vive un deterioro en la situación de los Derechos Humanos. Es una política del Gobierno de la República en general y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en particular la promoción de una cultura de respeto a los Derechos Humanos, al respecto los esfuerzos estatales han sido muchos, pero desafortunadamente, no han sido suficientes para plenamente los mismos, no obstante, existe el compromiso renovado de continuar avanzando hacia una mejora en la materia.

## BIBLIOGRAFÍA SUMARIA

- Constitución de la República.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
- Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- ALCANTARA SAEZ, Manuel, *Experimentos de democracia interna: las primarias de partidos en América Latina*, Working Paper No. 293, Kellogg Institute, 2002
- ANAYA, Alejandro, et. AL., *Glosario de términos básicos sobre derechos humanos*, Universidad Iberoamericana, México, 2006
- CALDERON PADILLA, Rutilia, “El crecimiento y desarrollo de la educación superior en Honduras”. *Innovación Educativa* 11 (57), oct. – dic. 2011
- CARCEDO, Ana (coordinadora), *No olvidamos ni aceptamos: femicidio en Centroamérica 2000-2006*, Asociación Centro Feminista de Información y Acción, San José, Costa Rica, 2010
- CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES (CDM) / COALICION HONDUREÑA DE ACCION CIUDADANA (CHAAC). *Impacto del libre comercio en los derechos laborales de las obreras de la maquila textil en Honduras*. San Pedro Sula, 2009
- COMITÉ DESC, “Observación general número 3 sobre La índole de las obligaciones de los Estados partes” E/1991/23, 1990
- DURAN-VALVERDE, Favio, *Evaluación actuarial del régimen IVM del IHSS y estimación de costos de la reforma*, Fundación Friedrich Ebert (Honduras), San José, Costa Rica, 2000
- ESPACIO DESC, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH-México), *Los derechos económicos, sociales y culturales: exigibles y justiciables*, México,, 2010
- FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACION (UNFPA), *Estado de la población mundial 2012*, Nueva York, 2012
- DIAZ PEDROCHE, Montse, *Los derechos humanos*. Disponible en <http://montsepedroche.files.wordpress.com/2010/04/derechoshumanos.pdf>
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS). OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA. UNAH, *Mortalidad y otros*. Boletín 24 (enero-diciembre 2011)
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, *Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples*, mayo, 2012

- INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES, *Informe final elecciones generales de Honduras 2009*, Washington, 2010
- INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, *Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir en el sistema interamericano*, Costa Rica 2007.
- MEJIA, Mario Hernán, *Indicadores culturales en Centroamérica*, UNESCO y CONACULTA, México, 2005
- NIKKEN, Pedro, “El concepto de derechos humanos”. Disponible en <http://www.iidh.ed.cr/documentos/HerrPed/pedagogicaspecializado/el%20concepto%20de%20derechos%20humanos.htm>
- OCHOA, Rigoberto, *Guía metodológica para el enfoque de derechos humanos en políticas públicas y planes sectoriales*, Sistema de Naciones Unidas, Tegucigalpa, s.f
- OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Los derechos económicos, sociales y culturales*, New York, 2004
- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). *Situación de salud en las Américas: Indicadores básicos*. 2007. En: [http://www.paho.org/spanish/dd/ais/IB\\_2007\\_SPA.pdf](http://www.paho.org/spanish/dd/ais/IB_2007_SPA.pdf)
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), *Trabajo infantil en Honduras: Síntesis de estudios de línea de base*, San José, Costa Rica, 2004
- PÉREZ MUNGUÍA, A. *Los derechos económicos, sociales y culturales: reflexiones sobre su concepto y situación en Honduras*. Tegucigalpa: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH) / Diakonía, Acción Ecueménica Sueca, Diciembre 2003.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano*, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2000
- *Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras, 2011*, Litografía e Imprenta Lil, San José, Costa Rica, 2012
- PROGRAMA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA CENTROAMERICA (PRESANCA II), *Centroamérica en cifras: datos de seguridad alimentaria nutricional y agricultura familiar, diciembre de 2011*
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). *Datos mundiales de educación*. VII Ed. 2010/2011. IBE/2010/CP/WDE/HO
- SECRETARIA DE CULTURA, *Plan Nacional de Cultura 2002 – 2006*, Tegucigalpa, 2002.
- SECCION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA OFICINA DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *La sociedad civil*, Ginebra, s.f.
- VILHENA VIERA, Oscar y Scott DuPree, *Reflexión sobre la sociedad civil y los derechos humanos*. Disponible en <http://www.surjournal.org/esp/conteudos/artigos-oscar.htm>



# SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS



## Decreto Legislativo No. 177-2010

Reforma a la ley General de Administración Pública mediante la cual se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos.

## Decreto Ejecutivo PCM-027-2011

Reforma al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

## Misión

Rectorar e impulsar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo en materia de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, a través de la promoción de políticas públicas, con el fin de generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos, que se fundamente en el principio de la dignidad de la persona humana, como base del desarrollo social y democrático.

## Visión

Ser la Institución del Estado que rectora, orienta e impulsa la Política Nacional, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con las instituciones, demás órganos del Estado, y la participación de organizaciones de la Sociedad Civil.

Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos

Tel. (504) 2235-5123 ext. 129  
Fax: (504) 2235-5124

## Dirección:

Col. Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica entre BAC-BAMER y BANHCAFE, antiguo local de CARE-Honduras.

## Dirección de Contacto

contacto@sjdh.gob.hn  
Sitio Web:  
www.sjdh.gob.hn



Publicación con el auspicio de:



Foreign Affairs and  
International Trade Canada